

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

La violencia y la criminalidad en Latinoamérica. Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Jaime José Paterson Pardo

Resumen

El incremento de la delincuencia violenta en Latinoamérica ha suscitado numerosos debates sobre la seguridad pública en la región. El origen del problema es muy diverso y complejo, asociándose en todos los casos a pobreza, desigualdad social extrema, debilidad del Estado y niveles bajos de gobernabilidad.

A pesar de la amplia bibliografía existente sobre el tema, se echa en falta un análisis centrado en aislar la principal causa de las altas tasas de violencia. Por ese motivo, este trabajo se centra en la identificación del factor más influyente en el desarrollo del fenómeno violento, para lo que inicialmente se efectúa un análisis general de los principales factores sociales e institucionales que contribuyen a la grave situación de violencia que vive la región en su conjunto y las principales estrategias políticas aplicadas por los algunos de los gobiernos de la zona.

Posteriormente, se analiza comparativamente la situación de los países del Triángulo Norte de América Central con Costa Rica y Nicaragua, abarcando los actores violentos, las políticas puestas en marcha en los países y los principales factores sociales e institucionales asociados a la violencia, que afecta de forma radicalmente distinta a los tres primeros respecto a los otros dos. La similitud de estos países en cuanto a tamaño, población y ubicación dentro del continente permite evitar, en cierto modo, que la gran diversidad del conjunto de la región afecte al estudio.

El trabajo demuestra que la debilidad estatal es el factor determinante que favorece el desarrollo del fenómeno violento en la zona, y que suele estar asociada a la ineficacia y corrupción de los cuerpos policiales, del sistema judicial y penitenciario; y un escaso apoyo social a las instituciones del Estado. Todo ello favorece la implantación de los actores violentos y la impotencia del Estado y la sociedad a la hora de hacerles frente.

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

Palabras clave: Debilidad estatal; violencia; seguridad pública; Latinoamérica; debilidad institucional; gobernanza.

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

LA VIOLENCIA Y LA CRIMINALIDAD EN LATINOAMERICA. INTRODUCCIÓN.

Planteamiento e hipótesis del trabajo

América Latina está considerada como la región más violenta del mundo y la más desigual a pesar de la positiva evolución económica que se viene produciendo en la región, tal y como lo demuestra el estudio efectuado por Lagos y Dammert¹ en el que se efectúa un análisis del resultado del Latinobarómetro de 2011² y reflejado también posteriormente, por los datos del Índice de Desarrollo Humano³ del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

También se refleja esta circunstancia en un documento elaborado por la oficina de Evaluación y Supervisión del Banco Iberoamericano de Desarrollo⁴, en el que las estadísticas analizadas por el documento recogen tasas de homicidios de 25 por cada 100.000 habitantes en América Central, 1 en el Caribe y 22 en América del Sur, tan solo comparables a las tasas arrojadas por estudios similares en el continente africano.

Durante la última década algunos países latinoamericanos como México, Brasil, Colombia, Honduras, El Salvador o Guatemala, han tratado de reducir los niveles de violencia e inseguridad poniendo en práctica políticas represivas, también denominadas de “Mano Dura”. Estas estrategias, basadas en la actuación contundente, y también violenta, de los cuerpos policiales y/o militares responsables de la seguridad ciudadana, han tratado de obtener resultados visibles de forma rápida y con la mirada puesta en los siguientes procesos electorales que pudiesen tener lugar, antes de ser fruto de un meditado debate que las ponga en práctica para atajar definitivamente el problema y con un enfoque a medio o largo plazo.

Las medidas de Mano Dura aplicadas aisladamente y enfocadas casi en exclusividad contra los delincuentes y las organizaciones criminales como centro del problema, han resultado insuficientes. Puede decirse que más que una solución han generado, como es el caso de México y varios de los países de América Central, un incremento desmesurado de la violencia⁵.

Esto se debe a que, como se indica en el informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)⁶, el incremento del delito y la violencia en la región tiene su origen en múltiples causas: cambios en la urbanización; aumento de la desigualdad, en lo que se refiere a ingresos y también a oportunidades; brecha entre expectativas y oportunidades para los jóvenes; la fragmentación familiar; y la falta de modelos apropiados. Todas estas se

¹ (Lagos & Dammert, 2012)

² (Corporación Latinobarómetro, 2011)

³ (Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, 2013)

⁴ (Oficina de Evaluación y Supervisión, 2013)

⁵ (Moloeznik, 2005); (Zepeda Lecuona, diciembre 2010); (Ríos & Shirk, 2011).

⁶ (Oficina de Evaluación y Supervisión, 2013).

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

mantienen en el ámbito social, pero también se hace referencia a otras como la ineficacia e insuficiencia de reformas adecuadas en el ámbito policial, institucional y de prevención del delito, lo que favorece que se mantengan deficiencias en el sistema dedicado al control y prevención del delito, como las altas tasas de corrupción.

En definitiva, puede afirmarse que la violencia no está causada solo por una serie de factores aislados, sino por un conjunto de ellos interrelacionados y entrelazados en estructuras y procesos a nivel macro y micro⁷.

Del análisis de diversos estudios⁸, se deduce que las estrategias puestas en marcha para reducir de forma efectiva las altas tasas de violencia y criminalidad, deben incluir unas políticas complementarias – preventivas - a las meramente represivas y abarcar un campo social e institucional muy amplio. Es decir, deben ser de carácter integral y multisectorial, contando con el apoyo sinérgico de todos los estamentos del país, políticos, sociales, institucionales e internacionales.

Sin embargo, en dichos estudios no llega a determinarse con claridad cuál de todos los factores que se recogen como causantes de la violencia tiene una mayor importancia relativa sobre el resto, algo crucial si se pretende establecer una priorización de las distintas actuaciones que engloban las estrategias de seguridad pública que se desee implantar. En multitud de ocasiones, los trabajos se centran en enumerar una serie de causas, que interaccionan entre sí y que aparentemente tienen un efecto similar sobre el fenómeno violento, constituyendo un conjunto causal cuyo resultado final arroja unas tasas violentas muy elevadas.

Si bien es cierto que la diversidad de Latinoamérica es muy grande, es preciso efectuar un análisis del conjunto de factores y causas de la violencia y la implantación de los actores violentos en los distintos países y sociedades. Este análisis tiene por objetivo determinar el origen común a la mayor parte de ellos y la influencia real que unos y otros tienen entre sí, con objeto de asilar el factor causal más influyente y facilitar de este modo el diseño de estrategias de seguridad pública que deberán ser puestas en marcha para la resolución del problema. Fruto de este trabajo analítico, se concluye que hay un factor común que afecta a todos los demás, la debilidad del Estado.

Por ello, más que atribuir un origen multicausal a la violencia, se debe hacer referencia a la debilidad del Estado, como punto de partida que facilita que el resto de factores causales y actores violentos aparezcan, se asienten y fortalezcan en la estructura del Estado y en la sociedad del país en cuestión.

El problema de la violencia debe, por tanto, ser abordado con la implementación de estrategias multisectoriales, dependientes de organismos estatales y actores sociales,

⁷ (Carrillo-Flórez, 2007)

⁸ Entre otros: (Contreras Pérez, 2008); (Meyer & Ribando Seelke, Central America Regional Security Initiative: Background and Policy Issues for Congress., 2013); (Ribando Seelke, Mexico: Issues for congress, 2011); (Fruhling, 2012); (Fuentes, Basombrío, Dellasoppa, & Fruhling, 2011); (Zavaleta Betancourt, La inseguridad y seguridad ciudadana en América Latina., 2012)

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

programadas a medio y largo plazo y llevadas a cabo de forma sinérgica cuyo fin último sea reforzar las estructuras sociales y estatales. Ello no quiere decir que no se consideren las medidas represivas, puesto que son especialmente necesarias en los momentos iniciales para frenar la escalada criminal y violenta, y crear un clima de seguridad que facilite la implementación de las otras.

Por ello la hipótesis de este trabajo es que, con independencia de que el origen de la violencia y la criminalidad en la región sea multicausal - la debilidad institucional, la escasez de recursos económicos del Estado, los desequilibrios sociales y la disponibilidad de armas en la región acompañada de laxos métodos de control de las mismas, la corrupción... -, hay un factor que tiene un peso específico mucho mayor en el fenómeno violento: la debilidad institucional del Estado. De hecho, este factor suele ser el origen de los demás o, al menos, el que favorece su desarrollo.

En un Estado débil, sus instituciones tienden a ser ineficaces, acomodadas y corruptas, lo que provoca un escaso apoyo social a las mismas. En estas condiciones, la posibilidad de implementar estrategias de seguridad pública adecuadas de forma efectiva es muy reducida. Además, como se comprobará posteriormente, la debilidad estatal es el caldo de cultivo ideal para el desarrollo de muchos de los actores violentos que están presentes en aquellos países que arrojan las mayores tasas de violencia del mundo.

Con la finalidad de demostrar esta hipótesis, la segunda parte del trabajo se ha centrado en un análisis comparativo entre Honduras, Guatemala y El Salvador⁹, por un lado, y Costa Rica y Nicaragua por el otro. Los integrantes del primer grupo están especialmente afectados por unos niveles de violencia muy elevados, mientras que en Costa Rica y Nicaragua, a pesar del empeoramiento de la situación de seguridad que se ha producido en los últimos años, sus tasas se encuentran en niveles razonablemente alejadas de las otras¹⁰. Todos estos países tienen un tamaño similar y comparten la misma ubicación subregional, por lo que se considera que el análisis estará menos afectado por la diversidad del conjunto de los países latinoamericanos cuando son objeto de análisis en otros trabajos de este tipo.

El estudio que a continuación se expone ha sido elaborado conforme al siguiente esquema:

- La situación general de la violencia en Latinoamérica. Exposición y análisis de la situación en la región.
- Las causas de la violencia.

⁹ Países que componen el denominado Triángulo Norte.

¹⁰ Reflejado en las tablas del informe sobre el Índice de Desarrollo Humano del PNUD 2013, (Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, 2013).

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

- a. Factores sociales: Se hace un repaso a la influencia de factores como la pobreza, el desequilibrio social multidimensional¹¹, la educación, la exclusión social, el grado de confianza en las instituciones, la cultura violenta de la región y la disponibilidad de armas de fuego en las sociedades latinoamericanas.
 - b. En el aspecto institucional se abordan cuestiones como la debilidad del Estado; el grado de eficacia y corrupción de las instituciones en general y las dedicadas a labores de seguridad en particular; tratando brevemente los sistemas penitenciarios y la influencia de la criminalidad organizada en el funcionamiento de los Estados débiles.
- Las políticas de seguridad pública en América Latina. Se efectúa un recorrido por las puestas en marcha en América Latina, sus logros y fracasos, así como un análisis de la cooperación internacional en este ámbito.

Posteriormente, se aborda la problemática centrándose en los países reseñados e iniciando el análisis comparativo conforme al siguiente guión:

- Introducción al análisis comparativo de la situación de la violencia en el Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.
- Actores violentos y facilitadores del delito. Maras y Pandillas; Narcotráfico y Crimen organizado; disponibilidad de armas.
- Políticas de seguridad implantadas en la zona. Consecuencias de las mismas. Análisis de las políticas de Mano Dura y su alternativa, las políticas integrales de seguridad. El Triángulo Norte: Las políticas de Mano Dura y las búsqueda de alternativas. El enfoque diferente de Costa Rica y Nicaragua.
- Causas de la violencia. Factores sociales. Análisis de la situación social que abarca aspectos como el Índice de Desarrollo humano (IDH), la educación, la satisfacción con la vida y las instituciones.
- Causas de la violencia. Factores institucionales. Análisis de la debilidad institucional; empleo de las Fuerzas Armadas frente a los cuerpos policiales en materia de seguridad pública; las políticas judicial y penitenciaria.
- Conclusiones finales del trabajo.

¹¹ Contempla no solo el factor económico, sino también las expectativas de futuro, la educación y la sanidad.

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

LA SITUACIÓN GENERAL DE LA VIOLENCIA EN LATINOAMERICA

En 2012, la delincuencia constituyó por segunda vez consecutiva el principal problema de América Latina atendiendo al resultado del Latinobarómetro de 2011. Esto supone considerar la amenaza del crimen y la violencia en general, como el principal riesgo para la consolidación de la democracia en muchos de los países de esta región, una vez que el autoritarismo ha pasado a considerarse un problema del pasado¹².

En el citado informe, en 11 de los 18 países analizados, la violencia es considerada el problema más importante que sufre su país a juicio de sus ciudadanos, variando desde el 61% de Venezuela al 20% de Perú, con una media en la región del 28%¹³. También, a título de ejemplo y abundando en la cuestión, el 91% de los latinoamericanos se sienten amenazados, con más o menos intensidad, por la violencia existente¹⁴.

En 14 de los países, más de la mitad de los encuestados consideran que vivir en su país es cada día más inseguro, y en varios de los demás países, el porcentaje de los que así lo consideran es muy cercano al 50%¹⁵.

Aunque deben tenerse en cuenta la amplia gama de distintas realidades que cada uno de los países de América Latina representa, lo cierto es que esta región, contando tan sólo con el 8,5% de la población mundial, concentra cerca de 27% de los homicidios dolosos a nivel global¹⁶.

Revisando la situación en el conjunto de la región se puede observar como en el Cono Sur, la mayoría de los homicidios están vinculados a la violencia doméstica. Sin embargo, en el caso de países como Chile y Uruguay, las tasas de homicidio son similares a las de cualquier otro país desarrollado. En el caso de Brasil, con unas tasas de homicidios muy superiores, el origen de los mismos radica tanto en el crimen organizado como en la delincuencia común, focalizados principalmente en las grandes ciudades¹⁷.

A su vez Lagos y Dammert reflejan que la situación en los países andinos, como Colombia y Venezuela, los altos niveles de homicidios están también vinculados al crimen organizado - especialmente relacionado con el narcotráfico-. Bien es cierto que en el caso de Venezuela la escasa transparencia de la información y el grave enfrentamiento político que vive el país dificulta el estudio en profundidad de la problemática. En el resto de países, Perú y Bolivia, no se presentan tasas altas de homicidios a pesar de constituir

¹² (Corporación Latinobarómetro, 2011)

¹³ Ibid.

¹⁴ (Alda Mejías, Las debilidades de las políticas de seguridad en América Latina en un contexto de fortaleza económica y política., 2011, pág. 5)

¹⁵ (Corporación Latinobarómetro, 2011)

¹⁶ (Alda Mejías, Las debilidades de las políticas de seguridad en América Latina en un contexto de fortaleza económica y política., 2011, pág. 5)

¹⁷ (Lagos & Dammert, 2012).p. 21.

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

el origen de la producción de gran parte de la cocaína mundial, y la mayor parte de estos crímenes tienen su origen en la violencia doméstica y la delincuencia común.

En lo que se refiere a América Central, México y Caribe, es patente el incremento del crimen organizado – narcotráfico y pandillas o maras - como causante de la mayor parte de los homicidios que se registran en la zona¹⁸. Aunque tampoco debe despreciarse el alto número de homicidios que son provocados por la delincuencia común, y que afectan especialmente a países como Panamá, Nicaragua y Costa Rica¹⁹.

LA VIOLENCIA Y LA CRIMINALIDAD EN LATINOAMERICA. LAS CAUSAS DE LA VIOLENCIA

¹⁸ (Zepeda Lecuona, diciembre 2010); (Ríos & Shirk, 2011); (Arteaga Botello, 2004).

¹⁹ (Ribando Seelke, Gangs in Central America, 2013); (Lagos & Dammert, 2012); (Cañas López, 2012); (Cuadra, 2011);

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

Muchos son los factores potencialmente causantes de las altas tasas de violencia, tal y como la sociedad de los diferentes países de la región lo manifiesta. En el latinobarómetro de 2011²⁰, el 44% de los latinoamericanos reclamaban soluciones a problemas económicos, de pobreza, desempleo, educación y corrupción.

En muchas ocasiones se hace referencia a la influencia de la pobreza en las altas tasas de violencia y delincuencia que afecta a los países²¹. Sin embargo, en la mayoría de los casos, estas referencias, una vez analizadas, desembocan en otra causa más influyente, el desequilibrio social y la exclusión²².

Un informe del BID²³, atribuye el incremento del delito y la violencia en la región tanto al desequilibrio social – referido tanto a ingresos como a oportunidades - y a la exclusión, como a los cambios en la urbanización y a la fragmentación familiar. Ampliando la lista, en otros trabajos analizados también se trata la conflictividad social – posiblemente derivada del incremento de los desequilibrios anteriormente relacionados -, la educación y la cultura de la violencia existente en Latinoamérica²⁴.

Este conjunto de factores causales se mantienen principalmente en el ámbito social, pero también se debe estudiar el aspecto institucional. Un Estado débil carece de la capacidad suficiente para luchar de forma efectiva contra la criminalidad y la violencia. Además, esta debilidad institucional suele generar un fortalecimiento de las organizaciones criminales, a mayor o menor escala, que logran el control de barrios, pueblos, ciudades e, incluso, regiones. Consecuencia directa de todo ello es la baja confianza de la sociedad en sus gobiernos, lo que incrementa la presión que ejerce sobre ellos para que pongan en marcha soluciones efectivas²⁵.

En otro estudio elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)²⁶, se concluye que los homicidios están asociados con los niveles de

²⁰ (Corporación Latinobarómetro, 2013)

²¹ (Rojas Aravena, enero-febrero 2008)

²² (Lagos & Dammert, 2012); (Arias, Rosada-Granados, & Fabián Saín, Reformas policiales en América Latina. Principios y lineamientos progresistas., 2012); (Arias, La seguridad privada en América Latina: el lucro y los dilemas de una regulación deficitaria., 2009) (Dammert L. , Seguridad Pública en América Latina: ¿qué pueden hacer los gobiernos locales?, 2007).

²³ (Oficina de Evaluación y Supervisión, 2013).

²⁴ (Arias, La seguridad privada en América Latina: el lucro y los dilemas de una regulación deficitaria., 2009); (Dammert L. , Seguridad Pública en América Latina: ¿qué pueden hacer los gobiernos locales?, 2007).

²⁵ (Rojas Aravena, enero-febrero 2008); (Lagos & Dammert, 2012); (Arias, Rosada-Granados, & Fabián Saín, Reformas policiales en América Latina. Principios y lineamientos progresistas., 2012); (Dammert L. , Seguridad Pública en América Latina: ¿qué pueden hacer los gobiernos locales?, 2007).

²⁶ (UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito), 2011)

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

desarrollo humano, el Estado de Derecho, la disponibilidad de armas de fuego y el tráfico de drogas y la delincuencia organizada transnacional.

En definitiva, la violencia no está causada por una serie de factores aislados, sino por un conjunto de ellos, interrelacionados y entrelazados en estructuras y procesos a nivel macro y micro²⁷. Curiosamente, y como se ha mostrado en los párrafos anteriores, la debilidad institucional siempre es identificada como un factor más de todos los que provocan las altas tasas de violencia, y no como el factor crucial que facilita el desarrollo de los demás o el establecimiento de los actores violentos. Por ello, el fin último de todo este estudio reside en demostrar que en numerosas ocasiones se identifican algunos factores como causantes de la violencia, cuando realmente, o no lo son, o simplemente se manifiestan a raíz de otro anterior que los provoca o facilita su desarrollo: la debilidad del Estado.

En este trabajo se han agrupado las causas en dos bloques, uno dedicado a aquéllas que podrían estar englobadas en la situación social y otro que se centra en las vinculadas con el aspecto institucional

Esta división causal se ha establecido a efectos prácticos, tratando de facilitar la estructura del trabajo y de simplificar el posterior proceso comparativo, siendo conscientes de la fuerte relación e interdependencia existente entre ambos bloques y los factores que cada uno de ellos engloba.

Situación social: Pobreza, desequilibrio y exclusión social; la educación, la cultura violenta, y la presencia de armas como facilitador del delito y la violencia.

Si bien siempre se hace referencia al índice de pobreza de los países, éste es un factor que tiene realmente menor influencia de lo que a primera vista pueda parecer. La violencia en las ciudades más pobres del mundo no es mayor que en otras que son fiel reflejo del desarrollo económico y poder político mundial. De hecho, se registra una mayor tasa de violencia y criminalidad cuando lo que se producen son altos índices de exclusión y desequilibrios sociales. Tal es la comparación que en el informe sobre el índice de desarrollo humano se plasma entre las ciudades de Calcuta y Londres, donde los niveles de violencia y de delito son mayores en la segunda²⁸.

Del mismo modo, si se observa la criminalidad en Estados Unidos, resulta cuatro veces superior a la de Europa y Canadá, lo que implicaría que los niveles de desarrollo y crecimiento de Estados Unidos serían inferiores a estos últimos. Tampoco en América Latina los países más pobres de la región son los más violentos, ni los más desarrollados los menos violentos²⁹

En países como Chile o Costa Rica, los índices de seguridad son relativamente bajos y están acompañados de una situación económica y un bienestar social alto. Al mismo

²⁷ (Carrillo-Flórez, 2007)

²⁸ (Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, 2013)

²⁹ (Carrillo-Flórez, 2007)

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

tiempo, en otros países, esos índices de seguridad también son aceptables, con unos niveles de riqueza muy inferiores a la de muchos de sus vecinos, como Bolivia o Nicaragua, lo que puede considerarse que demuestra la escasa influencia que la pobreza tiene en las altas tasas de violencia³⁰.

Sin embargo, América Latina ha sido y sigue siendo la región más desigual del mundo como lo evidencian los datos de Naciones Unidas, entre los que se encuentra el informe al que anteriormente se ha hecho referencia. Este triste título que atesora, lo alcanzó hace años y lo mantiene en la actualidad, cuando la delincuencia aflora como problema principal en un momento especialmente positivo de prosperidad y crecimiento económico, con una reducción de la pobreza hasta niveles de los años 80 del siglo pasado³¹.

Por ello, puede considerarse el fuerte desequilibrio social existente en el seno de muchos de los países latinoamericanos un indicador de gran influencia en las altas tasas de violencia en la región. Cinco de los diez países más desiguales del mundo están en América, entre ellos Brasil³². El quintil de menor ingreso tiene únicamente el 2,9% del total de América Latina, sin embargo en Asia es del 8,7% y en Europa del 6,6 %. En América Latina el 20% más rico tiene el 57,8% del ingreso total³³.

El desequilibrio social es un factor sociológico que genera tensiones sociales; bajas expectativas de futuro de los jóvenes; incapacidad del sistema político y las instituciones sociales para resolver los conflictos de manera pacífica; la ausencia de cultura cívica o cohesión social. Todo ello puede generar caldos de cultivo favorables al desarrollo de la violencia como forma de vida, tal y cual se señalaba anteriormente.

Según la oficina de Naciones Unidas vinculada al PNUD, considera que hay una relación inversa entre desigualdad y el progreso en desarrollo humano, motivado principalmente por la denominada desigualdad multidimensional, que afecta a las áreas de salud y educación principalmente, más que a las relativas a ingresos económicos³⁴. En el informe del Latinobarómetro de 2011, la desigualdad permanece como la mayor de las amenazas, y la discriminación como su consecuencia cultural más inmediata.

Los problemas económicos que afectan a gran parte de la población, que vive situaciones de precariedad en el acceso a la salud, a una educación adecuada y de calidad, y con unos altos niveles de desempleo, incrementan la brecha de la desigualdad social y refuerzan la desconfianza de este sector hacia sus gobiernos. La sensación de que el aumento de la riqueza en la zona no conlleva una mejora en la distribución de la misma, y que los

³⁰ (Alda Mejías, Las debilidades de las políticas de seguridad en América Latina en un contexto de fortaleza económica y política., 2011)

³¹ (Ribando Seelke, Gangs in Central America, 2013); (Lagos & Dammert, 2012); (Cañas López, 2012); (Cuadra, 2011);

³² (Central America Country Management Unit, 2012)

³³ (Lagos & Dammert, 2012)

³⁴ (Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, 2013)

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

gobiernos no actúan en beneficio de la mayoría, genera intolerancia y desconfianza hacia el Estado³⁵.

Ya desde hace tiempo, hay estudios que identifican la desigualdad como un factor especialmente favorable al desarrollo de la violencia y la criminalidad. Con una situación grave como la que ha venido viviendo Colombia, en 2007 el entonces presidente Álvaro Uribe, centró su estrategia de seguridad en poner en marcha unos planes de actuación integral en zonas donde la pobreza, la violencia y los cultivos ilegales convergían. Se trató de estabilizar esas zonas, desde el punto de vista de la seguridad, de modo que organizaciones civiles pudiesen hacer llegar la presencia estatal efectiva con la puesta en marcha de servicios básicos como salud, educación y justicia. De este modo, se lanzó formalmente en marzo de 2009 un Plan de Consolidación Nacional que tenía la mirada puesta en consolidar esa presencia estatal y favorecer el desarrollo económico y social allí donde se aplicase³⁶. En el fondo no se trataba de hacer otra cosa que reducir los desequilibrios existentes y hacer llegar esa acción del Estado a todos los rincones posibles del país, especialmente los más complicados.

En agosto de 2010 el gobierno mexicano emprendió una serie de consultas y estudios con académicos, políticos y actores sociales con objeto de diseñar una nueva política de seguridad pública³⁷. Como resultado, el gobierno recibió una serie de recomendaciones enfocadas a incrementar la presión sobre las organizaciones criminales más violentas, acelerar las reformas judiciales y policiales, y efectuar un esfuerzo en el desarrollo de programas sociales y de control de la criminalidad en los municipios más afectados por la violencia.

En estas recomendaciones se hacía especialmente hincapié en que un amplio sector de la sociedad mexicana también demandaba al presidente que el ejército abandonase la lucha contra la violencia y el narcotráfico, dados los problemas generados en materia de derechos humanos, y que se emprendiesen medidas para combatir la pobreza, la desigualdad y el desempleo, aspectos que también se estimaba que contribuían considerablemente al fomento de la violencia.

Cuando en determinados barrios o zonas de un país se tiene una sensación de “abandono” por parte del gobierno, sin servicios sociales adecuados, las tasas de paro son altas y las perspectivas de futuro son muy reducidas, el crimen organizado ve allanado el camino para lograr el control de estos lugares, llegando a suplir la acción del gobierno legítimo del país. Estas organizaciones, dotadas con mayor o menor capacidad económica y fuerza armada, se ven reforzadas con la corrupción de funcionarios y políticos, la policía y las

³⁵ (Corporación Latinobarómetro, 2011)

³⁶ (Ribando Seelke, Sun Wyler, Beittel, & Sullivan, 2011)

³⁷ (Ribando Seelke, Mexico: Issues for congress, 2011)

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

Fuerzas Armadas (FAS)³⁸, ante una población que no tiene confianza en su gobierno y en la actuación de sus instituciones y fuerzas de seguridad.

Por ello, en las situaciones de desigualdad descritas, la fortaleza del Estado es clave para que éste sea o no capaz de impedir el establecimiento de organizaciones criminales que lleguen a competir con él mismo en determinadas zonas de su territorio. De este modo, es la fortaleza institucional de un país la clave a la hora de controlar los problemas derivados del desequilibrio social existente en determinadas zonas de su territorio y de sus ciudades.

Además de los fuertes desequilibrios sociales, el aspecto educativo es considerado una pieza fundamental en las estrategias diseñadas a medio y largo plazo que tratan de reducir los niveles de violencia. En América Latina ya se parte de una realidad en la que los numerosos años de conflicto han provocado la existencia en la zona de un elevado número de armas, de excombatientes y una cultura proclive a recurrir a la violencia como medio para resolver las disputas sociales³⁹.

Esa “cultura violenta” de la sociedad latinoamericana en general, y la percepción que los distintos países tienen de la misma, quedó reflejada en el latinobarómetro de 2008. En ese informe, el país que se percibía a sí mismo como el más violento era Guatemala, seguido de El Salvador y Brasil. Comparativamente los menos violentos eran Uruguay y Ecuador⁴⁰. En la encuesta, ningún país tenía niveles “bajos” de violencia, y la mayoría (12 de 18) tenía niveles más bien altos, superiores al 5, que es el punto intermedio.

La violencia es vista como una forma de resolver conflictos, ya sean interpersonales, familiares o incluso sociales, lo que puede haber favorecido, junto a otros factores, una progresiva escalada de violencia. Lograr revertir esa cultura hacia otra que valore en mayor medida el diálogo y la adaptación permitirá que la sociedad esté en mejores condiciones para la lucha contra la criminalidad y la violencia.

Tal y como indica Carrillo, los programas educativos y de salud pública llevados a cabo por las sociedades civiles desde un punto de vista preventivo han generado buenos resultados: formación de líderes, creación de una cultura de paz y reconciliación, mayor capacitación de los organismos judiciales y policiales, mayor formación de los profesores en las escuelas, programas de esparcimiento. Todo ello, en su conjunto, favorece no solo un cambio social y cultural, sino que allana el camino para garantizar el éxito de los programas de reinserción de los criminales en la sociedad⁴¹.

Normalmente en los países en los que la estabilidad y fortaleza del Estado es alta, los programas educativos están asentados en los principios señalados anteriormente y se

³⁸ (Alda Mejías, Las debilidades de las políticas de seguridad en América Latina en un contexto de fortaleza económica y política., 2011)

³⁹ (Meyer & Ribando Seelke, Central America Regional Security Initiative: Background and Policy Issues for Congress., 2013)

⁴⁰ La violencia se media en una escala del 1 al 10. El 1 era muy pacífico y el 10 muy violento.

⁴¹ (Carrillo-Flórez, 2007)

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

considera muy importante la posibilidad de que los programas de formación y especialización del funcionariado, tanto vinculado a los sistemas judiciales como a los policiales, penitenciarios o los vinculados con la enseñanza estatal, se desarrollen lo máximo posible. Por ello, puede determinarse que la fortaleza o debilidad estatal se encuentra, una vez más, detrás del desarrollo educativo de un país. Más adelante, en el estudio comparativo se comprobará como tampoco resulta un factor determinante, sino complementario.

Otro factor, íntimamente relacionado con la cultura violenta de estos países es la amplia presencia de armas de fuego en la sociedad, tal y como indica en uno de sus informes el secretario General de Naciones Unidas⁴². Hay una serie de factores asociados a la existencia de un mayor o menor número de armas en la sociedad, como la sensación de inseguridad; los gobiernos débiles o corruptos; las oportunidades inadecuadas de educación y desarrollo económico; la incapacidad estatal para proteger a la población vulnerable; las disparidades sociales y económicas; y el desarme deficiente después de los conflictos.

En Latinoamérica la demanda de armas proviene no solo de las fuerzas y cuerpos de seguridad. En los últimos años esa percepción de deterioro de la seguridad ciudadana ha hecho que se dispare la adquisición de armas de fuego por parte de civiles y empresas de seguridad privadas que cada vez más han adquirido un papel esencial en muchos de los países⁴³.

Reflejo de esa demanda y presencia de armas de fuego en la región es el elevado porcentaje de homicidios cometidos con ellas, superior al 75% del total. Ese es el caso de Honduras (96%), El Salvador (88%), Guatemala (84%), Colombia (80%) y Brasil (76%). En otros países como Paraguay, Costa Rica y Panamá, el porcentaje supera el 66%⁴⁴.

En un estudio elaborado para el anuario 2013 de la Seguridad Regional en América Latina y Caribe⁴⁵ esta relación entre los altos índices de homicidios y la elevada proporción de los mismos que se han producido con armas de fuego ha sido atribuido a varios factores. Entre ellos destaca la disponibilidad de las armas; la presencia del crimen organizado en el país y algunos tipos de pandillas juveniles; así como la impunidad de los delitos cometidos con las armas de fuego.

En su trabajo, Godnick y Bustamante, estiman que el número de armas de fuego legales que circula por la región es cercano a los 63 millones, de los que unos 53 millones estarían en manos de civiles, incluyendo los vinculados a las empresas de seguridad privada. En lo que se refiere a las ilegales, se considera que podría ser un número similar, que igualaría o incluso superaría el total de legales anteriormente indicado. El origen de las armas reside principalmente en Estados Unidos, a excepción del caso de Brasil, donde la industria

⁴² (Secretario General Naciones Unidas, 2013)

⁴³ (Szabó, Garzón, & Muggah, 2013)

⁴⁴ (Costa, La situación de la seguridad ciudadana en América Latina, 2012)

⁴⁵ (Godnick & Bustamante, 2013)

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

armamentística surte al 80% del mercado nacional. Otro elevado porcentaje proviene de las diferentes guerras civiles que tuvieron lugar en América Central y por el desvío de armamento de las FAS o cuerpos policiales que determinados funcionarios corruptos llevan a cabo⁴⁶.

Es indudable que existe además una estrecha relación entre el mercado ilegal de drogas y el mercado negro de armas⁴⁷. Siendo muy difícil obtener datos concretos y fiables, el tráfico de armas por definición va de la mano del tráfico de drogas, aunque es verdaderamente complicado establecer si el tráfico de armas y municiones es un gran negocio para el narcotráfico por sí mismo o un negocio menor simplemente a su servicio⁴⁸.

La realidad es que el actual flujo de armamento, unido a la escasa regulación, la debilidad de los controles fronterizos y los deficientes sistemas internos de registro y control de las armas existentes en los distintos países, han dotado al crimen organizado de la capacidad armamentística suficiente para garantizar la protección de sus actividades frente a otras organizaciones criminales, y superar incluso la capacidad combativa de las fuerzas de seguridad de muchos estados⁴⁹.

En resumen, el origen del elevado número de armas en la región se debe, por un lado, a la cultura violenta de la región, a la percepción de inseguridad de la sociedad civil y a la actividad e implantación de la criminalidad organizada y el narcotráfico por otro. Sin embargo, lo que no puede concluirse es que a mayor número de armas por habitante las tasas de violencia sean mayores. Así lo han demostrado diferentes estudios como el elaborado por el Banco Mundial en 2011, en el que había poca relación entre el número estimado de armas de fuego de propiedad civil y las tasas de homicidio⁵⁰.

Es decir, en general todos los factores que facilitan el incremento de la presencia de armas en la sociedad suelen desarrollarse con mayor facilidad en un entorno presidido por la debilidad estatal, algo que en la parte segunda del trabajo correspondiente al análisis por países se verá de forma mucho más clara.

Debilidad institucional y fortaleza del Estado

Como indica Hernández de Mora⁵¹, es fundamental que el Estado actúe con eficiencia, eficacia y determinación para lograr una sociedad en la que imperen la seguridad y la justicia, ya que las libertades que garantiza la Constitución solo pueden ser ejercidas, de manera plena, en un ambiente seguro y justo.

⁴⁶ (Godnick & Bustamante, 2013)

⁴⁷ (Szabó, Garzón, & Muggah, 2013)

⁴⁸ (Godnick & Bustamante, 2013)

⁴⁹ (Szabó, Garzón, & Muggah, 2013)

⁵⁰ (Cawley, 2013)

⁵¹ (Hernández de Mora)

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

Sin embargo, los procesos democráticos de la mayoría de los países latinoamericanos no han logrado consolidar, en general, una fortaleza institucional adecuada. Además, es bastante corriente que en estos casos, los países cuenten con sistemas judiciales y penitenciarios deficientes, al mismo tiempo que la eficacia y preparación de sus cuerpos policiales deje mucho que desear⁵². Tampoco es extraño que en estos países el Estado no sea capaz de garantizar su presencia en todo el territorio nacional, dejando un vacío de poder en determinadas zonas donde la población no recibe los servicios sociales básicos que el Estado debería proporcionar.

La debilidad estatal es identificada como la principal causa de la desconfianza de su población en las instituciones públicas y los bajos niveles de legitimidad reflejados en los estudios sociológicos de la zona⁵³. Como consecuencia de todo ello se deteriora la cohesión social y la colaboración de los ciudadanos con el sistema, debilitando notablemente la capacidad de respuesta del Estado ante el crimen y la violencia⁵⁴.

Como colofón al proceso de degradación de la legitimidad y robustez del Estado, llega a darse el caso de que los elementos más marginados socialmente se vean atraídos por la perspectiva de integrarse en las actividades de estas organizaciones criminales que, en algunos casos, llegan a reemplazar al Estado en las zonas de su territorio a las que no llegan las instituciones, garantizando la seguridad e incluso los servicios sociales básicos que los ciudadanos demandan⁵⁵.

En este tipo de Estados débiles, es normal que concurren las siguientes circunstancias⁵⁶:

- Los sistemas judicial, penal y policial son muy débiles, ineficaces y corruptos, lo que agrava la situación de violencia social.
- El resto de las instituciones estatales están desbordadas y no son capaces de afrontar las demandas de seguridad de la ciudadanía.
- Es patente la falta de capacidad del Estado en aplicar la ley y establecer sistema de control de la corrupción.
- La eficacia de sus políticas se vea limitada por la falta de enfoques globales y que no haya una clara definición de responsabilidades en la administración del Estado.
- Existencia de escasa coordinación entre instituciones centrales y locales, mermando potencialmente el éxito de las medidas que se adopten.
- Paralelamente, suele existir un reducido nivel de especialización de los funcionarios públicos que deben poner en marcha los planes del Estado.
- No existen instrumentos adecuados para el análisis de la ejecución y el resultado de las políticas implantadas-

⁵² (Alda Mejias, 2014)

⁵³ (Dammert L. , Seguridad Pública en América Latina: ¿qué pueden hacer los gobiernos locales?, 2007)

⁵⁴ (Fruhling, 2012)

⁵⁵ (Mathieu & Niño Guarnizo, 2011, pág. XV)

⁵⁶ (Fruhling, 2012); (Alda Mejias, 2014)

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

Los Estados con menor capacidad institucional siempre están más expuestos a la implantación del crimen organizado en su territorio. Este último precisa establecerse en el seno de un país con unos niveles básicos de estabilidad, infraestructura y orden social que faciliten el desarrollo de su actividad ilegal⁵⁷.

En un Estado débil, caracterizado por la falta de institucionalidad y la excepcionalidad ante la ley, el crimen organizado, a través de la corrupción, tiene capacidad de influir en las decisiones estatales y lograr la protección de sus representantes, algo trascendental para establecerse y prosperar en un país. A esta ventaja se le añade el hecho de que la debilidad estatal también le asegura la autonomía necesaria para el desarrollo de actividades ilegales, dado que el Estado no es capaz de controlar todo su territorio. Sin embargo, la incapacidad de un Estado débil para controlar todo su territorio no supone que exista una situación de caos. Normalmente existe un mínimo de estabilidad, orden e infraestructura, también necesarias para el desarrollo de la actividad criminal. A todo ello hay que añadir que la debilidad estatal es, al mismo tiempo, el principal obstáculo para combatir el crimen organizado dadas las limitaciones del sistema de justicia, el penitenciario y el policial, herramientas imprescindibles para ello⁵⁸.

De todo lo expuesto, se considera oportuno hacerse eco de la conclusión de Carrillo Flórez que indica que la falta de legitimidad y eficacia institucional es un factor de conflicto y potencial causa de la violencia⁵⁹

Además de lo indicado anteriormente, y aunque sea de forma somera, merece especial atención la situación del deficiente sistema penitenciario en toda la región. En general es un sector que atraviesa una grave crisis, en un marco en el que además hay una patente ausencia de políticas de prevención y rehabilitación del recluso. En la última década la población carcelaria ha crecido enormemente afectando a las condiciones de habitabilidad y seguridad de las prisiones. Las cárceles se han convertido en “auténticas universidades del delito, lugares donde se organiza el crimen”⁶⁰.

Este sector sigue estando prácticamente abandonado por las instituciones, y su mal funcionamiento es achacado por Carrillo Flórez⁶¹ a tres causas: la debilidad del Estado, la negligencia en la gestión de las prisiones y la falta de recursos para que el personal penitenciario pueda imponer un régimen ajustado a derecho. Todo ello deriva, continúa el autor, en que en muchas prisiones no se cumpla la ley y que sean los propios reclusos los que controlen el interior de los centros, en los que la presencia de dinero, drogas y armas es común y la opacidad del sistema notoria.

Con esta breve exposición, queda patente la importancia de la fortaleza estatal en el problema de la violencia y la criminalidad. Tal y como se vio en el apartado anterior, en

⁵⁷ (United Nations Office on Drug and Crime, 2011)

⁵⁸ (Alda Mejias, 2014, pág. 4)

⁵⁹ (Carrillo-Flórez, 2007)

⁶⁰ (Dammert L. , Seguridad Pública en América Latina: ¿qué pueden hacer los gobiernos locales?, 2007)

⁶¹ (Carrillo-Flórez, 2007)

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

el que se hacía referencia a factores de tipo social, la propia debilidad de las instituciones de un país constituía el factor que permitía que el resto de posibles causas de la violencia se desarrollasen con facilidad e interaccionasen entre sí. En este apartado se han estudiado de forma somera las consecuencias directas, en lo que se refiere a la sociedad y la propia estructura y funcionamiento de un país débil institucionalmente, mostrándose de forma patente la necesidad de construir Estados sólidos y fuertes que sean capaces de extender la acción de la ley en todo su territorio y en todas sus instituciones y los poderes constitucionales del Estado⁶².

Consecuencia de lo expuesto hasta ahora cobra especial importancia que en estos países se pongan en marcha agendas de desarrollo institucional orientadas a fortalecer la credibilidad de las instancias públicas como el escalón ideal para la resolución de conflictos y la gestión pública y eficaz en el ámbito de la seguridad, tal y como expone Carrillo-Flórez⁶³.

Para finalizar este punto y a título de ejemplo, se considera interesante aportar la reflexión de Gino Costa⁶⁴, en la que precisa que el fortalecimiento institucional en Colombia, con el apoyo internacional, ha supuesto un avance significativo en la reducción de la violencia en la última década. Mientras tanto, la debilidad institucional venezolana coincide con un profundo deterioro de sus condiciones de seguridad. Por ello, concluye Costa, la fortaleza institucional aparece como la variable determinante de la situación en gran parte de la región.

LA VIOLENCIA Y LA CRIMINALIDAD EN LATINOAMERICA. LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DE SEGURIDAD CIUDADANA

⁶² (Alda Mejías, Las debilidades de las políticas de seguridad en América Latina en un contexto de fortaleza económica y política., 2011)

⁶³ (Carrillo-Flórez, 2007);

⁶⁴ (Costa, La situación de la seguridad ciudadana en América Latina, 2012)

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

Una vez efectuado un repaso de los principales factores que, de un modo u otro, influyen en la violencia y criminalidad que sufren muchos de los países latinoamericanos, se va a proceder a hacer un recorrido sobre las principales políticas de seguridad pública y ciudadana que a lo largo de los últimos años se han venido poniendo en marcha en la región para tratar de frenar el crecimiento de la violencia. De este modo, se trata de exponer aquellas estrategias que han ofrecido mejores resultados y las que no han hecho sino empeorar la situación.

Con ello se pretenden extraer los éxitos y fracasos de cada tipo de política implantada y tratar de determinar las características que debe tener una estrategia idónea para frenar y corregir las altas tasas de violencia que algunos de los países latinoamericanos están experimentando.

La seguridad pública y la seguridad ciudadana

A lo largo de este trabajo se hace referencia a ambos conceptos para los cuales en ocasiones es difícil encontrar una definición clara y precisa. Autores como Alfredo Zavaleta consideran clave distinguirlos desde el punto de vista de referirse en el primer caso a las políticas estatales y, en el segundo, a los sistemas establecidos para la protección de los derechos ciudadanos⁶⁵.

La seguridad pública tiene como centro al Estado, el papel de sus instituciones, la eficacia de sus estructuras de prevención y control y la garantía de las condiciones de gobernabilidad⁶⁶. De las instituciones públicas se espera el control de la violencia criminal a través de la puesta en marcha de estrategias de prevención y otras de represión por parte del sistema policial y judicial⁶⁷.

Sin embargo, la seguridad ciudadana está más referida a la existencia de un orden ciudadano democrático que elimina la amenaza de la violencia en la población y permite la convivencia segura. Abarca el reconocimiento de derechos y libertades del individuo, así como el castigo como elemento de disuasión⁶⁸. Desde el punto de vista de Carrión, es preciso superar el concepto que tradicionalmente ha imperado en Latinoamérica de seguridad pública para dar paso al de seguridad ciudadana, más amplio y que a medio y largo plazo arroja mejores resultados.

Las políticas de seguridad pública y ciudadana implantadas

De cara al objetivo de este trabajo es importante analizar las políticas de seguridad puestas en marcha por los Estados dado que, de un modo u otro influyen en el conjunto de factores

⁶⁵ (Zavaleta Betancourt, La inseguridad y la seguridad ciudadana en América Latina., 2012).

⁶⁶ (Carrión)

⁶⁷ (Carrillo-Flórez, 2007)

⁶⁸ (Carrión)

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

estudiados anteriormente. En determinadas ocasiones, estas políticas resultan exitosas y en otras son menos efectivas de lo que inicialmente pretendían, provocando que algunos de los factores analizados varíen notablemente en su evolución, por lo que deben ser analizadas.

En general, los gobiernos latinoamericanos son conscientes de la importancia de solucionar el problema de la violencia y de que el paso de los años no ha hecho sino agravarlo. Debido al escaso éxito que normalmente están teniendo las políticas implantadas es muy común en la región el institucionalizado discurso político que trata de convencer a la opinión pública del esfuerzo desarrollado por el gobierno de turno por adoptar medidas orientadas a mejorar la seguridad ciudadana.

A pesar de todo el conjunto de factores que se han expuesto anteriormente, que afectan de un modo u otro al incremento de la violencia en la región, los gobiernos han venido implantando tradicionalmente unas políticas de Mano Dura esencialmente represivas, que han desencadenado un elevado número de detenciones y de procesos judiciales, que han provocado la sobrecarga de la administración de la justicia y del sistema penitenciario, bloqueando las instituciones del Estado.

Con el paso del tiempo, se concluyó que este tipo de políticas eran totalmente ineficaces y agudizaban la problemática, puesto que deberían haber tenido en cuenta no solo la investigación y represión del crimen, sino también su prevención, el procesamiento de los delitos, su castigo, la rehabilitación de los delincuentes y, a través de una estrategia social adecuada, facilitando una mayor participación de los actores sociales en el problema⁶⁹.

A continuación se va a efectuar un análisis de las políticas de Mano Dura que se implantaron inicialmente para hacer frente al problema y la evolución que se ha venido produciendo hacia unas políticas de carácter integral, que aglutinan planes preventivos, para responder de forma más efectiva a la violencia y la criminalidad en los diferentes países.

Las políticas de Mano Dura

Han sido normalmente las primeras puestas en marcha por los diferentes gobiernos de la región que, ansiosos por dar soluciones cortoplacistas al problema que les garantizasen la reelección política, trataron de reducir lo más rápidamente posible las altas tasas de violencia mediante medidas represivas llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad.

En muchas ocasiones, aunque la decisión del gobierno de turno era lanzar una ofensiva contra el crimen organizado y la delincuencia común que redujese de forma efectiva la violencia, los cuerpos policiales tenían una escasa preparación, su ineficacia era muy alta

⁶⁹(Arias, Rosada-Granados, & Fabián Saín, Reformas policiales en América Latina. Principios y lineamientos progresistas., 2012, págs. 9-10).

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

y la corrupción en su seno era patente, por lo que tanto la sociedad como los diferentes gobiernos desconfiaban de su capacidad para acometer dichas políticas.

Por ello la participación de las FAS en materia de seguridad pública para poner en marcha las estrategias de Mano Dura pasó de ser una opción a convertirse en una necesidad. Sin embargo esta decisión fue adoptada normalmente sin efectuar las adaptaciones legislativas necesarias o, al menos, regulando el hecho de que este tipo de tareas fuesen llevadas a cabo por las FAS tan solo de forma transitoria o puntual⁷⁰.

Es cierto que el empleo de las FAS en materia de seguridad interior se ha venido produciendo como el último recurso disponible del Estado para frenar las altas tasas de violencia, considerando que podían ser la solución idónea por tratarse de una institución con poca corrupción, lealtad hacia la Patria, bien organizada y con potencia armada suficiente para combatir a la criminalidad organizada⁷¹. Además, desde el punto de vista político, esta decisión ha sido siempre bien acogida por la sociedad, generalmente harta de la incapacidad de cuerpos policiales e instituciones poco profesionales y, en muchas ocasiones corruptas.

Sin embargo, el principal problema, ha surgido cuando el ejército se ha visto en la lógica necesidad de adecuar y adaptar sus procedimientos a esa nueva tarea⁷². Usualmente esta ampliación de competencias de las FAS no suele lograr, por sí misma, los objetivos esperados inicialmente y se generan una serie de efectos no deseados. En primer lugar, suelen desencadenar un incremento, a medio plazo, de la violencia⁷³. También se suele experimentar un excesivo desgaste en la institución militar que, al cabo del tiempo, comienza a sufrir en su seno casos de corrupción; acusaciones por abusos, extralimitación en sus cometidos y violación de derechos humanos; limitación de derechos de los ciudadanos; e imposición de trabas para el desarrollo de otras estructuras civiles efectivas⁷⁴.

Por ello, aunque no faltan autores como Dammert Dammert y Veloso, que afirman que todavía es pronto para afirmar si la militarización de la seguridad pública es una medida positiva o no, la experiencia ha demostrado que es preciso que la intervención del Ejército vaya acompañada de otra serie de reformas que permitan el control en materia de Derechos Humanos y el Estado de Derecho; la definición clara de las tareas desarrolladas por las FAS; y el desarrollo de reformas policiales enfocadas a que poco a poco sean los

⁷⁰ (Arias, Rosada-Granados, & Fabián Saín, Reformas policiales en América Latina. Principios y lineamientos progresistas., 2012, pág. 14)

⁷¹ (Meyer & Ribando Seelke, Central America Regional Security Initiative: Background and Policy Issues for Congress., 2013); (Central America Country Management Unit, 2012); (Ribando Seelke, Mexico: Issues for congress, 2011); (Ribando Seelke, Gangs in Central America, 2013).

⁷²(Arias, Rosada-Granados, & Fabián Saín, Reformas policiales en América Latina. Principios y lineamientos progresistas., 2012, pág. 21).

⁷³ (Moloeznik, 2005); (Zepeda Lecuona, diciembre 2010); (Ríos & Shirk, 2011); (Rojas Aravena, enero-febrero 2008).

⁷⁴ (Rojas Aravena, enero-febrero 2008)

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

cuerpos policiales los que vayan retomando el control de las tareas de seguridad pública y se vaya retirando a las FAS de estos cometidos⁷⁵.

Las necesarias reformas de los cuerpos policiales generalmente no se han producido. En unos casos, simplemente no han sido abordadas, y en otros han sido incompletas, pero en cualquier caso este tipo de reformas precisan normalmente de una década para llegar a ser realmente efectivas. A ello se añade la cuestión de que emprenderlas en tiempos de una actividad criminal intensa y violenta incrementa la problemática debido a que los propios cuerpos se encuentran desbordados y precisan concentrar su actividad en responder al problema antes que en adaptarse a la reforma requerida⁷⁶.

Por otro lado, las políticas de Mano Dura, también han dejado de lado las reformas que se deberían llevar a cabo en el ámbito judicial o penitenciario. Como ya se indicó en el apartado introductorio, el notable incremento de las desarticulaciones de bandas, organizaciones criminales y la detención de numerosos individuos vinculados con la delincuencia común ha provocado la sobrecarga del sistema judicial y penitenciario, agudizando la desconfianza social hacia estas instituciones⁷⁷.

Otra de las consecuencias de este tipo de políticas represivas ha sido la transformación sufrida por las bandas y organizaciones criminales, que han adaptado sus procedimientos y estructuras para hacer frente a unos organismos policiales que han adoptado técnicas más agresivas y potentes y que han empleado la captación de miembros de las mismas para labores de información. Incluso las maras han reducido progresivamente sus signos identificativos para evitar que sea excesivamente patente su vinculación de sus miembros con la organización⁷⁸. Paralelamente, la estigmatización de los miembros de las bandas criminales, ha dificultado todavía más su rehabilitación y reintegración social tras el paso por prisión.

En general los recientes análisis llevados a cabo por especialistas concluyen que en ningún país latinoamericano se ha observado una reducción de los niveles de criminalidad tras endurecer las penas y la actuación policial contra la criminalidad, a través de las políticas de Mano Dura, es decir, bajo unos parámetros puramente represivos. No solo su efectividad ha sido reducida, sino que bajo estos parámetros se ha logrado bloquear los sistemas de justicia y penitenciarios, que se han llegado a encontrar con cárceles masificadas y casos de violación de los derechos humanos con un elevado número de reclusos en situación de espera a ser juzgados, pero ya cumpliendo pena.

Políticas integrales

⁷⁵ (Dammert & Alvarez Veloso, Fuerzas Armadas en Seguridad Pública. ¿Solución o Problema?, 2008)

⁷⁶ (Felbab-Brown, 2013)

⁷⁷ (Arias, Rosada-Granados, & Fabián Saín, Reformas policiales en América Latina. Principios y lineamientos progresistas., 2012)

⁷⁸ Jütersonke, O., Muggah, R., & Rodgers, D (2009). Gangs and Violence Reduction in Central America. Security Dialogue, vol.40, no.4-5.

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

Tras el fracaso experimentado por las estrategias de Mano Dura anteriormente descritas, se ha comenzado a plantear la necesidad de rediseñar las estrategias de seguridad únicamente centradas en el Estado y la acción represiva. Deben ser complementadas con otras, de carácter preventivo, que tengan puesta también la mirada en el ciudadano y la sociedad, en reformas integrales de las instituciones públicas, la justicia y los cuerpos policiales; y campañas educativas y preventivas⁷⁹.

Para ello es preciso que se busque la participación de todos los actores sociales implicados de modo que se permita reconstruir las estructuras institucionales, la autoridad del Estado y la legitimidad del mismo desde arriba hacia la base y desde la base social hacia arriba⁸⁰, reforzando la sociedad frente a la criminalidad, con el horizonte puesto en una mejora de la gobernanza del país⁸¹.

La clave del éxito para desarrollar una estrategia efectiva contra el crimen organizado es que no debe centrarse únicamente en la supresión del crimen y la violencia a través del empleo de la fuerza pública. Se debe tratar de buscar una política multifacética que fortalezca los lazos entre el Estado y las comunidades marginadas; se extienda el cumplimiento de la ley a todo el territorio del Estado; se garantice el castigo de la corrupción y la ilegalidad; creando, además, un ambiente social, económico y político que mejore la situación del ciudadano⁸². En definitiva, lo que se plantea es fortalecer las instituciones y la acción del Estado como un todo, desde el punto de vista social, político e institucional.

Tratando de reunir todos los aspectos que deben abarcar este tipo de políticas⁸³, podría establecerse que deben recoger:

- Una reestructuración institucional de los gobiernos que asegure la gobernanza democrática, con un fortalecimiento y legitimación de las instituciones públicas. No debe olvidarse el debilitamiento que sufre la democracia cuando no existe capacidad de imponer el estado de derecho y el respeto a las leyes.
- Incremento de la actuación de la sociedad civil y su participación activa en la vida pública y, por tanto, también en materia de seguridad.
- Una reforma integral de todas las instituciones directamente responsables de la seguridad pública: policía, poder judicial, sistema penitenciario...
- En último lugar, y no por ello menos importante, compromiso de los diferentes gobiernos para impulsar la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado transnacional.

⁷⁹ (Contreras Pérez, 2008); (Meyer & Ribando Seelke, Central America Regional Security Initiative: Background and Policy Issues for Congress., 2013); (Ribando Seelke, Mexico: Issues for congress, 2011).

⁸⁰ (Beliz, 2007)

⁸¹ (Hernández de Mora)

⁸² (Felbab-Brown, 2013)

⁸³ (Arias, Rosada-Granados, & Fabián Saín, Reformas policiales en América Latina. Principios y lineamientos progresistas., 2012, pág. 21); (FLACSO, 2008); (Hernández de Mora); (Ribando Seelke, Mexico: Issues for congress, 2011); (Mathieu & Niño Guarnizo, 2011, pág. XVI); (Lagos & Dammert, 2012).

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

En esa línea de pensamiento, los últimos años los gobiernos de América Central han comenzado a poner la mirada en políticas integrales para afrontar el problema de las bandas y organizaciones criminales, abandonando las políticas de Mano Dura anteriormente expuestas, dado el escaso resultado obtenido con ellas y la mala fama internacional que actualmente tienen⁸⁴.

Con esta finalidad, se han creado instituciones diseñadas para coordinar las estrategias de prevención y han especializado unidades policiales centradas en esta faceta. En algunos casos estas políticas se han puesto en marcha, gracias al apoyo de donantes internacionales, comenzando por programas para impulsar el desarrollo de planes de prevención en determinados gobiernos locales. Sin embargo, la realidad es que muchos de ellos se han encontrado a la postre con problemas presupuestarios para ser puestos en marcha con éxito⁸⁵.

De hecho, Basombrío y Dammert alertan sobre este último problema, el presupuestario, dado que muchas de las políticas de carácter preventivo que se vienen poniendo en marcha en los últimos años carecen del suficiente apoyo político y presupuestario. Tal y como ambos indican, ningún país latinoamericano ha implementado todavía un programa de este tipo de una forma suficientemente efectiva y continuada en el tiempo como para permitir un análisis adecuado de su efectividad⁸⁶.

Esta observación es ya anunciada por otros estudios⁸⁷, que alertan de la escasa capacidad económica de los países de América Central para mantener la subvención de los programas preventivos si no es con la ayuda de los donantes internacionales. En cierto modo, la detracción presupuestaria de fondos del erario público en estos países, en los que el presupuesto es tan ajustado, supone suprimir partidas que podrían ir destinadas a otras iniciativas como incentivar el crecimiento económico del país⁸⁸.

En definitiva, la evolución del pensamiento de expertos e investigadores en materia de seguridad pública y ciudadana se está orientando a la implementación de políticas de seguridad multisectoriales y que deben ser acometidas de forma sinérgica por actores estatales, sociales y políticos. El fin último de este tipo de estrategias, como ya se ha indicado anteriormente, es el fortalecimiento del Estado en su conjunto, puesto que es la clave para que un país pueda afrontar de forma efectiva el problema de la violencia y criminalidad cuando sus tasas se han disparado. Puede decirse, y así se constatará posteriormente en el análisis comparativo que se aborda a continuación, que todo el conjunto de factores que, en mayor o menor medida, influyen en las tasas de violencia y criminalidad que sufre un país, se ven a su vez condicionados por la capacidad del Estado y la sociedad de actuar sobre ellos, por lo que es la fortaleza del conjunto la que determina

⁸⁴ (Ribando Seelke, *Gangs in Central America*, 2013)

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ (Basombrío & Dammert, 2013)

⁸⁷ (Jütersonke, Muggah, & Rodgers, 2009); (Ribando Seelke, *Gangs in Central America*, 2013)

⁸⁸ (Bakrania, 2013)

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

realmente la capacidad o incapacidad de un país para frenar y controlar su problema violento y su criminalidad, manteniéndolos en unos parámetros aceptables.

ANALISIS COMPARATIVO DEL TRIÁNGULO NORTE, COSTA RICA Y NICARAGUA. INTRODUCCIÓN.

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

Vista la parte general, se aborda el análisis comparativo que trata de centrarse en un conjunto de países, más homogéneos y que aleje el estudio de la diversidad del conjunto de América Latina.

La situación de seguridad en América Central se ha deteriorado considerablemente en los últimos años con la expansión de bandas, traficantes de drogas y otros grupos criminales en la región. Todo esto, unido a la debilidad institucional y la desigualdad social, ha llevado a que se incrementen notablemente los niveles de criminalidad y violencia.

Esta situación es especialmente intensa en el denominado “Triángulo Norte”, formado por El Salvador, Guatemala y Honduras, cuyas tasas de homicidio se encuentran entre las más altas del mundo. Muestra de ello es que desde hace ya varios años el principal problema social, a juicio de los ciudadanos de estos países, es la inseguridad⁸⁹.



Ilustración 1. Mapa de América Central. El triángulo de mayor tasa de criminalidad queda señalado en color naranja⁹⁰.

Frente a este caso, y como ya se indicó en la parte introductoria del trabajo, los procesos históricos experimentaron una evolución diferente en Nicaragua, Costa Rica y Panamá, donde la situación de seguridad es relativamente mejor, a pesar de que la percepción ciudadana sobre la gravedad del problema es también alta⁹¹. Este estudio comparativo, tan solo se va a centrar en los del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Muestra de las diferencias entre la problemática de cada país, se vuelcan en la siguiente tabla las preocupaciones más importantes para los ciudadanos. Tal y como puede

⁸⁹ Informe Latinobarómetro 2011. www.latinobarometro.org.

⁹⁰ (Meyer & Ribando Seelke, Central America Regional Security Initiative: Background and Policy Issues for Congress., 2013)

⁹¹ (Aguilera Peralta, 2008)

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

observarse, son diferentes si se observan los datos en el Triángulo Norte, en Nicaragua o en Costa Rica.

PAIS	Problema más importante	Porcentaje población
Nicaragua	Desempleo	29
Costa Rica	Corrupción	20
Honduras	Delincuencia/seguridad pública	28
Guatemala	Delincuencia/seguridad pública	30
El Salvador	Delincuencia/seguridad pública	21

Tabla 1. Problema social más importante por países⁹²

En la tabla siguiente, se reflejan los datos relativos a las tasas de homicidio por cada 100,000 habitantes y las de victimización en Centroamérica. En los últimos años, incluso los países con tasas de homicidio más reducidas, como Costa Rica y Nicaragua, han alcanzado tasas de victimización próximas a las de México.

País	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Belice	28,8	32,1	33,1	34,4	31,8	41,4	--
Costa Rica	7,8	8	8,3	11,3	11,4	11,3	10
El Salvador	62,4	64,7	57,3	51,9	70,6	64,7	69,2
Guatemala	42	45,1	43,3	46	46,3	41,4	38,5
Honduras	35,1	43	45,6	61,3	70,7	82,1	91,6
Nicaragua	13,4	13,1	12,8	13,1	14	13,6	12,6
Panamá	11,2	11,3	13,3	19,2	23,6	21,6	--
México	9,3	9,7	8,1	12,7	17,7	22,7	23,7

Tabla 2: Tasa de Homicidio Estimado en América Central y México⁹³.

Los numerosos conflictos militares vividos en la zona a lo largo de los últimos años y los regímenes dictatoriales sufridos, no han dado lugar a sociedades pacíficas y al desarrollo de instituciones democráticas lo suficientemente consolidadas. Es cierto que la adaptación de los Ejércitos y su sometimiento a la autoridad civil ha sido lo suficientemente satisfactoria⁹⁴, sin embargo ha habido otra serie de factores que han conducido a un desarrollo de la violencia muy elevado.

⁹² (Corporación Latinobarómetro, 2013)

⁹³ (Meyer y Ribando Seelke, Central America Regional Security Initiative: Background and Policy Issues for Congress. 2013)

⁹⁴ (Aguilera Peralta, 2008)

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

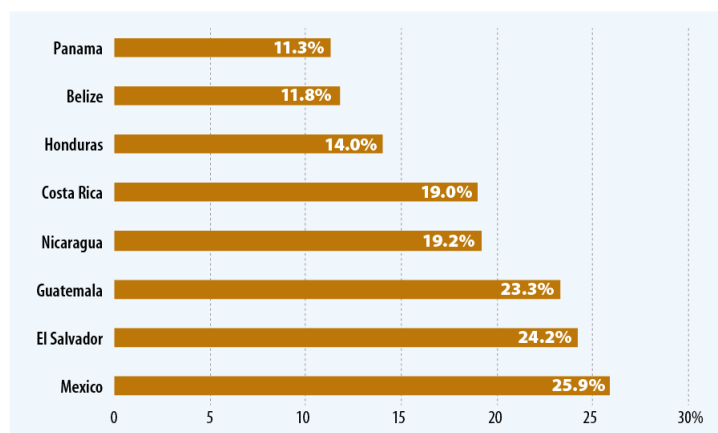


Tabla 3: Tasas de victimización en México y América Central. Porcentaje de personas víctimas de la violencia criminal⁹⁵.

Entre las causas se suele hacer referencia a las tendencias autoritarias que se han experimentado en los diferentes países de la región, el incremento del número de armas disponibles en la zona y la ineficacia de los Estados para poner fin a los conflictos sociales existentes⁹⁶. A todo ello, habría que añadir el elevado número de excombatientes en algunos países, que la historia reciente ha producido y una cultura proclive a recurrir a la violencia como medio para resolver las disputas sociales.

A lo largo de esta segunda parte del trabajo se va a efectuar un estudio comparativo de los cinco países señalados con objeto de determinar las principales causas de la violencia en la zona y la incidencia real que cada una de ellas tiene sobre el problema.

En el análisis del tejido social de los países de América Central, marcado por la desigualdad, el desempleo y la pobreza, se observa la existencia de un entorno de pocas oportunidades para una cada vez más numerosa población joven. A excepción de Costa Rica y Panamá (no incluido en el análisis comparativo), los índices de desarrollo humano en la región son especialmente bajos.

Por otro lado, los esfuerzos desarrollados por EEUU en Colombia y México, en la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad organizada, ha llevado a numerosos grupos criminales a desplazarse hacia América Central y a otros países donde pueden explotar con mayor facilidad la debilidad institucional del Estado y su escasa gobernabilidad⁹⁷.

Con todo, y a pesar de la fuerte influencia que los grupos violentos asociados al narcotráfico, bandas, maras y pandillas, tienen para provocar altas tasas de violencia, no

⁹⁵ (Meyer & Ribando Seelke, Central America Regional Security Initiative: Background and Policy Issues for Congress., 2013).

⁹⁶ (Calix, 2012)

⁹⁷ (Meyer & Ribando Seelke, Central America Regional Security Initiative: Background and Policy Issues for Congress., 2013)

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

puede olvidarse el hecho de que la debilidad institucional también lo favorece. Efectivamente, cuando un Estado débil trata de hacer frente a actores violentos que operan en su territorio la inestabilidad del mismo se acentúa, las estadísticas reflejan un incremento de la violencia y las organizaciones criminales suelen salir reforzadas especialmente en aquellas zonas en las que la presencia estatal es casi nula⁹⁸.

Por ello, el debilitamiento del Estado y la desigualdad social favorecen todavía más el crecimiento del crimen organizado, conduciendo al Estado a una espiral que lleva a la pérdida del control territorial y la legitimidad en el monopolio del uso de la violencia. A la larga, el proceso puede llegar a desembocar en un Estado fallido, situación que es muy similar a la reflejada desde hace tiempo en Guatemala que indujo a que en diversos círculos se temiese porque llegase a constituir un Estado fallido, algo que por el momento no ha llegado a suceder⁹⁹.

Las consecuencias de todo ello no son tan solo sociales, según el Banco Mundial, el coste del crimen y la violencia supone aproximadamente el 7,5% del Producto Interior Bruto (PIB) de la región. De hecho, tal y como indica Aguilera¹⁰⁰, para Guatemala suponía en 2005, el 7,3% del PIB, y en El Salvador en el año 2003, el 11,5%.

En un estudio publicado más recientemente por el Banco Mundial, la estimación del coste de la violencia es la siguiente:

PAIS	Coste de la violencia en porcentaje del PIB
El Salvador	10,8%
Guatemala	7,7%
Honduras	9,6%
Nicaragua	10%
Costa Rica	3,6%

Tabla 4. Coste de la violencia en porcentaje del PIB

Estos costes tan elevados no son otra cosa que pérdida de patrimonio del Estado que debe emplear gran parte de sus ingresos en afrontar un problema que priva de la inversión estatal a otras políticas no solo enfocadas en la seguridad preventiva, sino en actuaciones educativas, sanitarias o infraestructuras que favorezcan el desarrollo social y den estabilidad al país.

⁹⁸ (UNODC (Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito), 2012)

⁹⁹ (Aguilera Peralta, 2008)

¹⁰⁰ Ibid.

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

Otra cuestión que se aborda en el análisis comparativo es la presencia de los grupos criminales, bandas, maras y la criminalidad organizada que opera, de forma estimada, en cada uno de los países. También se analiza el elevado número de armas presente en la zona y el reducido control existente de las mismas, lo que favorece la disponibilidad de las mismas y que se arrojen unas tasas elevadísimas en el porcentaje de homicidios producidos por su empleo. Se observará, de este modo, la íntima asociación entre presencia de armas, grupos criminales y narcotráfico, que ha generado dos flujos de armas en la región, uno interno y otro de exportación, principalmente hacia Colombia y México¹⁰¹.

Las políticas implantadas en la zona merecen también la atención del trabajo, puesto que el impacto de las políticas de Mano Dura, de carácter especialmente represivo, que se implantaron al principio en los países del Triángulo Norte fue muy grande. Se trató de medidas cortoplacistas y que buscaban simplemente una rentabilidad política pero no afrontaban el problema de forma integral, con lo que se produjo un mayor incremento de la violencia. De hecho, el resultado en estos casos fue que la debilidad estatal continuaba en clara desventaja frente al poder de las organizaciones criminales¹⁰².

Entre las consecuencias del escaso éxito de estas políticas se detecta un incremento de la desconfianza social en los gobiernos; un crecimiento de la seguridad privada, que ha alcanzado cotas en las que superaba en efectivos a las fuerzas públicas; y que la violencia radicada en estos países suponga un coste para el erario público muy alto – tal y como se ha expuesto anteriormente-.

Las políticas estables en materia de seguridad ciudadana exigen la existencia de instituciones estables y duraderas, con capacidad para aplicar la ley en todo su territorio y proporcionar servicios sociales a la población que se encuentra en todo el Estado, también a la afectada por la violencia. Cuando estas condiciones no se dan, se produce un deterioro de la gobernabilidad social, la democracia y la eficacia del Estado de derecho¹⁰³, favoreciendo la implantación del crimen organizado y la expansión del delito.

ACTORES DE LA VIOLENCIA Y FACILITADORES DEL DELITO: MARAS Y PANDILLAS; NARCOTRAFICO; Y DISPONIBILIDAD DE ARMAS

Inicialmente se va a efectuar un repaso de cada uno de los principales actores violentos que actúan en los países que se somete a análisis. Se trata de conocer el impacto que realmente tienen sobre el fenómeno de la violencia en su conjunto y los principales

¹⁰¹ (Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, 2012)

¹⁰² (UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito), 2012)

¹⁰³ (Fruhling, 2012)

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

factores que favorecen su implantación, de modo que se vaya efectuando una selección de las causas comunes a su presencia y que son más determinantes.

1. Pandillas, Bandas o Maras

Las maras¹⁰⁴ son pandillas de delincuentes de edades comprendidas entre los 11 y los 40 años aproximadamente, caracterizadas normalmente por un profundo resentimiento social, que provoca que sus actuaciones delictivas tengan una violencia desproporcionada. Sus miembros suelen ser consumidores habituales de droga, con un fuerte sentido territorial, y que exaltan su identidad mediante códigos propios y tatuajes.

Las maras más relevantes en América Central y con vínculos en EEUU son la denominada “Calle 18” – también conocida como M-18 – y su principal rival, la Mara Salvatrucha¹⁰⁵ - MS-13 -.

En los últimos años se viene atribuyendo gran parte de la violencia criminal en la región a estos grupos jóvenes que operan transnacionalmente y que también tienen vinculación con grupos similares radicados en EEUU. Sin embargo hay discrepancias acerca del número de homicidios de los que realmente son responsables las maras. En ocasiones se les atribuyen un elevado porcentaje de los mismos que pueden haber sido ocasionados simplemente por la delincuencia común.

En lo que sí que hay cierto consenso es en reconocer que, poco a poco, estos grupos criminales han ido desarrollando otro tipo de actividades delictivas como la extorsión, el secuestro, el tráfico de personas, de armas y de drogas, que indudablemente favorecen el incremento de las tasas de violencia¹⁰⁶.

La evolución de las maras hacia el desarrollo de unas estructuras que facilitan su supervivencia como grupos, hace que sean consideradas en muchos foros como organizaciones de crimen organizado. Sin embargo, su actividad central hoy en día se desenvuelve entorno a lo que llaman la renta o extorsión a la población, que constituye su principal fuente de ingresos, a cambio de protección contra cualquier amenaza o por simplemente evitar sus actividades violentas¹⁰⁷.

El tráfico de drogas es otra de sus principales fuentes de ingresos, puesto que junto a los cárteles, que actúan a nivel internacional, las maras son los principales distribuidores

¹⁰⁴ La palabra "mara" deriva de las hormigas marabuntas en alusión a la forma en que éstas se expanden, invadiendo y devorando todo lo que encuentran a su paso. Sin embargo, también hay quien apunta a que simplemente se origine en el neologismo "Mara", utilizado popularmente como sinónimo de "grupo de amigos".

¹⁰⁵ La palabra Salvatrucha estaría formada por El Salvador y "trucha", expresión que define al sujeto que es hábil o astuto para escaparse de la policía.

¹⁰⁶ (United Nations Office on Drug and Crime, 2011)

¹⁰⁷ (Murcia, La militarización de la seguridad pública en El Salvador III, 2013)

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

locales en cada uno de los países de la región, desde las clicas¹⁰⁸ (MS-13) o canchas¹⁰⁹ (M-18) hasta las calles. Además, poco a poco, la actividad marera se está ampliando también hacia el tráfico de armas y de personas¹¹⁰.

El número de miembros de maras en América Central se estima, según Naciones Unidas, en torno a los 70.000¹¹¹. El problema es mayor en el Triángulo Norte, donde la UNODC estima que hay unos 36.000 miembros de estos grupos en Honduras, 20.000 en Guatemala y otros tantos en El Salvador. Estas estadísticas son considerablemente altas comparadas con los 4.500 en Nicaragua o los 2.660 en Costa Rica¹¹².

En El Salvador, según la Policía Nacional Civil (PNC) en 2011, la tercera parte de la población adulta que se encuentra en las cárceles salvadoreñas, unos 8.000, son miembros o están directamente vinculados con las maras o pandillas. En todo el país, unos 20.000 jóvenes están vinculados a las maras, principalmente la MS-13 (unos 12.000) y la M-18 (entre 8.000 y 10.000)¹¹³ y se estima que el 45% de los homicidios son cometidos por miembros de las mismas. A pesar todo, al no existir unas estadísticas definidas, el cálculo de la incidencia de su actividad en los homicidios es más bien práctico por parte de la PNC. En cambio, el Departamento de Estadísticas Forenses del Instituto de Medicina Legal sostiene que en 2009 solo el 11.8% de los homicidios estuvo vinculado a los miembros de pandillas¹¹⁴. Es decir, que como se indicó anteriormente, es difícil tener una idea clara de la incidencia real de la actividad marera en las tasas de violencia.

Cuando el presidente salvadoreño Mauricio Funes nombró al general retirado David Munguía como ministro de justicia y seguridad pública en noviembre de 2011, se esperaba un regreso a la política dura del gobierno salvadoreño contra la violencia. Sin embargo reformó la policía y creó una nueva unidad policial con formación y material estadounidense. Al mismo tiempo impulsó el apoyo del gobierno a la iglesia católica para lograr una tregua entre la M-18 y la MS-13.

En marzo de 2012, también se acordó el traslado de varios líderes de dichas bandas a prisiones con menor nivel de seguridad y ciertos beneficios penitenciarios para los mismos con objeto de facilitar la continuidad de las negociaciones. Lo cierto es que desde que se produjeron estos traslados y las medidas reseñadas, se ha reducido notablemente el número de homicidios en El Salvador, pasando de unos 14 diarios a 5,5¹¹⁵.

La UNODC cifra en más de 20.000 los miembros vinculados con las maras o pandillas en Guatemala, una de las causas principales de la violencia que vive el país, unos 5.000

¹⁰⁸ Células básicas del conjunto de la Mara MS-13.

¹⁰⁹ Células básicas del conjunto de la Mara M-18.

¹¹⁰ (World Bank, 2011)

¹¹¹ (Meyer & Ribando Seelke, Central America Regional Security Initiative: Background and Policy Issues for Congress., 2013, pág. 10)

¹¹² (Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, 2012); (World Bank, 2011)

¹¹³ (Amaya Cobar, 2011)

¹¹⁴ (Cuadra, 2011)

¹¹⁵ (Ribando Seelke, Gangs in Central America, 2013) Hay que poner que es de 2013

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

de los cuales serían de la Salvatrucha y entre 14.000 y 17.000 de la M-18¹¹⁶. Sin embargo, muchos expertos consideran que, a pesar de la “visibilidad” de estos grupos, gran parte de la violencia no es achacable a ellos, sino a la delincuencia organizada y el narcotráfico. De hecho, se considera muy significativo que en regiones donde hay unas tendencias notables al incremento de las tasas de homicidios, la presencia de las maras sea muy reducida¹¹⁷. Es por ello que se considera que realmente debe atribuirse una parte grande de las tasas violentas a la actividad de los cárteles de la droga mexicanos que operan en territorio guatemalteco.

Es en Honduras donde el problema generado por las maras y grupos criminales es mucho mayor. Puede considerarse que han pasado a tomar el espacio público y privado de numerosas ciudades, ante la ineficacia policial y de los instrumentos de seguridad pública. Se estima que hay unos 5.000 miembros de la Salvatrucha en este país y otros 5.000 de la M-18¹¹⁸. La actividad delictiva que llevan a cabo se traduce en muchas ocasiones en cambios notables de estilo de vida, derroche y ostentación de los criminales, reflejando las altas tasas de impunidad que existen en el país, similares a las señaladas anteriormente en Guatemala¹¹⁹.

La situación es bastante diferente en los otros dos países objeto del estudio comparativo. En Nicaragua se ha llevado a cabo una estrategia de prevención orientada a la criminalidad juvenil en la que se implica la propia policía. Esta estrategia se centra en la familia, los colegios y en la participación de la propia sociedad. De hecho, el apoyo internacional y de varias Organizaciones No Gubernamentales (ONG,s) al trabajo de la División de Asuntos Juveniles de la Policía Nacional Nicaragüense se está desarrollando en 11 municipios diferentes donde hay un elevado riesgo de criminalidad juvenil. Estrategias similares son desarrolladas en Costa Rica, donde los esfuerzos de prevención y rehabilitación son los que protagonizan la actividad sobre bandas en este país¹²⁰.

En definitiva, y siendo difícil establecer de forma clara la incidencia real que la presencia o no de las maras tiene en la violencia de cada país, puede considerarse que el mayor problema violento generado por ellas radica tanto en El Salvador como en Honduras, mientras que en Guatemala, aunque su presencia es también muy alta, las organizaciones vinculadas con el narcotráfico son, aparentemente, las que tienen realmente más influencia en las altas tasas de violencia.

En todo caso, no se debe pasar por alto que normalmente las tasas de violencia son más altas en las zonas en las que existe una fuerte disputa entre grupos rivales por su control, más que por la mera presencia de las mismas¹²¹.

¹¹⁶ (UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito), 2012)

¹¹⁷ (Ribando Seelke, Gangs in Central America, 2011)

¹¹⁸ (UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito), 2012)

¹¹⁹ (Salomón, 2011)

¹²⁰ (Ribando Seelke, Gangs in Central America, 2013)

¹²¹ (UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito), 2012)

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

Visto lo anterior, se considera muy importante reflejar algunos de los principales factores señalados normalmente como causantes del desarrollo de las maras, su implantación y, por tanto, generadores de la violencia en Centroamérica:

- La pobreza, que según el informe de Desarrollo Humano del PNUD 2011 en los países de la zona alcanza entre un 25 y un 35% en lo que a Índice de Pobreza se refiere¹²².
- La desintegración familiar, que lleva al adolescente a ingresar en las maras en busca de apoyo y la hermandad que le proporciona el grupo.
- La inexistencia de sistemas gubernamentales o privados adecuados de prevención y rehabilitación de la delincuencia, especialmente para los menores de edad.
- En muchas ocasiones, la influencia de los medios de comunicación social, que dan publicidad a las acciones cometidas por las maras, mitificándolas y haciéndolas más atractivas al joven desarraigado.

No suele hacerse referencia a la cuestión de la debilidad institucional del Estado como factor relevante, aunque es del que dependen los dos últimos factores indicados anteriormente. Cuando las instituciones de un país funcionan correctamente, como es el caso del sistema penitenciario o policial, se desarrollan planes integrales de seguridad ciudadana, también orientados a la prevención y rehabilitación, tanto de los jóvenes como de la población penitenciaria, evitando que las maras o bandas extiendan sus redes al interior de las cárceles o, entre la juventud.

Entre estos planes preventivos también existen políticas orientadas a frenar la influencia de los medios de comunicación social y la publicidad, en muchas ocasiones sensacionalista y engañosa, que mitifica estos grupos de delincuentes.

Como se ha indicado anteriormente, en El Salvador, donde se han puesto en marcha políticas orientadas a una tregua entre estos grupos, combinadas con otras estrategias enfocadas al ámbito penitenciario, se ha producido una reducción notable en esas tasas de criminalidad. Este hecho, junto a las reducidas tasas de criminalidad achacable a bandas y maras presentes en Costa Rica y Nicaragua, unos países que desarrollan también estrategias centradas en políticas preventivas e integrales, es reflejo del éxito de las mismas en la reducción de la violencia.

Es decir, que cuando las instituciones y el gobierno de un país son lo suficientemente sólidos, tienen la capacidad de impulsar actuaciones de este tipo con un resultado de reducción de la violencia. Por ello, hay que tener siempre presente la fortaleza institucional como un factor a tener en cuenta.

En conclusión, del estudio de las maras y pandillas se aíslan tres factores principales que favorecen su implantación: la pobreza, la desintegración social y la debilidad institucional.

¹²² <http://hdr.undp.org/es/estadisticas/ipm/>

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

2. Crimen organizado y narcotráfico

Hablar de violencia en América Central es hacerlo también del narcotráfico y las redes de crimen organizado, por lo que es obligado hacer una descripción del fenómeno en general y por países, tratando de valorar la incidencia del mismo en las tasas totales de violencia que se reflejan en las estadísticas.



Ilustración 2. Rutas de tráfico de drogas en América Central¹²³.

Los esfuerzos desarrollados por EEUU en Colombia y México en la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad organizada, han llevado a numerosos grupos criminales a desplazarse hacia América Central y a otros países donde pueden explotar con mayor facilidad la debilidad institucional del Estado y su escasa gobernabilidad¹²⁴.

Desde mediados de los años 90, la principal ruta para la entrada ilegal de droga en EEUU era a través de México. Todavía en 2007, solo una pequeña parte de la cocaína que pasaba por este país camino de EEUU había atravesado América Central. Sin embargo, en la actualidad se ha producido un cambio en el trayecto realizado, de modo que el 95% de la droga que ha llegado a suelo estadounidense, proveniente del sur – principalmente Bolivia, Colombia y Perú -, ha transitado por América Central, especialmente por los países del Triángulo Norte, realizando tramos más cortos del transporte de la droga en

¹²³ (Beittel, Mexico's drug-related violence., 2009)

¹²⁴ (Meyer & Ribando Seelke, Central America Regional Security Initiative: Background and Policy Issues for Congress., 2013)

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

lugar de utilizar grandes desplazamientos aéreos o marítimos como antaño¹²⁵. Este corredor ha sustituido a la tradicional ruta a través del Caribe hacia el sur de Florida¹²⁶.

Los países que en mayor medida sirven de plataforma intermedia para el transporte y almacenamiento de la droga que transita hacia el norte son Guatemala y Honduras. Con el tiempo, el narcotráfico también ha ampliado su presencia a otros países como Nicaragua e, incluso, Costa Rica, país que recientemente ha sido señalado por la Administración estadounidense como tal.

PAIS	Toneladas de cocaína en tránsito en 2010
Guatemala	330
Honduras	267
Nicaragua	140
Costa Rica	128
El Salvador	5

Tabla 5. Toneladas de cocaína en tránsito¹²⁷

Aunque inicialmente los cárteles de la droga mexicanos y colombianos tendían a contratar grupos locales o “transportistas” para llevar la mercancía a través de la región, en la actualidad muchas de las actividades de tránsito son controladas por traficantes vinculados al cártel mexicano de Sinaloa y los Zetas. En algunos casos estos cárteles también han empezado a pagar a muchos de estos transportistas en “especie”, permitiéndoles quedarse con una parte de la mercancía, lo que ha incrementado su consumo en muchos de los países centroamericanos y ha disparado los enfrentamientos entre grupos locales por lograr el control del mercado interno¹²⁸. Aunque las maras y bandas existentes en los países del Triángulo Norte han tratado de tomar el control de gran parte del tránsito de las drogas, su escasa capacidad de gestión ha hecho que los cárteles mexicanos sigan dirigiendo la mayor parte del negocio en base a acuerdos con este tipo de organizaciones criminales según el país o la zona en la que estén operando¹²⁹

En la actualidad son dos los perfiles de organización que operan en Centroamérica en el negocio de la droga, los transnacionales y los grupos locales o territoriales. En el primero de los casos, la mayoría de ellos son gestores de la adquisición y venta de droga desde los países de origen hasta el punto final, de ahí su carácter transnacional¹³⁰. Están vinculados en la mayoría de los casos con los cárteles mexicanos, que adquieren la droga

¹²⁵ (Meyer & Ribando Seelke, Central America Regional Security Initiative: Background and Policy Issues for Congress., 2013): (Servitja Roca, 2012)

¹²⁶ (Ribando Seelke, Sun Wyler, Beittel, & Sullivan, 2011)

¹²⁷ (UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito), 2012)

¹²⁸ (Meyer & Ribando Seelke, Central America Regional Security Initiative: Background and Policy Issues for Congress., 2013, pág. 9)

¹²⁹ (Ten Velde, 2012)

¹³⁰ (UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito), 2012)

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

directamente en Perú, Colombia o Bolivia. Posteriormente son los transportistas o redes locales vinculadas al territorio los encargados de llevarla hacia su destino final¹³¹.

Los transportistas tienen los contactos necesarios entre las autoridades de los países que forman parte del trayecto¹³² y suelen ser más bien redes de proveedores y receptores para la distribución local de la droga o su traslado por el interior de un territorio. En el caso de los grupos locales, están normalmente constituidos por grupos que controlan un determinado territorio y llegan a sustituir a las instituciones del Estado en esa zona. Ellos proporcionan también sus servicios para el tránsito de la droga a los grandes cárteles a cambio de un canon. Las maras o pandillas pueden considerarse como grupos locales o territoriales en lo que se refiere a la actividad del narcotráfico¹³³.

Guatemala

Como se indicó anteriormente, en Guatemala la actividad de los cárteles mexicanos es muy elevada, donde compiten con otros cárteles de origen guatemalteco por el control de las rutas de tráfico de drogas que discurren por territorio guatemalteco. Según algunas estimaciones entre el 40 y el 60% del territorio guatemalteco podría estar en manos de los cárteles de la droga¹³⁴.

El negocio de los transportistas en Guatemala está basado en grandes familias que se dedican a este negocio de forma tradicional, siendo realmente grupos territoriales o locales, como se han descrito anteriormente¹³⁵.

En lo que se refiere a la influencia en las tasas violentas que sufre el país, éstas son más elevadas en aquellos puntos en los que no se ha llegado a acuerdos y cuyo control se encuentra en disputa.

Honduras

También en Honduras los cárteles mexicanos han venido controlando las rutas del narcotráfico desde hace unos 15 años, pero su poder se ha expandido realmente en los últimos cinco, en detrimento de las organizaciones criminales locales. La puesta en marcha de la estrategia de seguridad mexicana, trasladó también las luchas de los cárteles a suelo hondureño¹³⁶. A pesar de todo, en la actualidad, parte de la actividad del tráfico

¹³¹ Ibid.

¹³² (Ten Velde, 2012)

¹³³ (UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito), 2012)

¹³⁴ (Meyer & Ribando Seelke, Central America Regional Security Initiative: Background and Policy Issues for Congress., 2013)

¹³⁵ (UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito), 2012)

¹³⁶ (UNODC (Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito), 2012)

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

ilícito de drogas todavía la desarrollan grupos locales o territoriales que actúan como transportistas y al margen de estos cárteles¹³⁷.

El derrocamiento del presidente Zelaya en 2009 provocó un debilitamiento institucional notable, al mismo tiempo que cayó el apoyo estadounidense en materia antidroga. Todo ello disparó la “fiebre de la cocaína”, con un notable incremento de los vuelos directos desde Venezuela y Colombia hasta las pistas de aterrizaje hondureñas. La lucha por el control de este corredor privilegiado acentuó todavía más la violencia en el país¹³⁸.

En Honduras, al igual que en el resto de países del Triángulo Norte, las bandas locales tienen tan solo el control de la droga al nivel de distribución. Recientemente la problemática se ha ampliado debido a que los cárteles han comenzado a pagar con droga a las maras y bandas locales a cambio de su servicio de distribución, lo que ha provocado una mayor violencia en la zona¹³⁹.

La impunidad con la que los cárteles han podido actuar en la zona les ha conducido a establecer de forma permanente instalaciones con aviones y medios de transporte, utilizando el territorio hondureño como una base de distribución logística, lo que ha incrementado notablemente el riesgo de que este país se convierta en un narco-estado¹⁴⁰

El Salvador

Los cárteles han establecido estrechos lazos con las maras asentadas en territorio salvadoreño, en mayor medida que en Guatemala u Honduras. La colaboración entre ambos tipos de organización se remonta a los años 90, pero se ha incrementado considerablemente desde que se produjo el desplazamiento de la actividad de los cárteles a América Central¹⁴¹.

Aunque la presencia inicial de los cárteles mexicanos provocó un enfrentamiento con los grupos locales, en El Salvador, muchos de los individuos vinculados con la criminalidad local vieron una oportunidad “laboral” la posibilidad de incorporarse a la estructura de los recientemente llegados cárteles. De este modo, muchas de las maras salvadoreñas han venido cobrando un canon a los cárteles a cambio de que puedan utilizar el territorio que hay bajo su control como ruta de transporte a cambio de apoyo y protección. Además los cárteles han incrementado la labor de reclutamiento de los líderes más importantes de las maras salvadoreñas por los contactos que tienen en Estados Unidos, lo que les facilita la penetración de la droga en este país¹⁴².

¹³⁷ (Ten Velde, 2012)

¹³⁸ (UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito), 2012)

¹³⁹ (Ten Velde, 2012)

¹⁴⁰ Ibid.

¹⁴¹ Ibid.

¹⁴² (Ten Velde, 2012)

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

En el caso salvadoreño, las maras tienen mucha más responsabilidad en el cómputo total de la violencia generada que en Guatemala, dado que su implicación en el tráfico de drogas es mayor que en el otro¹⁴³.

Costa Rica

En este país, las crecientes tasas de homicidios tienen una mayor relación con el incremento de la desigualdad que con el tráfico de droga. Las mayores tasas de violencia se producen en las zonas limítrofes con Panamá y en las costas, no en la capital. Según la UNODC las maras o el narcotráfico no son las principales razones de la violencia, sino el conflicto entre grupos locales por el control del mercado de la cocaína¹⁴⁴.

Nicaragua

En el caso nicaragüense la relación entre el volumen del flujo de la droga y el tamaño de la economía local es elevado, siendo el valor del tráfico de cocaína similar al 14% del PIB del país. Sin embargo, el tránsito de la misma se concentra en zonas remotas del país y en el que la participación de los propios ciudadanos nicaragüenses no tiene mucho valor. En todo caso, la tasa de homicidios en Nicaragua no aumenta y la sensación de inseguridad entre la sociedad tampoco es elevada, por lo que puede considerarse que la influencia de este factor no es especialmente importante.

A tenor de lo expuesto hasta el momento, tanto la proliferación del narcotráfico en la zona, como origen de la violencia reside principalmente en la debilidad institucional del país que han elegido como lugar de implantación. Muestra de ello es lo descrito en el caso hondureño.

La violencia que tiene su origen en el narcotráfico viene provocada en la mayor parte de las ocasiones por la disputa de zonas de actuación entre los cárteles o por los propios enfrentamientos entre las fuerzas policiales y las organizaciones dedicadas al narcotráfico. En el primero de los dos casos, cuando se debe al enfrentamiento entre dos organizaciones dedicadas al tráfico de drogas subyace un problema de debilidad institucional fuerte, un Estado que no es capaz de controlar y dar seguridad a su propio territorio. En determinadas ocasiones ni tan siquiera es capaz de llevar los servicios sociales básicos que demanda la población a determinadas zonas del país y es el crimen organizado quien acaba suplantando al propio Estado en esas tareas a cambio del apoyo social local.

En otras ocasiones, cuando el Estado trata de recuperar el territorio perdido frente a los cárteles de la droga, se producen episodios de violencia elevados, que tendrán una mayor o menor duración en el tiempo en función de hasta donde haya penetrado este tipo de criminalidad en la estructura de las instituciones y, por lo tanto, a la capacidad del país para poner en marcha políticas integrales de seguridad de forma efectiva, es decir,

¹⁴³ (UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito), 2012)

¹⁴⁴ Ibid.

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

contando con un respaldo institucional, social y político consistente y duradero en el tiempo.

Por último, es importante también tener presente el hecho de que para que el negocio de los cárteles funcione, debe contarse con los grupos locales y transportistas, que trabajan en connivencia con las autoridades del Estado, lo que suele también reflejar altos niveles de corrupción en la clase política y gobernante local, así como los cuerpos policiales.

En estos grupos locales, hay una elevada presencia de las maras y pandillas, por lo que podrían tenerse en cuenta los dos factores sociales como se indicó en el apartado anterior. Sin embargo, tal y como se ha venido argumentando, el factor predominante es el de la debilidad institucional, ya que en aquellos países en los que el Estado es débil, se favorece notablemente la implantación del narcotráfico y el crimen organizado en general, tal y como se analizará posteriormente y que es claramente reflejado en el trabajo de Alda¹⁴⁵.

3. Armas de fuego en la región

Es otra de las causas recurrentemente utilizadas para justificar las tasas de violencia que afectan a los países. Por ello, se considera fundamental dedicar un apartado a su estudio y tratar de valorar la incidencia real que tiene la presencia de armas en la criminalidad y los niveles de violencia de cada país. En todo caso, bastaría decir que el 75% de los homicidios producidos en el Triángulo Norte son cometidos con armas de fuego¹⁴⁶ o que el número de armas en poder de las bandas, maras, pandillas y grupos criminales es superior a la de los cuerpos policiales, para considerarlo un factor clave en el estudio del problema¹⁴⁷.

El tráfico ilícito y la presencia de armas en la zona no concierne únicamente a los países centroamericanos, sino también a Estados Unidos y su potente industria de armamento. No hay dudas de que el flujo de armas ilegales a través de la frontera entre México y Estados Unidos está en gran medida dirigido hacia el Triángulo Norte¹⁴⁸, lo que constituye un elevado porcentaje de las armas existentes en América Central.

El origen del resto de las armas presentes en estos países proviene principalmente de la herencia de las guerras civiles que se produjeron en la región y el desvío de armamento de las FAS y cuerpos policiales por parte de funcionarios corruptos¹⁴⁹.

Durante las tres guerras civiles se importaron armas a Centroamérica en cantidades desmesuradas (Guatemala en 1960-1965; El Salvador en 1980-1992; y en Nicaragua en

¹⁴⁵ (Alda Mejias, 2014)

¹⁴⁶ (Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, 2012)

¹⁴⁷ (Szabó, Garzón, & Muggah, 2013)

¹⁴⁸ (Salazar, 2013)

¹⁴⁹ (Szabó, Garzón, & Muggah, 2013)

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

1972-1991) que fueron a parar tanto a los grupos rebeldes como al Estado o a grupos de protección civil en el marco de los programas de contrainsurgencia¹⁵⁰.

Tras aquellas guerras, los ejércitos de la región fueron reducidos, pero no sus arsenales, por lo que el excedente, especialmente en lo que se refiere a armas largas, abunda. En el caso de las pistolas, la mayoría procede de Estados Unidos, algunas importadas de forma legal y otras en el marco del flujo ilegal¹⁵¹.

PAIS	Armas registradas	Armas estimadas	Armas por cada 100 habitantes
Costa Rica	43,241	115,000	2,8
El Salvador	198,000	450,000	7
Guatemala	147,581	1,950,000	15,8
Honduras	133,185	450,000	6,2
Nicaragua	N/D	385,000	7

Tabla 6. Armas de fuego en Centroamérica¹⁵²

A la desmesurada cantidad de armamento hay que añadir el deficiente control que existe sobre el mismo en la región. Las deficiencias no se producen solo en el registro, sino en su almacenamiento, en la concesión de licencias y en la venta al por menor, lo que facilita la circulación de las armas de forma desmesurada.

Todos estos factores facilitan que los grupos criminales tengan acceso a auténticos arsenales que dificultan notablemente la actuación policial y de las fuerzas de seguridad de cada uno de los países. Está claro que sin el poder económico procedente del narcotráfico, el crimen organizado no habría dispuesto del poder de fuego que tiene en la actualidad¹⁵³.

El negocio para el tráfico de armas radica en que, una vez ubicadas en Centroamérica, la necesidad de las mismas en uno u otro país fomenta que el negocio se mantenga. Es decir, la zona del Triángulo Norte constituye en la actualidad una especie de almacén de armas que genera hasta tres flujos diferentes: movimiento dentro de los países citados; a través de las fronteras dentro de la región; y movimiento de armas hacia Colombia y México principalmente¹⁵⁴. No en vano, los arsenales militares y policiales en Honduras, El Salvador y Guatemala han sido identificados como las mayores fuentes de armas de fuego ilegales.

¹⁵⁰ (Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, 2012)

¹⁵¹ Ibid.

¹⁵² (World Bank, 2011)

¹⁵³ (Szabó, Garzón, & Muggah, 2013)

¹⁵⁴ (Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, 2012)

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

PAIS	Armas en poder de civiles registradas	Armas en poder del Estado	Armas en poder de civiles no registradas
Costa Rica	200,000	N/D	200,000
Nicaragua	100,000	450,000	350,000
Guatemala	400,000	150,000	1,250,000
Honduras	250,000	100,000	500,000
El Salvador	225,000	125,000	250,000

Tabla 7. Armas en Centroamérica¹⁵⁵

Tampoco debe perderse de vista el inesperado papel de Nicaragua en todo el proceso de comercio de armas. Aunque se trata de un país con el programa de destrucción de armas más exitoso, y sus tasas de homicidios por arma de fuego está muy por debajo de los estándares regionales, Nicaragua dispone del mayor excedente de armas de la región. De hecho, se estima que el 36% de las armas de fuego ilegales que han tenido su entrada en Colombia proceden de Centroamérica, en particular de Nicaragua y Panamá.

El origen de todo está, por un lado, en un aspecto legal y otro cultural. En la tradición de las armas en una sociedad habituada en cierto modo a la violencia, por lo que el factor educativo debe ser tenido muy en cuenta. Como se verá posteriormente, los datos en materia de educación en Guatemala son deficientes, algo también reflejado para El Salvador, Honduras y Nicaragua.

En lo que se refiere a la cuestión legal, las instituciones están obligadas a efectuar un esfuerzo en materia de extremar los controles y el registro de armas, obligando a la destrucción y retirada de circulación de todas aquellas ilegales. No hay la más mínima duda de que la elevada presencia de armas en la zona, unida a la implantación de la criminalidad organizada y la falta de programas orientados específicamente a su retirada de la circulación favorece el incremento de la violencia.

Sin embargo se trata de una ardua tarea si se atiende a la escasa eficiencia y transparencia estatal y policial y la elevada corrupción registrada en la zona y que se analizará más adelante, en todos los casos, salvo en Costa Rica, donde estos factores se suavizan respecto a los demás.

A tenor de lo expuesto a lo largo de este apartado, observamos una vez más cómo en esta ocasión la cuestión de la presencia de armas no es tampoco un factor determinante en la violencia registrada. El elevado número de armas, legales e ilegales en Centroamérica se deriva indudablemente de la debilidad de unos Estados que no ponen en marcha programas adecuados de control, destrucción y registro de armas, al tiempo que en gran medida el desvío de muchas de estas armas hacia mercados ilegales se debe a la

¹⁵⁵ Ibid.

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

corrupción de los funcionarios destinados en organismos dedicados teóricamente a su control.

No cabe duda de que se trata, una vez más, de un factor secundario y en la identificación del problema de fondo, debe acudir al factor origen, la debilidad institucional del Estado.

POLÍTICAS DE SEGURIDAD IMPLANTADAS. CONSECUENCIAS.

Es muy importante estudiar el tipo de políticas de seguridad que los países centroamericanos han implementado a lo largo de los años en los que vienen sufriendo el problema de la violencia. No solo es importante conocer el tipo de políticas, sino también su evolución y, algo mucho más importante, los efectos que han causado en el fenómeno y por qué.

Sin embargo también es importante establecer una relación entre la efectividad de las políticas implementadas y el Estado de las instituciones y su relación con la sociedad. El motivo radica en que como se ha visto anteriormente, el factor común a la presencia de los actores violentos estudiados era la debilidad institucional, por ello, se va a tratar de determinar cuáles han sido las políticas de seguridad más efectivas en la lucha contra la violencia y el modelo institucional del país que las implementó. De este modo se tratará

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

de poder determinar la importancia relativa de este factor causal frente a otros como los sociales, a los que también se les achaca la implantación y desarrollo de actores violentos, especialmente las maras y pandillas.

1. Políticas de Mano Dura y su alternativa, políticas integrales de seguridad.

En los años 2000, la situación de seguridad estaba tan deteriorada, que los gobiernos del Triángulo Norte pusieron en marcha medidas más agresivas contra la criminalidad y se decantaron por el empleo de las FAS en tareas de seguridad pública, en lugar de implicarse en políticas integrales que abarcasen un amplio conjunto de medidas preventivas orientadas a mejorar la situación de la seguridad ciudadana¹⁵⁶.

Con estas políticas, los distintos gobiernos pretendían trasladar a la sociedad la firmeza del Estado a la hora de actuar contra la criminalidad y así obtener réditos electorales. No hay que olvidar que una gran parte de la sociedad demandaba este tipo de actuaciones con la esperanza de que tuvieran un efecto positivo reduciendo las altas tasas de violencia y criminalidad existentes¹⁵⁷.

De este modo, el Congreso salvadoreño aprobó una ley de este tipo en 2003, que fue seguida posteriormente de una ley denominada de Super Mano Dura en julio del año siguiente. Honduras, por su parte, aprobó una enmienda al código penal para que las maras fueran ilegalizadas y estableció condenas de hasta doce años para sus miembros.

Aunque Guatemala no llegó a aprobar unas reformas similares propuestas por su gobierno en 2003, la realidad es que en este país se lanzaron operaciones periódicas que terminaban en redadas multitudinarias contra personas sospechosas de estar vinculadas con las maras y en condiciones similares a las descritas en Honduras y El Salvador, a pesar de no tener una ley oficialmente aprobada para ello¹⁵⁸.

A pesar de los aparentes éxitos iniciales de estas políticas de Mano Dura, a medio plazo, los resultados han sido desalentadores, y cinco años después de la puesta en marcha de las mismas la situación era la siguiente según Ribando Seelke¹⁵⁹:

- Las tasas de violencia en Triángulo Norte seguían estando entre las más elevadas del mundo.
- La mayor parte de los jóvenes arrestados bajo la legislación de Mano Dura, habían sido puestos en libertad por falta de pruebas.
- Una parte de los jóvenes arrestados por error y posteriormente encarcelados, fueron finalmente reclutados por las maras o bandas mientras estuvieron recluidos en prisión.

¹⁵⁶ (Meyer & Ribando Seelke, Central America Regional Security Initiative: Background and Policy Issues for Congress., 2013)

¹⁵⁷ (Basombrio & Dammert, 2013)

¹⁵⁸ (Ribando Seelke, Anti-gang efforts in Central America: Moving Beyond Mano Dura?, 2007)

¹⁵⁹ Ibid.

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

- Las grandes redadas de jóvenes provocaron un exceso de población penitenciaria que provocó fuertes enfrentamientos entre bandas en el seno de las prisiones.
- Los jóvenes vinculados con las maras y bandas adaptaron sus procedimientos, evitando mostrar signos externos que delatasen su vinculación con las mismas.
- Se incrementaron notablemente las denuncias de grupos de defensa de los derechos humanos que consideraban que muchas de estas medidas infringían los derechos y libertades civiles¹⁶⁰.

Ante estos resultados son mayoritarias las opiniones de expertos y organismos internacionales que se decantan por el abandono de las políticas de Mano Dura y la introducción de estrategias de seguridad pública integrales¹⁶¹. Los gobiernos del Triángulo Norte han mostrado su predisposición a poner en marcha este tipo de planes integrales en la materia, pero la realidad es que las FAS siguen implicadas en actividades de seguridad pública y los planes de carácter integral son reducidos y de escasa envergadura¹⁶².

A continuación se hace una breve descripción de la situación actual en los países que se viene analizando y en los que se muestra cómo en los del Triángulo Norte no se ha conseguido avanzar en este tipo de estrategias, quedando los tímidos avances preventivos expuestos a las dificultades presupuestarias y a los intereses partidistas de cada uno de los gobiernos. El problema de fondo, continúa siendo una deficiente fortaleza institucional del Estado, en el que la corrupción y los intereses particulares continúan estando por encima de los del conjunto del país. Muestra de ello pueden analizarse los casos de Costa Rica y Nicaragua, donde la cuestión es abordada de diferente forma, pero con mayor madurez y solidez institucional, que hace que los objetivos del Estado sean claros y no partidistas en una cuestión tan importante.

2. El Triángulo Norte. Políticas de Mano Dura y la búsqueda de alternativas, políticas integrales de seguridad.

2.1. El Salvador

Quizá el único país del Triángulo Norte en el que la situación parece evolucionar mejor es en El Salvador, donde, al finalizar el Plan quinquenal 2010-2014, se ha logrado una tregua entre las dos principales Maras del país, la MS13 y la M18, con la intermediación de la iglesia católica y la autorización del Estado. El resultado inicial ha sido una fuerte reducción de los homicidios.

Sin embargo, la tregua está permitiendo acumular fuerzas a las maras y pandillas, puesto que mantienen su organización, control y capacidad de financiación, por lo que su

¹⁶⁰ (Ribando Seelke, *Anti-gang efforts in Central America: Moving Beyond Mano Dura?*, 2007)

¹⁶¹ (Meyer & Ribando Seelke, *Central America Regional Security Initiative: Background and Policy Issues for Congress.*, 2013)

¹⁶² *Ibid.*

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

resultado está cuestionado por la propia Conferencia Episcopal Salvadoreña, que considera que a pesar de los datos de reducción de homicidios, debe tratar de abordarse el problema de forma integral, ya que se viene produciendo un incremento de otro tipo de delitos que afectan a la sociedad salvadoreña¹⁶³.

La Embajadora de Estados Unidos en El Salvador indicó en agosto de 2012 también hizo hincapié en que aunque la tregua había permitido reducir las tasas de homicidios, era necesario emprender medidas que se centrasen en la raíz del problema, puesto que esta Tregua ha tenido poco impacto en robos, asaltos y otro tipo de crímenes¹⁶⁴.

En los últimos dos años, el gobierno de Funes¹⁶⁵, ha puesto en marcha una serie de medidas preventivas como la Política Nacional de Justicia, Seguridad Pública y Convivencia¹⁶⁶, la creación de un Gabinete de Prevención liderado por el Viceministro de Justicia y Seguridad Pública¹⁶⁷; un Plan para el control y eliminación de armas de fuego; programas preventivos a nivel municipal; un programa de Inserción Socioeconómica de Jóvenes en Riesgo¹⁶⁸; y una Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia¹⁶⁹.

En conjunto, los indicadores apuntan en la buena dirección. La puesta en marcha de estas medidas responde, en gran medida, a que El Salvador es el país más robusto institucionalmente de los tres del Triángulo Norte. Es por ello que su gobierno puede permitirse dar pasos decididos en determinadas políticas de seguridad a sabiendas de que cuenta con el respaldo social y de otros grupos políticos en materias cruciales para el conjunto del país.

En todo caso, no cabe duda de la necesidad de que estos pasos iniciales en materia de seguridad pública integral, deben consolidarse en el futuro, puesto que los halagüeños resultados de la Tregua no son debidos a una desactivación del problema de fondo, sino a una situación en la que las Maras y grupos criminales no precisan de enfrentarse entre sí como hace unos meses.

Por ello, además de las medidas descritas anteriormente se debe insistir en dos ámbitos que deben considerarse prioritarios, la policía y la falta de recursos económicos. Todo apunta a que queda mucho tiempo antes de que la policía nacional se haga cargo de la política de seguridad, tal y como es deseable, puesto que el número de militares empeñados en tareas de seguridad es muy elevado y se ha ido incrementando

¹⁶³ (Fernández, Anuario)

¹⁶⁴ (Ribando Seelke, Gangs in Central America, 2013)

¹⁶⁵ (Ribando Seelke, Gangs in Central America, 2011)

¹⁶⁶ (Meyer & Ribando Seelke, Central America Regional Security Initiative: Background and Policy Issues for Congress., 2013)

¹⁶⁷ (Central America Country Management Unit, 2012)

¹⁶⁸ (Smutt, 2013)

¹⁶⁹ Ibid.

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

continuamente hasta 2011 sin que se haya desactivado por el momento, tal y como se refleja en la tabla adjunta.

Año	Nº efectivos
2006	897
2007	1432
2008	1975
2009	6500
2010	8200
2011	8200

Tabla 8. Personal militar asignado a tareas de seguridad ciudadana¹⁷⁰

El otro gran problema que afronta el gobierno Funes es la falta de recursos presupuestarios, lo que dificulta notablemente la puesta en marcha de una adecuada estrategia integral que aglutine las medidas que lograrían a medio y largo plazo reducir las elevadas tasas de violencia, de ahí la importancia de que se mantengan los programas financiados por los organismos internacionales en esta materia¹⁷¹. Al igual que en el resto de los países de la comparativa, El Salvador se ve afectado por las dificultades presupuestarias, fruto de su reducido PIB, que le coloca en la posición 76 del mundo y con una reducida renta per cápita, de tan solo 3,371 dólares¹⁷².

2.2. Guatemala

En Guatemala, lo más destacable en lo que se refiere a medidas gubernamentales enfocadas en reducir la violencia ha sido la decisión adoptada por el gobierno de Pérez Molina, que puso en marcha un conjunto de protocolos que coordinasen la actividad de las FAS en operaciones relacionadas con la seguridad pública. Esto ha provocado que numerosas organizaciones de derechos humanos hayan llamado la atención por lo que consideran una nueva militarización de la seguridad pública en este país¹⁷³.

La escasez de propuestas o directrices del gobierno guatemalteco en un sentido diferente al de la simple estrategia de Mano Dura, hace que prácticamente todas las esperanzas de expertos y organismos internacionales de que se pongan en marcha en Guatemala

¹⁷⁰ (Central America Country Management Unit, 2012)

¹⁷¹ (Meyer & Ribando Seelke, Central America Regional Security Initiative: Background and Policy Issues for Congress., 2013)

¹⁷² <http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf>; www.countryeconomy.com

¹⁷³ (Meyer & Ribando Seelke, Central America Regional Security Initiative: Background and Policy Issues for Congress., 2013)

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

políticas integrales pasan por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)¹⁷⁴.

Desde su creación han sido muchos los campos de investigación de la CICIG y sus informes han sido muy valorados, logrando que el gobierno guatemalteco haya puesto en marcha reformas legislativas e institucionales recomendadas por la CICIG. A pesar de todo ello, se considera que el sistema institucional guatemalteco sigue siendo débil y que es preciso que se mantenga la labor hasta ahora desarrollada por la Comisión¹⁷⁵. Sin embargo, no hay que olvidar que este organismo carece de identidad suficiente como para cambiar un sistema que precisa de una actuación derivada y dirigida por el propio Estado hacia sus instituciones.

En definitiva, el panorama de reformas guatemalteco se encuentra estancado y no avanzan las políticas integrales por parte del Estado, todavía anquilosado en el empleo de las políticas de Mano Dura que tan corto recorrido han demostrado tener. Además es importante no perder de vista que la financiación es otro de los graves problemas que afronta Guatemala, a la hora de garantizar que la implantación de tales políticas a medio y largo plazo queden garantizadas, tal y como se refleja en los trabajos del International Crisis Group y Meyer y Ribando¹⁷⁶.

Aún más agudizado que en el caso salvadoreño es la situación y capacidad económica guatemalteca, que se refleja en un PIB de 50,234 dólares en 2013, pero con una renta per cápita de tan solo 3,331¹⁷⁷. Por ello, la cooperación y financiación internacional son también aspectos claves para que los tímidos proyectos piloto que en materia de prevención se están llevando a cabo tengan garantizada su continuidad, ya que algunos de ellos ni siquiera parecen contar con el apoyo de los altos cargos de la PNC¹⁷⁸.

2.3. Honduras

Honduras amplió en 2011 las misiones de sus FAS en materia de seguridad pública sin establecer un periodo de tiempo límite de las mismas, justificando la medida en necesaria mientras se llevaba a cabo la reforma de su Policía Nacional. La consecuencia es que se

¹⁷⁴La CICIG aglutina un conjunto de funcionarios internacionales y guatemaltecos y dispone de un presupuesto anual de 20 millones de dólares aportados por donaciones internacionales. Inicialmente su mandato se planteó por dos años y ha sido ampliado en tres ocasiones más, hasta alcanzar en la actualidad finales de septiembre de 2015. Otros países centroamericanos están considerando también la puesta en marcha de un modelo similar, dados los exitosos resultados del mismo. Se trata de un órgano impulsado por Naciones Unidas, y creado en 2007, que trata de mejorar la eficacia de los miembros del cuerpo de policía y la fiscalía guatemalteca; impulsar la actuación policial en labores preventivas; mejorar sus relaciones con la sociedad guatemalteca; y efectuar recomendaciones en materia de seguridad pública y de reformas institucionales.

¹⁷⁵ (Meyer & Ribando Seelke, Central America Regional Security Initiative: Background and Policy Issues for Congress., 2013);

¹⁷⁶ Ibid.

¹⁷⁷ <http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf>; www.countryeconomy.com

¹⁷⁸ (Hernández Batres, 2013)

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

ha delegado excesivamente en cuadros militares y policiales las cuestiones de seguridad, abandonando la necesaria dirección civil en la materia¹⁷⁹.

Esta militarización de la seguridad pública hondureña se deriva de la falta de una política de seguridad clara del gobierno, que debería haberse orientado a buscar soluciones integrales que aunasen políticas represivas y preventivas. Sin embargo, lo que se ha venido produciendo es una sucesión de políticas represivas, cortoplacistas e ineficaces¹⁸⁰. Entre las principales consecuencias, la fuerte represión y las violaciones de derechos humanos, tal y como las organizaciones no gubernamentales vienen denunciando¹⁸¹.

Desde 2011 se ha impulsado un tímido proceso de reforma que trata de atajar la violencia, la corrupción del sistema de justicia y la impunidad del crimen y la violencia. Sin embargo esta reforma no ha logrado el efecto inicialmente esperado, y los líderes políticos, ante su incapacidad para solucionar el problema, han puesto de nuevo en marcha respuestas improvisadas y regresivas, sin abordar la cuestión de forma efectiva¹⁸².

A todo ello se une la escasa capacidad económica de un país que ostenta el puesto 107 del mundo, con un PIB de 18,500 millones de dólares anuales y una renta per cápita de tan solo 2,331 dólares¹⁸³

3. Un enfoque diferente de la política de seguridad pública. Costa Rica y Nicaragua.

3.1. Costa Rica

Entre los años 2010 y 2011 Costa Rica demostró la posibilidad de revertir la tendencia criminal de la región a través de enfoques integrales que atienden tanto a las políticas de prevención, al control y a la rehabilitación de las personas privadas de libertad. La política costarricense siempre ha basado sus decisiones en su condición de democracia desarmada y la confianza en sus instituciones¹⁸⁴.

Además del estilo de gobierno y sus instituciones, que siempre han caracterizado a Costa Rica, el PNUD subraya varios de los factores que hacen que la situación de seguridad en este país sea diferente a la del resto de los países analizados anteriormente¹⁸⁵:

¹⁷⁹ (Ribando Seelke, Gangs in Central America, 2011)

¹⁸⁰ (Meyer & Ribando Seelke, Central America Regional Security Initiative: Background and Policy Issues for Congress., 2013)

¹⁸¹ (Mendez, 2013)

¹⁸² Ibid.

¹⁸³ <http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf>; www.countryeconomy.com

¹⁸⁴ (Araya Amador, Loría Ramirez, & Vargas Pérez, 2013)

¹⁸⁵ (PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo)

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

- Las pandillas no constituyen todavía un problema social y delictivo.
- Las políticas de Mano Dura contra la delincuencia han sido rechazadas hasta el momento.
- No se conocen operativos de “limpieza social”.
- Las instituciones costarricenses que intervienen en las políticas de seguridad tienen como referente los valores de un Estado de Derecho.

Con objeto de rectificar el incremento de las tasas de violencia en el país, Costa Rica puso en marcha el Plan Nacional de Desarrollo María Teresa Obregón, entre los años 2011 a 2014. Este plan abarcaba cuatro áreas estratégicas en el ámbito de la seguridad ciudadana y la paz social: fortalecimiento de la policía y el sistema penitenciario; reforzamiento de la lucha contra la criminalidad organizada; y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y la convivencia¹⁸⁶.

Derivado de ese Plan Nacional, se puso en marcha una Política de Estado en materia de Seguridad Ciudadana y la Paz Social (POLSEPAZ) y un Plan Integral de Prevención, que suponen la guía para poner en marcha cambios institucionales y normativos huyendo de las políticas de Mano Dura y adoptando otras que combinen las medidas represivas con las preventivas¹⁸⁷.

POLSEPAZ arrancó en colaboración con el PNUD y establecía un marco de desarrollo integral y sostenible. Es importante reseñar que su aprobación fue el resultado de una consulta nacional que involucró a los tres Poderes de la República, partidos políticos, sindicatos, cámaras empresariales, expertos, ONG,s y diferentes actores sociales. Tras la mejora de las estadísticas violentas, uno de los principales retos de POLSEPAZ es resolver el problema de la superpoblación carcelaria¹⁸⁸.

La actitud del país ante las medidas adoptadas por el gobierno costarricense en materia de seguridad muestra una madurez institucional, política y social mucho mayor que en la de los anteriores países estudiados. Puede afirmarse que la pieza clave para que se haya puesto en marcha POLSEPAZ es la fortaleza institucional costarricense, que permite el esfuerzo sinérgico de los principales actores del país para resolver una cuestión de Estado, pasando por alto las diferencias o intereses particulares.

También la cuestión económica es mucho mejor que la del resto, ya que a pesar de que su PIB es inferior al guatemalteco, dado su menor tamaño, se refleja su potencial económico en una renta per cápita de 9,387 dólares¹⁸⁹, que casi triplica a la del segundo de los países aquí comparados.

3.2. Nicaragua

¹⁸⁶ (Araya Amador, Loría Ramirez, & Vargas Pérez, 2013)

¹⁸⁷ (RESDAL, 2013)

¹⁸⁸ (Araya Amador, Loría Ramirez, & Vargas Pérez, 2013)

¹⁸⁹ <http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf>; www.countryeconomy.com

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

Aunque desde el principio se ha venido exponiendo que la situación entre el Triángulo Norte y Costa Rica y Nicaragua es muy diferente, a su vez, el caso de estos dos últimos países es también muy distinto, puesto que sus gobiernos han optado desde el principio por caminos diferentes.

El modelo policial nicaragüense es definido como comunitario y proactivo, siendo único entre los existentes en Centroamérica. Se basa en la presencia de la policía en el seno de la comunidad a la que sirve y por llevar a cabo una actuación preventiva, tratando de anticiparse a los fenómenos de competencia policial que puedan afectar a la seguridad de la comunidad¹⁹⁰. Desde su creación se ha caracterizado por haber definido sus funciones y competencias basándolas en las buenas prácticas policiales¹⁹¹

En muchas publicaciones se recalca que el éxito de la Policía Nacional nicaragüense ha sido su capacidad de integración con la comunidad. Su actuación ha estado orientada a mostrarse como una institución con capacidad de proporcionar seguridad a la sociedad, en lugar de una entidad de imposición de la ley. En este modelo de organización comunitaria, de arriba hacia abajo y desde dentro hacia afuera, se produjo la inserción de los Comités de Prevención Social¹⁹², pieza clave del sistema y que aúnan la implementación de programas preventivos¹⁹³.

Entre las policías nicaragüenses y las del Triángulo Norte hay cuatro diferencias básicas¹⁹⁴:

- En el Triángulo Norte, los cuerpos policiales son de concepción militar y están menos integrados en la comunidad, con la que mantienen contacto únicamente cuando salen a patrullar, y el resto del tiempo están acuarteladas. La nicaragüense tiene un sistema más administrativo, salvo las unidades especiales que son tan solo el 10% del total, el resto hace su vida en la propia comunidad.
- En Nicaragua hay más continuidad en los cargos superiores de la Policía, dando estabilidad a la institución - algo que también sucede en Costa Rica -.
- La policía nicaragüense cuenta con una Comisaría de la Mujer y la Niñez, como una especialidad nacional, centrada en la violencia contra las mujeres y los niños.
- En Nicaragua, se ha prestado una atención especial al sector de la juventud, centrando su esfuerzo en una faceta preventiva, proactiva y comunitaria, creándose la Dirección de Asuntos Juveniles.

El hecho de que se hayan puesto en marcha unos cuerpos específicos para la Mujer, la Niñez y la Juventud, es reflejo de un sistema policial muy consolidado y respaldado

¹⁹⁰ (Cajina, Seguridad en Nicaragua:¿La excepción en Centroamérica?, 2013)

¹⁹¹ (RESDAL, 2013)

¹⁹² Estos Comités, establecidos por la propia Policía Nacional en conjunción con diferentes actores sociales, se encargan de dar respuesta a cuestiones como seguridad, prevención del delito y actividades de desarrollo social de la comunidad.

¹⁹³ (Meléndez, 2013)

¹⁹⁴ (Cajina, Seguridad en Nicaragua:¿La excepción en Centroamérica?, 2013)

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

socialmente que tiene un objetivo preventivo muy claro, propio de los países más avanzados e institucionalmente robustos.

Sin embargo, la compleja situación económica de Nicaragua hace que su dependencia de la cooperación internacional para sostener estos recursos sea muy alta. Posiblemente esto explica por qué es el único país del ALBA que mantiene relaciones con Estados Unidos en materia de seguridad y defensa. No en vano, su PIB es el menor de los cinco países comparados, de tan solo 10,506 millones de dólares, y su renta per cápita de solo 1,733 dólares, más de cinco veces inferior a la costarricense.

Otro factor a tener en cuenta es la falta de transparencia del gobierno del presidente Daniel Ortega, que puede poner en riesgo la ayuda internacional, especialmente la estadounidense¹⁹⁵. Desde el ascenso de Ortega al frente del país, la propia Policía Nacional, activo más importante del país en materia de seguridad ciudadana, está siendo cuestionada.

Existe la percepción de que con el actual gobierno se están cimentando relaciones clientelares y partidistas con los altos cargos de la Policía Nacional, favoreciendo a grupos adscritos al FSLN¹⁹⁶ y no al interés comunitario. De hecho, también se viene cuestionando el mayor poder que los Consejos del Poder Ciudadano han adquirido sobre los de Prevención del Delito, lo que proporciona más control del Estado sobre la actuación comunitaria de la Policía Nacional¹⁹⁷.

De continuar esta tendencia, podría estar en riesgo el mantenimiento de un modelo policial que ha dado un excepcional resultado y que ha demostrado que es viable un sistema policial preventivo, integrado en la comunidad y al margen del devenir político del gobierno¹⁹⁸.

4. Conclusiones

La postura de impulsar medidas de Mano Dura, apoyadas en el empleo de las FAS como respuesta al fenómeno, han provocado el aumento de la violencia en la región, casos de violación de derechos humanos, y el incremento desmesurado de la población penitenciaria, entre otras cuestiones.

Tal y como se ha reflejado en este apartado, la clave del éxito en la lucha contra las altas tasas de violencia es la puesta en marcha de políticas integrales de seguridad pública que contemplen la reestructuración de los cuerpos policiales y los sistemas judiciales y penitenciarios; la lucha contra la corrupción; el impulso de una reforma institucional del Estado que permita fortalecer la gobernanza; y actuaciones sociales enfocadas a la lucha contra los desequilibrios y la mejora de la educación.

¹⁹⁵ Ibid.

¹⁹⁶ El FSLN es el Frente Sandinista de Liberación Nacional, partido del presidente Ortega.

¹⁹⁷ (Meléndez, 2013)

¹⁹⁸ (Meléndez, 2013)

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

Normalmente, la dificultad para poner en marcha este tipo de estrategias multisectoriales y mantenerlas en el tiempo, es que se exige un compromiso por parte del Estado y de la sociedad a medio y largo plazo, compromiso de la clase política y gobernante del país, sus actores sociales y sus instituciones para plantear políticas multisectoriales y reformas encaminadas a mejorar la seguridad ciudadana en su conjunto. En definitiva, la fortaleza del Estado es la principal exigencia para emprender políticas de seguridad en el camino adecuado, debe ser impulsada, promovida y ser la piedra angular para las reformas estatales e institucionales que muchos de estos países precisan.

Por cuestiones de amplitud del presente trabajo no se hace alusión al factor de la cooperación internacional, no solo en el aspecto informativo y de cooperación entre fuerzas policiales, sino en el aspecto económico. Como se ha venido demostrando, esta última cuestión, la económica, es muy importante, debido a que la implementación de las políticas integrales de seguridad exige un esfuerzo elevado y simultáneo en diferentes ámbitos, lo que absorbe un elevado porcentaje del PIB en economías modestas como las que corresponden a los países analizados.

Sin embargo, el factor económico se considera menos importante que el institucional, puesto que también el primero se ve condicionado por el segundo. Esto se debe a una cuestión tan simple como que a mayor debilidad institucional, menor porcentaje de la cantidad de dinero dedicada en origen llega al punto final para el que fue destinada. Por ello no es un factor tampoco especialmente determinante, sobre todo si volvemos al caso de Nicaragua, en el que la capacidad económica del país está en niveles similares a los del Triángulo Norte, pero tiene una tasa violenta muy inferior.

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

CAUSAS DE LA VIOLENCIA. FACTORES SOCIALES E INSTITUCIONALES

Una vez efectuado un análisis de los actores violentos que existen en América Latina y las políticas hasta ahora implantadas se inicia el estudio de un conjunto de factores sociales e institucionales que son normalmente asociados a la violencia en la zona, como origen de la misma.

En los análisis previos se ha apuntado ya a la debilidad institucional como el factor clave u origen de una amplia gama de causas posteriormente impulsoras o generadoras de estas altas tasas de violencia o de favorecer la presencia de bandas, maras o el crimen organizado. Sin embargo, en este apartado se pretende contrastar ese análisis, efectuado en base a la bibliografía estudiada sobre dichos aspectos, con el estudio de una serie de cuestiones como la pobreza, la educación, la satisfacción con la vida, la corrupción, la satisfacción con la democracia y el apoyo hacia ella o la confianza en el Estado.

Para ello, se han utilizado principalmente las encuestas realizadas para la elaboración del informe sobre desarrollo humano de Naciones Unidas y las estadísticas recogidas en el informe de la Corporación Latinobarómetro.

1. Factores sociales:

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

En este apartado, se reflejan una serie de datos estadísticos de los cinco países sometidos a la comparación, de modo que se trata de valorar hasta qué punto pueden influir de forma determinante en el desarrollo de altas tasas de violencia en alguno de los países.

Comenzando por el IDH, el país con un índice superior al resto es Costa Rica. Sin embargo, Nicaragua que, como se ha venido indicando, tiene unos niveles de violencia inferiores, se encuentra sumido en unas posiciones similares a los del Triángulo Norte. Esta notable diferencia en el índice general entre Nicaragua y Costa Rica dificulta aún más aislar un factor o causa social que aparezca con unas tasas similares únicamente en estos dos países y no en los del Triángulo Norte.

PAIS	IDH (puesto mundial)	Clasificación según el Ingreso nacional bruto per cápita menos el IDH	IDH no referido a ingresos
Costa Rica	0,773(62)	12	0,816
El Salvador	0,680(107)	-5	0,723
Honduras	0,632(120)	8	0,695
Nicaragua	0,599(129)	10	0,671
Guatemala	0,581(133)	-14	0,596

Tabla 9. Índice de Desarrollo Humano¹⁹⁹

Efectivamente, como se va a observar posteriormente, una vez se va ampliando la comparativa, y estudiando las encuestas relativas a la educación, satisfacción con la vida, IDH ajustado por la desigualdad, distribución de la riqueza e índices de transparencia, aparece el mismo problema, siendo prácticamente imposible encontrar un factor que permita dejarlo aislado por tener una clara influencia en el elevado índice de violencia de los países del Triángulo Norte frente a los otros dos.

En la tabla 10, se recoge el nivel de satisfacción general con la vida, la percepción de seguridad y la tasa de homicidios en el país.

En lo que se refiere a la primera cuestión, Costa Rica ofrece unas estadísticas mucho mejores que las del resto, mientras que el caso de Nicaragua, es el inferior de los cinco. Sin embargo, paradójicamente, en Nicaragua la percepción de seguridad es superior a la de los otros cuatro, arrojando Costa Rica un resultado similar a los otros países del Triángulo Norte a pesar de que sus tasas de violencia son las más reducidas.

El factor subjetivo de evaluar la situación de seguridad es la que provoca que Costa Rica se desmarque del resto de los países a pesar de arrojar unos niveles mejores en cuanto a índice de violencia debido a que la situación ha empeorado en los últimos años. Por ello, es normal que la encuesta refleje la preocupación social sobre la cuestión. Esta misma percepción subjetiva es la que hace que la opinión de los nicaragüenses califiquen la situación mejor que la de sus vecinos de Costa Rica.

¹⁹⁹ (Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, 2013)

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

PAIS	Satisfacción general con la vida (0 menos satisfecho, 10 más satisfecho)	Percepción de seguridad (% con respuesta si)	Tasas de homicidios (por cada 100.000 personas)
Costa Rica	7,3	41	11,3
El Salvador	6,7	42	69,2
Honduras	5,9	45	91,6
Nicaragua	5,7	51	13,6
Guatemala	6,3	41	38,5

Tabla 10. Satisfacción general con la vida y situación seguridad²⁰⁰

La educación es un aspecto crucial a tener en cuenta en los índices de violencia. Mejía y Mejía recalcan su importancia en el combate a la violencia juvenil, la organización y movilización de jóvenes posteriormente a su proceso educativo con objeto de mantener su interés en su propio desarrollo y en el servicio a otros grupos juveniles en sus comunidades. En la lucha contra la violencia juvenil, de gran incidencia en Centroamérica, es fundamental la gestión del conocimiento, orientando el futuro de la sociedad a la lucha contra la desigualdad y la humanización, favoreciendo al mismo tiempo la inserción socio-laboral desde las instituciones públicas²⁰¹.

Del análisis de las encuestas relacionadas con este campo se desprende como, una vez más, Costa Rica destaca sobradamente sobre el resto, especialmente en lo que se refiere a los estudios en educación secundaria y superior, pero Nicaragua se mantiene en unos niveles completamente similares a los del Triángulo Norte²⁰².

PAIS	Tasa Bruta de Matriculación		
	Primaria	Secundaria	Terciaria
Costa Rica	110	100	25,6
El Salvador	114	65	23,4
Honduras	116	73	18,8
Nicaragua	118	69	18
Guatemala	116	59	17,8

Tabla 11. Educación-1²⁰³

La misma situación se da en lo que se refiere a la tasa de alfabetización y maestros, aunque en esta ocasión, las tasas costarricenses no son tan superiores. Es interesante reseñar que tanto Nicaragua como Costa Rica son los que más destacan sobre el resto en lo que se refiere a la satisfacción con la calidad de la educación.

²⁰⁰ (Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, 2013)

²⁰¹ (Mejía & Mejía, 2009)

²⁰² (Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, 2013)

²⁰³ Ibid.

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

Una vez más, puede decirse que la propia sensación, aunque sea subjetiva, de la población es un índice importante a destacar por encima de las estadísticas que puedan tener un carácter más objetivo en cuanto al nivel de formación o calidad de la educación. No debe perderse de vista que esa subjetiva satisfacción es la que imprime robustez a las instituciones correspondientes, respaldadas por la propia sociedad que, a su vez, incrementará su colaboración con el gobierno.

PAIS	Tasa de alfabetización de adultos	Población con, al menos, educación secundaria completa	Maestros capacitados en educación primaria	Satisfacción con la calidad de la educación
Costa Rica	96,2	53,6	89,5	80
El Salvador	84,5	37,5	92,7	72,7
Honduras	84,8	19,8	36,4	63,6
Nicaragua	78	37,6	74,9	81
Guatemala	75,2	14,8	---	71,8

Tabla 12. Educación-2²⁰⁴

PAIS	Año promedio de escolaridad	Años esperados de escolaridad
Costa Rica	8,4	13,7
El Salvador	7,5	12
Honduras	6,5	11,4
Nicaragua	5,8	10,8
Guatemala	4,1	10,7

Tabla 13. Educación-3²⁰⁵

Estudiando el resultado del análisis del índice de desarrollo humano o el de educación, ajustados por desigualdad²⁰⁶, reflejados en la tabla 14, tampoco se logra extraer conclusiones comunes a los casos de Costa Rica o Nicaragua frente al resto, puesto que el único que realmente destaca es el primero de los dos países fruto lógico de su mayor desarrollo.

PAIS	IDH ajustado por la desigualdad	Índice de educación ajustado por la desigualdad
Costa Rica	0,606	0,601
El Salvador	0,499	0,429

²⁰⁴ Ibid.

²⁰⁵ (Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, 2013)

²⁰⁶ Ibid.

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

Honduras	0,458	0,413
Nicaragua	0,434	0,351
Guatemala	0,389	0,280
Níger (último)	0,200	0,107
Noruega (primero)	0,894	0,968

Tabla 14. IDH y educación ajustados por desigualdad

Tratando de recapitular, en el Triángulo Norte los IDH más reducidos se corresponden con estos países, tal y como se indica en la tabla 5, especialmente Guatemala. Datos similares se reflejan en las bajas tasas de alfabetización, años de escolaridad o población con educación secundaria finalizada, reflejados en las tablas 12 y 13.

Por ello, podría atribuirse a factores educativos y de desarrollo y pobreza, el crecimiento de las Maras o pandillas. Sin embargo, como se ha visto, Nicaragua está muy por debajo de Honduras o El Salvador en la tasa de alfabetización de adultos o el número de años promedio de escolarización de sus habitantes, mientras que sus tasas de violencia son mucho más reducidas y, todavía más importante, su población muestra una mayor satisfacción con la calidad de la educación que en los otros dos países.

Esto demuestra que estos factores son secundarios y que la fortaleza institucional está sobre ellos. Las políticas nicaragüenses y, sobre todo, la policía de este país, son claves en la implantación de programas preventivos orientados a la juventud que frenan los procesos de implantación y crecimiento de Maras y Pandillas.

Por ello, se concluye que ninguno de estos factores es determinante en lo que se refiere a las altas o bajas tasas de violencia que pueden afectar a los países, puesto que en las tablas se reflejaría una diferencia marcada especialmente con Costa Rica y Nicaragua, y esto no sucede.

Como se ha venido tratando desde el principio, la pobreza es una cuestión a la que de forma recurrente se le achaca, junto a la desigualdad, su fuerte influencia en el desarrollo de altas tasas de violencia. Para su estudio se ha acudido al informe de la Corporación Latinobarómetro de 2013 que analiza la percepción de la población acerca de la distribución de la riqueza²⁰⁷. Precisamente el país que sobresale sobre el resto es Nicaragua, aunque es uno de los más pobres de todos.

Paradójicamente, son los costarricenses los que consideran que en su país existe una distribución de la riqueza más injusta, a pesar de que su nivel de desarrollo o renta per cápita es superior a la del resto de los comparados, al mismo tiempo, y como se viene reflejando en las diferentes encuestas, el sentimiento o percepción de los nicaragüenses es también en este caso muy superior al del resto, a pesar de que las encuestas y estudios

²⁰⁷ (Corporación Latinobarómetro, 2013)

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

objetivos apuntan a que su situación de pobreza y desequilibrio social está en niveles similares a los del resto.

PAIS	Distribución de la riqueza (porcentaje justa y muy justa)
Nicaragua	41
El Salvador	28
Guatemala	22
Costa Rica	15
Honduras	12

Tabla 15. Satisfacción con la distribución de la riqueza

En este caso, se considera de nuevo importante la satisfacción de la sociedad nicaragüense sobre el reparto de la riqueza, algo que es en gran medida responsabilidad de las instituciones que dirigen el Estado y que refleja que, a pesar de que desde el punto de vista de la pobreza y las deficiencias del país, la sociedad respalda al Estado en mayor medida que en otros del Triángulo Norte, especialmente Honduras o Guatemala.

Costa Rica tiene un sistema social más avanzado, fruto del mantenimiento de unos logros sociales que se remontan a la década de los años 40 del pasado siglo. En ese momento se consolidó el acceso universal a la salud pública, una legislación robusta a favor de la clase trabajadora y un fuerte desarrollo económico, que permitió la creación de una clase media amplia, favoreciendo el fortalecimiento institucional y la creación de unas condiciones de vida altas. Fruto de todo ello, los datos estadísticos volcados en las tablas analizadas están, en general, por encima de la de los otros cuatro países, lo que si no se tuviese en cuenta Nicaragua, podría inducir a pensar que la educación, la pobreza o los índices de desarrollo tienen una influencia directa en las tasas de violencia de los países sometidos a estudio.

Sin embargo, analizando de forma conjunta los datos de Nicaragua, puede decirse que sus índices sociales son generalmente peores que los de El Salvador y Honduras, donde el problema de la violencia es mucho más acusado. Pero es importante recalcar una cuestión muy importante: si se observan los datos recogidos en la percepción del ciudadano acerca de la seguridad, satisfacción con la educación y distribución de la riqueza, el nicaragüense es mucho más optimista y tiene una actitud más positiva y de apoyo hacia sus instituciones que en el resto de los países, incluido Costa Rica.

Es decir que, de un modo u otro, el nicaragüense acepta mejor a sus instituciones, lo que debe ser analizado en el posterior apartado relativo a la gobernabilidad y fortaleza institucional. Cuando una sociedad da mayor apoyo a sus instituciones, tiene una actitud de mayor colaboración hacia ellas, lo que es beneficioso desde el punto de vista de la puesta en marcha de políticas y estrategias por parte del Estado, como la de seguridad

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

pública. El respaldo social a las instituciones supone una mayor fortaleza institucional del mismo, que es lo que queda patente del análisis de las encuestas mostradas anteriormente, que Nicaragua, como Estado, cuenta con un gran apoyo social a pesar de que los datos objetivos en cuanto a sus niveles educativos, de desarrollo, igualdad o pobreza sean peores.

2. Factores institucionales

En este punto, se trata de arrastrar la conclusión principal que se ha recogido a lo largo de los puntos anteriores, y en los que se ha observado como la mayoría de los factores estudiados tienen una fuerte dependencia de la fortaleza institucional o del Estado, por lo que su influencia real en la cuestión de la violencia es secundaria y no el origen. Esta influencia de la fortaleza institucional afecta tanto a las políticas a implementar para tratar de frenar la violencia como a la hora de favorecer la implantación de determinados actores violentos.

En primer lugar se procede a estudiar con carácter general la debilidad o fortaleza de las instituciones de los estados sometidos a la comparación, para centrarse posteriormente en dos de los sistemas estatales que son pieza básica para el control de la violencia y la delincuencia: el sistema policial y las FAS y el sistema penal y judicial.

2.1. Debilidad o fortaleza institucional

En los últimos años se ha hecho mucho hincapié en los problemas de gobernanza que afectaban a América Central, lo que hacía a muchos de los gobiernos de la región susceptibles de caer bajo la influencia de grupos de traficantes de drogas o criminalidad organizada, siendo incapaces de garantizar la seguridad pública o el control de sus propias fronteras y territorios.

Las instituciones se encuentran desbordadas a la hora de proporcionar las necesidades de la sociedad en materia de seguridad, lo que provoca que el individuo trate de cubrirlas por sus propios medios. Las personas con recursos contratan empresas de seguridad privada, mientras que el que no dispone de suficientes recursos lo hace por sí mismo, haciendo que surjan grupos de vigilancia autónomos que provocan problemas de linchamiento, al tomarse la justicia por su mano, y generan una creciente espiral de violencia.

Cuando se dan este tipo de circunstancias, la sociedad y el individuo reflejan una gran desconfianza hacia sus instituciones, tal y como arrojan los resultados las encuestas del Latinobarómetro para Centroamérica, y que son estudiadas en el trabajo de Lagos y Dammert²⁰⁸.

²⁰⁸ (Lagos & Dammert, 2012)

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

PAIS	El Estado puede resolver el problema de la delincuencia	La situación de seguridad es buena en el país
El Salvador	53	28
Guatemala	27	12
Honduras	40	14
Nicaragua	64	35
Costa Rica	48	18
Total América Latina	61	16

Tabla 16. Confianza en la capacidad del Estado

La confianza de los nicaragüenses en su Estado es alta, por encima de la media de América Latina, la de América Central, la de Costa Rica y El Salvador. En el primero de estos dos últimos países, se observa una tasa reducida de confianza debido a que el empeoramiento de la seguridad en un país en el que tradicionalmente la situación era mucho mejor que en el entorno, sigue afectando a la sociedad especialmente en su percepción, tal y como se indicó en el apartado anterior. Todo ello a pesar de que poco a poco las tasas van corrigiéndose y se van normalizando fruto de las medidas adoptadas por el gobierno costarricense.

En el caso de El Salvador, se refleja el apoyo a las nuevas estrategias de seguridad ciudadana emprendidas por el gobierno, de carácter integral y multisectorial, además de la tregua acordada con las maras y la intermediación de la iglesia. Todo ello ha contribuido a que en los últimos años mejore la situación de forma esperanzadora para la sociedad.

Sin embargo, la confianza de los costarricenses en sus instituciones sí que queda reflejada en otros aspectos menos afectados por la crisis que en materia de seguridad ha sufrido el país en los años recientes, como son la corrupción, la pobreza u otros problemas con carácter general. La confianza de los nicaragüenses en el Estado se refleja en estos aspectos al mismo nivel que la de los costarricenses en estas encuestas, también reflejadas en el Latinobarómetro de 2013, y que se desglosan a continuación²⁰⁹.

PAIS	El Estado puede resolver el problema de la corrupción	El Estado puede resolver el problema de la pobreza	Capacidad del Estado para resolver problemas
Nicaragua	58	56	64
Costa Rica	53	57	56
El Salvador	35	40	44
Guatemala	33	35	39
Honduras	34	35	35

Tabla 17. Confianza general en el Estado

²⁰⁹ (Corporación Latinobarómetro, 2013)

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

Puede, por lo tanto, decirse que las sociedades que apoyan más a sus instituciones son las nicaragüenses, costarricense y salvadoreña, en cada uno de los dos últimos casos con los matices expuestos. Esto ratifica los datos anteriormente analizados en los factores sociales.

Una de las consecuencias de la falta de confianza en las instituciones es una reducción del apoyo a la democracia, mostrándose una gran parte de la población favorable a la existencia de un gobierno de corte militar y a que se acepte la actuación estatal al margen de la ley para afrontar la resolución de problemas de extrema gravedad como el de la violencia²¹⁰.

De hecho, en el periodo analizado por el informe del Latinobarómetro de 2013, ha habido una recesión en los cinco países analizados en lo que se refiere al índice de apoyo a la democracia. El periodo analizado abarca desde 1995 hasta 2013²¹¹. En el caso de Costa Rica se observa como su consolidada democracia, que era uno de los factores que mejor definían al país, ha sufrido un fuerte retroceso en el apoyo social, fruto del desencanto social por el progresivo incremento de la violencia en el país.

Tanto Nicaragua como El Salvador son países en los que se puede considerar que hay cierto apoyo social al sistema democrático actual y, por ello, a sus instituciones, con un 50% aproximadamente de la población.

PAIS	Apoyo a la democracia 2013	Disminución del apoyo a la democracia 1995-2013
Guatemala	41%	-9
Costa Rica	53%	-27
Honduras	44%	-2
Nicaragua	50%	-9
El Salvador	49%	-7

Tabla 18. Disminución del apoyo a la democracia

Hay estudios que han reflejado también la atracción que la debilidad institucional supone para el crimen organizado, que precisa del control territorial para el comercio de sus bienes ilegales en un marco de cierta estabilidad y existencia de un mínimo de infraestructura²¹². En estas condiciones, el crimen organizado utiliza principalmente la vía de la corrupción para conseguir influencia en las instituciones y en las decisiones del Estado. De este modo, afianza la protección de sus representantes más que cualquiera de los ciudadanos.

En todos los países sometidos a la comparación, salvo Costa Rica, el índice de transparencia²¹³ es notablemente reducido, incluido, una vez más, Nicaragua, que queda

²¹⁰ (UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito), 2012)

²¹¹ (Corporación Latinobarómetro, 2013)

²¹² (Alda Mejias, 2014)

²¹³ (Transparency International, 2013)

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

al margen del conjunto de factores en los que Costa Rica se diferencia notablemente de sus vecinos del Triángulo Norte.

PAIS	Puesto en el mundo	Puntuación, de 0 a 10
Costa Rica	49	5,3
El Salvador	83	3,8
Honduras	140	2,6
Nicaragua	127	2,8
Guatemala	123	2,9

Tabla 19. Índice de transparencia

Además de la corrupción, es la falta de control gubernamental sobre determinadas partes del país, lo que provoca que estos países sean idóneos para el desarrollo de las actividades ilegales de la criminalidad organizada²¹⁴, lo que deriva en que se vea aún más afectada la legitimidad del Estado y a la colaboración del ciudadano²¹⁵.

PAIS	Control de la corrupción 0-100	Actuación conforme a la ley. 0-100	% empresas declara pago sobornos
Costa Rica	70	65	20
El Salvador	50	30	30
Nicaragua	20	20	37
Honduras	20	20	35
Guatemala	30	10	34

Tabla 20. Análisis de la corrupción según las empresas ubicadas en el país²¹⁶

Como resumen de la fortaleza o debilidad del Estado, expuesta en términos de confianza de los ciudadanos de cada país, se aporta la encuesta elaborada por el Latinobarómetro de 2011²¹⁷ acerca de la eficiencia y transparencia del Estado.

PAIS	Eficiencia del Estado (0-10)	Eficiencia funcionarios (0-10)	Eficiencia trámites estatales (0-10)	Transparencia (de 0-100)
Nicaragua	6,3	5,6	5,9	56,3
Costa Rica	5,5	5	5,1	44,3
El Salvador	4,3	4,9	5,2	48,9
Guatemala	4,3	3,9	4,2	38,1

²¹⁴ (Alda Mejias, 2014)

²¹⁵ (Fruhling, 2012)

²¹⁶ (World Bank, 2011)

²¹⁷ (Corporación Latinobarómetro, 2011)

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

Honduras	4,4	3,9	4	38,4
-----------------	-----	-----	---	------

Tabla 21. Eficiencia y Transparencia del Estado

En definitiva, el análisis de las encuestas refleja una mayor fortaleza institucional en Nicaragua, Costa Rica y El Salvador. Todos ellos, bastante por encima de Honduras y Guatemala.

En el caso salvadoreño, el Estado está suficientemente respaldado, ya que a pesar de las deficiencias graves que pueda observar, el apoyo social es bastante fuerte, especialmente tras los últimos pasos dados en materia de seguridad, lo que le permite gozar de cierta fortaleza institucional que le garantiza la colaboración social suficiente en las políticas emprendidas.

En conjunto, los indicadores salvadoreños apuntan en la buena dirección. La puesta en marcha de estas medidas responde, en gran parte, a que El Salvador es el país más robusto de los tres del Triángulo Norte, tal y como se refleja en la tabla 16, en la que se refleja la confianza de los ciudadanos en la capacidad del Estado para resolver el problema de la violencia. En cierto modo, la fortaleza institucional le permite dar pasos decididos y con el respaldo social y de otros grupos políticos en materias cruciales para el conjunto del país.

Su mayor fortaleza institucional queda también reflejada respecto a Guatemala y Honduras en las tablas 20 y 21, que analizan la corrupción y su control, así como la eficiencia y transparencia del Estado. En el caso salvadoreño, los resultados son muy similares a los costarricenses, al que incluso supera en alguna ocasión, si bien su índice de transparencia está muy alejado de Costa Rica (el puesto 83 del mundo frente al 49), tal y como muestra la tabla 19.

En cierto modo, puede que éste sea también el motivo por el que el porcentaje de apoyo a su sistema democrático esté también muy próximo a los de Costa Rica y Nicaragua, con un 49%, frente a un 53 y 50%, reflejados en la tabla 18.

Sin embargo, para que en **Guatemala** se pueda efectuar una apuesta seria por unas políticas de seguridad integrales y a medio y largo plazo, es preciso que haya una fortaleza institucional que lo permita y avale, algo de lo que Guatemala carece, si nos referimos a la tabla 16, anteriormente señalada, y que hace referencia a la confianza en la capacidad del Estado. En ella, tan solo un 27% de la población considera que el Estado guatemalteco puede resolver el problema de la delincuencia. Tampoco sale muy bien parado el Estado en la tabla 17, que se centra en la Confianza general en el Estado, donde los porcentajes del Latinobarómetro le otorgan los peores grados de confianza de sus propios ciudadanos de entre los cinco países comparados, junto a Honduras, otro país que tiene unas estadísticas similares.

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

Los resultados en materia de corrupción y su control, reflejados en las tablas 20 y 21 (eficiencia y transparencia), son los más bajos del conjunto comparado, igualados con los de Honduras, ostentando el puesto 127 del mundo en transparencia (reflejado en la tabla 19).

Por todo ello, no sorprende el escaso 41% de apoyo al actual régimen democrático guatemalteco por parte de una población que no ve sus problemas resueltos.

En **Honduras**, la situación del país, y la actitud de la clase gobernante es un reflejo de los bajos índices de confianza en la capacidad del Estado y de su fortaleza institucional, reflejados en las tablas 16 y 17, donde comparte unas pésimas estadísticas con Guatemala. También arroja los peores resultados de todos los países comparados en la cuestión relativa al control de la corrupción, expuestos en la tabla 20 y en la 21 de eficiencia y transparencia del Estado. En lo referente a la transparencia, es significativo que Honduras ocupa el puesto 140 del mundo, tal y como se recoge en la tabla 19.

Estos pésimos indicadores, conllevan que la población prefiera un cambio del régimen actual, tal y como manifiesta la tabla 14, en la que se indica que el apoyo a la democracia en Honduras se sitúa en un pobre 44%.

Acerca de **Nicaragua**, se considera importante recalcar la confirmación del resultado obtenido fruto del análisis de los factores sociales, en los que se observaba el apoyo social a sus instituciones, algo que imprimía robustez al Estado, especialmente en lo que se refiere a la cuestión de la seguridad pública. Sin embargo, hay otro factor importante que será mostrado posteriormente en el apartado correspondiente al análisis de las fuerzas policiales y FAS que hace que el caso nicaragüense sea todavía más especial.

En todo caso, se demuestra la fortaleza institucional, reflejada en las tablas 16 de confianza en la capacidad del Estado y en la 17, de confianza general del Estado. En ellas, Nicaragua es el más respaldado de su población, por encima incluso de Costa Rica. Esto hace que indudablemente la población sea uno de los pilares en los que se pueda apoyar la labor del Estado en las reformas que se estime conveniente llevar a cabo y que requieran de un apoyo amplio del país por precisar su implementación a medio y largo plazo. El apoyo social también queda plasmado en el apoyo a la democracia, recogido en la tabla 18, y en la que alcanza el 50%, tan solo superado por Costa Rica.

Sin embargo, la compleja situación económica de Nicaragua hace que su dependencia de la cooperación internacional para sostener estos recursos sea muy alta. Posiblemente esto explica por qué es el único país del ALBA que mantiene relaciones con Estados Unidos en materia de seguridad y defensa. No en vano, su PIB es el menor de los cinco países comparados, de tan solo 10,506 millones de dólares, y su renta per cápita de solo 1,733 dólares, más de cinco veces inferior a la costarricense. Pero, a pesar de todo ello, en la tabla 15 se muestra como Nicaragua muestra el mayor índice de satisfacción de su población con la distribución de la riqueza, con un 41%, frente al 15% de Costa Rica.

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

Uno de los aspectos negativos es la falta de transparencia del gobierno del presidente Daniel Ortega, que puede poner en riesgo esta ayuda internacional, especialmente la estadounidense²¹⁸. No debe olvidarse que esta escasez de transparencia queda reflejada en la tabla 19, donde Nicaragua ostenta el puesto 127 del mundo y el último de los cinco países comparados. Tampoco en la tabla 20, que se centra en el análisis de la corrupción de los países, arroja datos mucho mejores para Nicaragua, siendo uno de los peores de los cinco.

Hay que confiar, no obstante, en el resultado de la tabla 21, en la que Nicaragua es el país con mayor eficiencia estatal de todos, eficiencia funcional y eficacia de sus funcionarios, por lo que potencialmente tiene capacidad para corregir esa falta de transparencia o una gestión pobre desde el punto de vista político del actual gobierno y que quede en una anécdota en su historia venidera.

En cuanto a **Costa Rica**, el lastre derivado de los últimos años, en los que se ha disparado la violencia, se refleja en unos datos relativamente malos para el Estado, pero no debe perderse que la tradición democrática del país supone que estos datos reflejan la fuerte crítica del ciudadano que, en el fondo, apoya sus instituciones. Si se revisan las tablas a las que se viene haciendo referencia en todo este apartado, se puede observar como los grados de confianza en la capacidad del Estado de la tabla 16 no son muy altos, debido posiblemente al empeoramiento de la seguridad que ha experimentado el país, sin embargo, en la tabla 17 se puede observar cómo se corrigen estos datos, siendo el segundo país con mejores resultados de los cinco analizados, tan solo por detrás de Nicaragua.

También en el aspecto de transparencia y eficiencia de la tabla 21, los resultados costarricenses son los mejores junto a Nicaragua, despegándose de este país en las tablas 19 y 20 que recogen los índices de transparencia y el control de la corrupción.

En el análisis conjunto de todos los datos expuestos no sorprende que el apoyo que el sistema democrático por parte de su población sea del 53%, todo ello a pesar de haberse visto reducido en 27 puntos desde el año 1995, fruto del progresivo deterioro general del país en diferentes cuestiones.

2.2. Las FAS y el sistema policial

Analizado el Estado en su conjunto, se considera muy importante centrar parte del estudio en los cuerpos policiales y las FAS, ambos considerados como una herramienta fundamental que tiene el Estado para la puesta en marcha de estrategias de seguridad pública. Las FAS son también estudiadas bajo este prisma dado que, como ya se ha venido indicando antes, han desarrollado y desarrollan un papel muy importante en algunos de estos países desempeñando tareas de seguridad pública de forma autónoma o en apoyo de los cuerpos policiales.

²¹⁸ (Cajina, Seguridad en Nicaragua:¿La excepción en Centroamérica?, 2013)

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

No en vano, uno de los principales aspectos que se verá posteriormente es que en el caso nicaragüense, la fortaleza institucional de la policía y el respaldo que recibe de la sociedad son posiblemente la clave del éxito para que se contengan las tasas de violencia en niveles aceptablemente reducidos.

Tras el final de los conflictos armados y los regímenes dictatoriales en América Central en los años 90, la mayoría de los países de esta zona han hecho significativos progresos reformando la estructura de sus FAS y supeditándolas al control civil, reduciendo además sus presupuestos y el tamaño de las mismas. Sin embargo, esta reforma ha sido menor a la hora de definir el papel de las FAS en la estructura del Estado y sus funciones, especialmente en lo que respecta a las cuestiones en materia de seguridad pública²¹⁹.

De hecho, el proceso de democratización de las fuerzas de seguridad en los años 90 fue relativamente exitoso en países como Costa Rica, Nicaragua o Panamá. Sin embargo, en Guatemala, Honduras y El Salvador, aunque la reconversión de los ejércitos tuvo éxito, el problema del crecimiento de la violencia dio paso a que estos países se viesen obligados a buscar soluciones centradas en la “mano dura”, dando un fuerte protagonismo a las FAS. Además, en ese momento, estas soluciones eran sólidamente apoyadas por gran parte de la población que veía como la violencia constituía la principal amenaza para la sociedad²²⁰.

La militarización de la seguridad pública en Centroamérica es y ha sido motivo de preocupación por las consecuencias que conlleva en materia de libertades civiles y derechos humanos, ante la debilidad democrática de estos países y el pasado reciente vivido en la zona²²¹. Fruto de ello numerosos expertos han venido recomendando a los diferentes gobiernos el desarrollo de políticas integrales, que aborden especialmente los aspectos preventivos. Entre esas políticas siempre se subraya la necesidad de impulsar procesos de reforma policial que permitan disponer de una policía sólida y preparada que releve en sus tareas al ejército en el futuro²²².

La policía debe constituir un servicio público de seguridad, al que la sociedad pueda exigirle el cumplimiento de sus tareas²²³. Sin embargo, la realidad es que las deficiencias estructurales de las instituciones policiales en América latina han sido y son patentes. Prueba de ello son la falta de capacitación y recursos, así como los altos niveles de corrupción en su seno²²⁴. En concreto, y haciendo referencia a los cuerpos policiales de América Central, un estudio elaborado por el Transnational Institute indica que la fuerza policial más ineficaz en Latinoamérica es la guatemalteca, mientras que la hondureña es la tercera peor de la región.

²¹⁹ (Dammert & Alvarez Veloso, Fuerzas Armadas en Seguridad Pública. ¿Solución o Problema?, 2008)

²²⁰ (Aguilera Peralta, 2008)

²²¹ (Friedrich Ebert Stiftung, 2012)

²²² (Meyer & Ribando Seelke, Central America Regional Security Initiative: Background and Policy Issues for Congress., 2013)

²²³ (Fernández, Anuario)

²²⁴ (Lagos & Dammert, 2012)

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

Por su parte, la salvadoreña, siendo mejor valorada, había experimentado una fuerte caída en eficacia en el último año²²⁵.

En otra evaluación, esta vez elaborada a nivel mundial y efectuada en 2010, establece una clasificación en la que los cuerpos policiales de Guatemala, y Honduras ocuparon el lugar 133 y 106 respectivamente. El nicaragüense quedó en el puesto 101, cuando en 2008 había ocupado el 56. Tan solo Costa Rica terminó en el puesto 49. Por su parte, El Salvador cayó hasta el puesto 99 tras haber estado en 2009 en el puesto 77²²⁶.

Esta ineficacia se ve también reflejada, como es natural en los diferentes niveles de confianza de la población hacia sus cuerpos policiales, reflejados en el estudio de Lagos y Dammert para la Corporación Latinobarómetro²²⁷. La policía nicaragüense es la que goza de mayor confianza entre sus ciudadanos, con un 44,7% de los encuestados que manifiesta tener mucha o algo de confianza en ella. La policía salvadoreña, por su parte, recoge el apoyo de un 34% de los encuestados, mientras que en Honduras y en Guatemala esos porcentajes caen hasta un 20 y un 15% respectivamente.

PAIS	PORCENTAJE
Costa Rica	32%
El Salvador	34%
Guatemala	15%
Honduras	20%
Nicaragua	44%

Tabla 22. Confianza de los ciudadanos hacia su cuerpo policial

Similar resultado arroja la encuesta elaborada para el Banco Mundial que recoge el porcentaje de adultos que consideran la implicación del cuerpo policial de su país en asuntos de delito y corrupción. En este estudio, los cuerpos que mayor porcentaje de confianza tienen depositada por su población vuelven a ser el costarricense y el nicaragüense²²⁸.

PAIS	Porcentaje
Costa Rica	31%
El Salvador	49%
Guatemala	66%
Honduras	47%
Nicaragua	25%

²²⁵ (Ten Velde, 2012)

²²⁶ (Costa, La situación de la seguridad ciudadana en América Latina, 2012)

²²⁷ (Lagos & Dammert, 2012)

²²⁸ (Central America Country Management Unit, 2012)

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

Tabla. 23. Porcentaje de adultos que afirman que la policía está implicada en delitos.

PAIS	Policías
México	315
España	312
Alemania	262
Chile	240
EEUU	238
Argentina	208
Canadá	188
Italia	169
El Salvador	399
Guatemala	286
Honduras	224
Nicaragua	179
Costa Rica	321

Tabla 24. Policías por cada 100.000 habitantes²²⁹

Es cierto que uno de los problemas que marca la ineficacia policial está determinado por la escasez de personal. Sin embargo, observando la tabla anterior, se comprueba que el número de policías por cada 100,000 habitantes en los países sometidos a estudio, no es tan reducido si se compara con otros con unos niveles de violencia normales, lo que conduce a valorar que el problema es de reforma y reestructuración más que de número de efectivos.

Tampoco puede considerarse que los salarios sean una cuestión especialmente clave, puesto que aunque en Costa Rica los salarios son los más altos entre los cuerpos policiales de la región, los nicaragüenses son los que perciben el inferior de todos ellos, siendo ambos países los que cuentan con los índices más reducidos de violencia.

PAIS	Salario en dólares USA
Nicaragua	120
Honduras	232
El Salvador	370
Costa Rica	584

Tabla 25. Salario de los policías centroamericanos 2011²³⁰

²²⁹ (Garfias, Tirado, Erubiel, & Moloeznik, 2006); (Policía Nacional de Nicaragua, 2012)

²³⁰ (Policía Nacional de Nicaragua, 2012)

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

Tal y como apuntan Reyes y Rodríguez González²³¹, la fortaleza de la Policía Nacional de Nicaragua es su estrecho vínculo con la comunidad, sus valores y principios éticos. De ahí la fuerte colaboración ciudadana que, sin remuneración económica, hace que más de 100.000 personas trabajen en apoyo a la propia institución para garantizar la seguridad de su propia sociedad, lo que ha hecho de este país el más seguro de la región y uno de los menos violentos de Latinoamérica. Esta confianza queda reflejada anteriormente en las tablas relacionadas anteriormente. Puede decirse que las deficiencias de este cuerpo policial se ven compensadas por el apoyo social a la institución.

El hecho de que en Nicaragua se hayan puesto en marcha unos cuerpos específicos para la Mujer, la Niñez y la Juventud, es reflejo de un sistema policial muy consolidado y respaldado socialmente que tiene un objetivo preventivo muy claro, propio de los países más avanzados e institucionalmente robustos.

Sin embargo, desde la ascensión al poder del presidente Ortega la transparencia e independencia política han sido poco a poco a ser cuestionadas. Esto se debe a que existe la percepción de que con el actual gobierno se están cimentando relaciones clientelares y partidistas con los altos cargos de la Policía Nacional, favoreciendo a grupos adscritos al FSLN y no al interés comunitario. De hecho, existen evidencias que ponen en cuestión el cada vez mayor poder de los Consejos del Poder Ciudadano sobre los de Prevención del Delito, lo que plantearía un mayor control del Estado sobre la actuación comunitaria de la Policía Nacional²³².

De continuar la tendencia, podría estar en riesgo el mantenimiento de un modelo policial que ha dado un excepcional resultado y que ha demostrado que es viable un sistema policial preventivo, integrado en la comunidad y al margen del devenir político del gobierno²³³.

En Costa Rica, la crisis de seguridad pública que se ha venido viviendo en los últimos años ha conducido a tratar de impulsar la profesionalización de su Fuerza Pública de seguridad con la mejora de su capacitación, para lo que se planteó la creación de una Escuela Nacional de Policía. También se ha planteado la mejora del equipamiento policial²³⁴. Este país, al no disponer de FAS no ha sentido el deber ni la necesidad de plantearse un apoyo militar a las misiones policiales. Aunque recientemente se ha producido un debate acerca de la necesidad de disponer de FAS, todo ha surgido como consecuencia de disputas territoriales con Nicaragua y no fruto de la necesidad de abordar el problema de la seguridad interna.

En cambio, en los países del Triángulo Norte se ha empleado a las FAS para apoyar a sus mal pagadas y escasamente equipadas fuerzas policiales para desarrollar las tareas de

²³¹ (Reyes Sandoval & Rodríguez González, 2013)

²³² (Meléndez, 2013)

²³³ Ibid.

²³⁴ (Araya Amador, Loría Ramirez, & Vargas Pérez, 2013)

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

seguridad pública²³⁵. Solo en El Salvador se han comenzado a poner en marcha otro tipo de políticas tras el fracaso de las de Mano Dura, tratando de impulsar otras que den más protagonismo a los cuerpos policiales de proximidad que ponen en marcha políticas preventivas que están dando un resultado efectivo²³⁶.

En el caso de Guatemala y Honduras, a pesar del escaso éxito en el empleo de las FAS los gobiernos han insistido en este tipo de políticas que han llevado a un incremento notable de la represión en las calles²³⁷. Al mantener la confianza depositada en el ejército frente a los cuerpos policiales de estos países, tampoco se han emprendido reformas adecuadas de los mismos con objeto de que puedan asumir esta responsabilidad, colocándolos a la cola de eficacia entre los cuerpos policiales de la región y en el mundo.

Hernández Batres²³⁸ señala que la única institución utilizada en Guatemala para las tareas de policía y seguridad ciudadana son las FAS, con el consiguiente debilitamiento de la institución civil de la seguridad. Mientras los policías guatemaltecos no reciben ni tan siquiera su arma reglamentaria tras finalizar su plan de formación, el Ministerio de Defensa incrementó en 2013 su presupuesto en unos 12 millones de dólares americanos justificado en las tareas que debe desarrollar en materia de seguridad ciudadana.

En Honduras el sistema interno ha degenerado totalmente: impera la impunidad, la falta de identidad institucional con la misión policial, la corrupción y la presencia de crimen organizado en estructuras de Estado. Hay una falta total de identidad institucional con la misión policial, a lo que se une el predominio de un enfoque reactivo y falta de una estrategia nacional en materia de seguridad ciudadana como fruto del control militar de la seguridad pública²³⁹.

El empleo de las FAS en tareas de seguridad pública es muy común en las políticas de Mano Dura, con las que se pretende lograr resultados a corto plazo, que den una imagen positiva del gobierno ante la opinión pública con el consiguiente beneficio político frente a los rivales para alcanzar el gobierno del país. Normalmente este tipo de medidas son emprendidas de forma unilateral por el gobierno de turno sin que se ponga en marcha un adecuado pacto de Estado en el que se diseñe una estrategia a medio y largo plazo que abarque más campos relacionados con la seguridad ciudadana.

Como se ha venido demostrando, si esta estrategia no es utilizada de forma puntual y acompañada de la reforma de los cuerpos policiales y otras instituciones vinculadas con la seguridad, suele generarse un incremento de la violencia, problemas de violación de derechos humanos y la institución militar sufre en su imagen pública a medio plazo debido a que no tiene la preparación adecuada para afrontar este tipo de tareas.

²³⁵ (Meyer & Ribando Seelke, Central America Regional Security Initiative: Background and Policy Issues for Congress., 2013)

²³⁶ (Smutt, 2013)

²³⁷ (UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito), 2012)

²³⁸ (Hernández Batres, 2013)

²³⁹ (Mendez, 2013)

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

A modo de ejemplo, si se recurre a las tablas 22 y 23, puede observarse que los países con menor tasa de violencia son aquellos en los que los cuerpos policiales gozan de mayor confianza por parte de los ciudadanos y en los que hay menor corrupción policial, Costa Rica y Nicaragua, mientras que la policía salvadoreña es la que mejores resultados cosecha del Triángulo Norte.

Por este motivo, disponer de un cuerpo policial adecuado para la lucha contra la criminalidad debe constituir una prioridad dentro del conjunto de políticas que formen la estrategia del Estado en materia de seguridad pública. Nicaragua, un país con un reducido PIB y con un IDH entre los más bajos del mundo, ha demostrado que es posible consolidar una policía que goce de una alta confianza de los ciudadanos, tal y como se refleja en la tabla 22. Disponer de un cuerpo policial de estas características hace que se erija como la piedra angular sobre la que se asienten otras instituciones como la judicial, la penitenciaria y aquéllas volcadas en la prevención y en los campos sociales y humanos.

2.3. La política judicial y penitenciaria

Si se valoraba como importante el estudio del sistema policial y la actividad de las FAS de los países sometidos a estudio en labores de seguridad pública, no menos importante es el sistema judicial y penitenciario, puesto que son los otros dos pilares fundamentales de actuación directa que dispone el Estado para afrontar el problema de la violencia y la delincuencia en general.

Si estos sistemas no funcionan, y se considera que existe la arbitrariedad en la administración de la justicia por su bloqueo o corrupción, se favorece la impunidad y que la sociedad trate de tomarse la justicia por su mano. Elevados porcentajes de la población no denuncian los delitos sufridos a sabiendas de que normalmente los casos quedan archivados sin ser investigados. La ineficacia judicial también conlleva elevadas tasas de población penitenciaria que se encuentra en prisión de forma preventiva, a la espera de un juicio que tarda en celebrarse y que acentúa el problema de la superpoblación en las cárceles.

Si a todo ello se le añade el problema de falta de una política penitenciaria, con personal especializado y con un sistema orientado a la rehabilitación del recluso para su regreso a la sociedad, nos encontramos con el problema de que las cárceles terminan constituyendo centros de formación avanzada en criminalidad más que lugares de reforma del individuo.

En lo que se refiere a la satisfacción del sistema judicial, el informe del Latinobarómetro de 2011²⁴⁰ recogía los siguientes datos, sumando los porcentajes de población muy satisfecha y satisfecha en los países estudiados:

PAIS	Porcentaje
Nicaragua	41%
Costa Rica	43%

²⁴⁰ (Corporación Latinobarómetro, 2011)

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

Guatemala	29%
Honduras	33%
El Salvador	46%

Tabla 26. Satisfacción con el sistema judicial

El desarrollo de estas políticas de mano dura y súper mano dura, fuertemente apoyadas por las sociedades, ha generado además el desbordamiento del sistema penitenciario en la mayoría de los países²⁴¹, lo que ha favorecido una mayor incorporación de muchos de los jóvenes encarcelados a las maras y organizaciones criminales, lejos de resolver el problema inicial²⁴².

PAIS	Población penitenciaria	Tasa reclusos / 100.000 hab.	Nivel de ocupación	Reclusos en prisión preventiva
Guatemala	12.567	88	140%	69%
El Salvador	24.466	391	354%	27%
Honduras	11.846	154	138%	51%
Costa Rica	13.625	289	117%	23%
Nicaragua	9.178	158	156%	23%

Tabla 27. Situación centros penitenciarios en Centroamérica 2010-2011²⁴³

En Costa Rica, la consecuencia inmediata de esta mayor eficacia policial y judicial ha sido el incremento de la población penitenciaria, con lo que el hacinamiento ha alcanzado el 37%. Como consecuencia la política costarricense se está orientando a impulsar programas de reinserción social y la ampliación de sus centros penitenciarios²⁴⁴.

En El Salvador, el problema penitenciario es otra de las cuestiones abordadas recientemente en el proceso de pacificación actual. El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública implementó en marzo del 2012 diversas medidas encaminadas a mejorar la situación carcelaria de los miembros de pandillas. Entre estas acciones destacaron el traslado de líderes de pandillas de penales de máxima seguridad a penales regulares; la flexibilización del régimen de visitas a cárceles; el retiro de las FAS de las tareas de custodia de ingresos a los centros penitenciarios y mejoras en las condiciones carcelarias en materia de salud, alimentación y recreación²⁴⁵.

También en Nicaragua se contempla la reinserción social como una de las claves a desarrollar en el Sistema Penitenciario Nacional, como parte de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo Humano²⁴⁶.

²⁴¹ (Aguilera Peralta, 2008)

²⁴² Meyer & Ribando Seelke, op. cit.

²⁴³ (Central America Country Management Unit, 2012)

²⁴⁴ (Araya Amador, Loría Ramirez, & Vargas Pérez, 2013)

²⁴⁵ (Smutt, 2013)

²⁴⁶ (Reyes Sandoval & Rodríguez González, 2013)

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

En Guatemala y Honduras los elevados porcentajes de población reclusa en situación preventiva son un fiel reflejo de la mala situación del sistema judicial y, por ende, el penitenciario. No en vano, esta situación en las cárceles de estos países no hace sino facilitar la captación de jóvenes para su ingreso posterior en Maras y Pandillas, en lugar de constituir lugares en los que la rehabilitación de la población penitenciaria sea una prioridad para darles una nueva oportunidad en la sociedad a su salida de prisión.

A tenor de lo expuesto, en todos los países los sistemas judiciales y penitenciarios precisan de una reforma que los mejore. Los proyectos más serios en este sentido son el costarricense y el salvadoreño, que se corresponden con dos países con mayor fortaleza institucional que el resto. Costa Rica que destaca sobre todos los comparados, y El Salvador en los analizados del Triángulo Norte.

Analizado el aspecto institucional en su conjunto, se concluye que los bajos niveles de violencia registrados en Costa Rica y Nicaragua son fruto de la mayor fortaleza estatal que ambos países muestran. Este factor es con mucho el más determinante de todos, puesto que como ya se ha visto, el resto de causas tienen una dependencia previa de la robustez institucional.

En el caso de Costa Rica, la evolución histórica es la que ha venido imprimiendo a su sociedad un desarrollo y una madurez muy superior a la del resto que conlleva, lógicamente, unas instituciones más asentadas y con unos cuerpos de funcionarios y una clase política que actúan conjuntamente conforme a un proyecto común de forma más coordinada que en el resto de los países.

Nicaragua es un caso diferente, en el que la clave la constituye un compromiso social hacia el Estado muy fuerte, que permite que las instituciones, especialmente la Policía Nacional – que muestra una evolución muy por encima de la del resto de los cuerpos comparados con la creación de cuerpos específicos para tratar las cuestiones de violencia contra la mujer o los proyectos preventivos orientados a la juventud -, se vea apoyada en su tarea de modo que las tasas de violencia sean mucho más reducida que en el resto de los países, a pesar de que en muchos casos, las estadísticas de desarrollo humano, educación o pobreza sean más desfavorables para la sociedad nicaragüense.

Respecto a los países del Triángulo Norte, destaca el caso de El Salvador, cuya fortaleza estatal está por encima de los otros dos, lo que se ve reflejado en la mayor madurez de los proyectos diseñados y que tienen por objetivo la reducción de la criminalidad y la violencia que afecta al país.

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

CONCLUSIONES FINALES

Aspectos sociales y actores de la violencia

En los países del Triángulo Norte, existe una situación de desequilibrio social elevado, con unos IDH muy bajos que los colocan en el último tercio de la clasificación mundial por países. Tan solo El Salvador cuenta con un IDH más alto, ostenta mejores datos en materia de educación y de satisfacción general de la sociedad con su situación, respecto a los otros dos, Honduras y Guatemala.

Costa Rica tiene una sociedad más desarrollada, fruto de una legislación que favorece mucho más a la clase trabajadora que en el resto de los países, un acceso a la salud pública con carácter universal y un desarrollo económico superior que le ha permitido contar con una clase media amplia.

A tenor de lo expuesto, resultaría fácil considerar que es el desarrollo social en general uno de los factores determinantes para que existan menores índices de criminalidad. Nada más lejos de la realidad, si se tienen en cuenta los datos analizados de Nicaragua, el quinto país sometido a estudio.

Los índices sociales nicaragüenses son incluso peores que los de los países del Triángulo Norte, especialmente aquellos que son de carácter objetivo. Sin embargo, sus cifras demuestran que la violencia en Nicaragua es mucho más reducida que la que se registra en El Salvador, Honduras o Guatemala. El apoyo social nicaragüense a sus instituciones y, en especial, a su policía nacional, dota al Estado de una fortaleza institucional muy superior a la hondureña y guatemalteca y ligeramente por encima de la salvadoreña.

Este apoyo social se refleja en las encuestas que recogen percepción del ciudadano nicaragüense, que se muestra mucho más optimista y satisfecho que el resto de ciudadanos de los países del entorno en aspectos como la seguridad, la satisfacción con la educación e, incluso, la distribución de la riqueza en el país.

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

De este modo, tal y como se ha venido describiendo en el trabajo, los factores sociales analizados no son tan determinantes como puede serlo la debilidad del Estado a la hora de que las tasas de violencia y criminalidad sean mayores o menores. De hecho, también se ha comprobado en este trabajo como aunque valores más reducidos de IDH, que afectan principalmente a la educación y desigualdad y pobreza, favorecen la implantación y la captación de los jóvenes en las Maras pero no supone que se produzca una mayor violencia en estas zonas. Se ha demostrado que las tasas de violencia son más altas en aquellos lugares en los que existe una fuerte disputa entre grupos rivales por su control, que cuando simplemente se registra su presencia²⁴⁷.

También se ha demostrado como en situaciones de desigualdad, pobreza y falta de recursos educativos el desarrollo de políticas integrales por parte del Estado dirigidas a los jóvenes, dificultan su captación por parte de los actores violentos, tal y como ha demostrado Nicaragua, al mismo tiempo que otras orientadas al ámbito penitenciario y judicial tienen un efecto similar y favorecen la reducción de la violencia. Este tipo de medidas son implantadas en países como Nicaragua o Costa Rica, donde el nivel de fortaleza del Estado es mayor. También El Salvador, que refleja una robustez institucional mayor entre los países del Triángulo Norte ha acometido este tipo de medidas preventivas.

Por otro lado, cuando se ha estudiado la criminalidad organizada, se ha visto que ésta aprovecha la pobreza y la debilidad institucional para implantarse en determinados países que, además, cuentan con altos niveles de corrupción y escasa transparencia que favorecen el desarrollo de sus actividades. Se ha visto que llegan a constituir formas alternativas de gobernanza en lugares en los que el Estado no tiene apenas presencia. Esto abunda en la idea expuesta por Alda sobre el atractivo que los países institucionalmente débiles tienen para el crimen organizado y el narcotráfico²⁴⁸.

También Calix, que ha analizado las causas de la implantación de estas organizaciones dedicadas al narcotráfico en la zona, concluye que las principales son dos²⁴⁹, la debilidad de los Estados de la región para combatir a los cárteles de la droga y otras estructuras del crimen organizado implantadas en su territorio; y la fragilidad económica de los propios países a la hora de competir con estas organizaciones en amplias zonas de su territorio – sirvan como ejemplo el Petén guatemalteco, el occidente hondureño y la Mosquitia honduro-nicaragüense -, donde llegan a sustituir la acción del Estado.

Ambos factores señalados por Calix están estrechamente relacionados y pueden reducirse a uno solo: la debilidad estatal. Si observamos de nuevo las tablas 16 y 17, de confianza en la capacidad del Estado y de confianza general en el Estado, observamos que tanto Honduras como Guatemala, reflejan los índices más bajos de fortaleza institucional con mucha diferencia sobre el resto de los países sometidos a la comparación. A ello hay que añadir que en lo que se refiere a PIB per cápita, ambos países son los que tienen el nivel

²⁴⁷ (UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito), 2012)

²⁴⁸ (Alda Mejias, 2014)

²⁴⁹ (Calix, 2012)

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

más reducido de todos, si exceptuamos Nicaragua que, sin embargo, escapa de esas alarmantes cifras violentas²⁵⁰.

Es decir, que la raíz del problema, una vez más, se centra en la debilidad institucional del Estado, por encima de los condicionantes relativos a pobreza, educación o IDH. Al no tener capacidad el Estado de controlar todo su territorio y no proporcionar los servicios sociales básicos a la población, se favorece la implantación de grupos criminales que dan un modus vivendi a la población local y aprovechan los altos niveles de corrupción entre la administración del país.

Queda patente que la clave para solucionar el problema es establecer políticas y estrategias de seguridad pública enfocadas en el desarrollo multifacético que permita incrementar la fortaleza institucional del país, tal y como muestran Costa Rica, Nicaragua.

Fortaleza institucional

El análisis de las encuestas ha reflejado una mayor fortaleza institucional en Nicaragua, Costa Rica y El Salvador. En todos ellos, bastante por encima de Honduras y Guatemala, donde existe una confianza muy baja de la sociedad en su gobierno, la clase política del país y sus instituciones, que son los que arrojan los peores datos violentos de los cinco países junto a El Salvador.

En el marco del Triángulo Norte, el caso salvadoreño se desmarca del hondureño y el guatemalteco, puesto que se detecta un mayor respaldo social al Estado, facilitando la implementación de estrategias de seguridad orientadas a frenar el ascenso de la violencia. Este apoyo se ha reflejado especialmente tras los últimos pasos dados por el gobierno en materia de seguridad y el acuerdo logrado entre las dos principales Maras presentes en el país. Esta mayor fortaleza institucional le garantiza un mayor compromiso social en el impulso de las políticas emprendidas.

En el caso costarricense, el lastre derivado de los últimos años, en los que se ha disparado la violencia respecto a las reducidas cotas que presentaba el país, ha quedado plasmado en un empeoramiento de la opinión de sus ciudadanos hacia su propio Estado. Sin embargo no debe perderse de vista que la tradición democrática del país supone que estos datos reflejan la fuerte crítica de una sociedad habituada a ejercerla hacia su clase dirigente y sus instituciones a las que, en el fondo, apoya.

Posiblemente el factor clave para el éxito de la seguridad pública en Nicaragua es el estrecho vínculo de la sociedad con sus instituciones y, en particular con la Policía Nacional, con sus valores y principios éticos. De ahí la fuerte colaboración ciudadana con este cuerpo policial para garantizar la seguridad de su propia sociedad, lo que ha hecho de este país el más seguro de la región y uno de los menos violentos de Latinoamérica. En las encuestas se detecta como el ciudadano nicaragüense acepta mejor a sus instituciones y se encuentra más en sintonía con sus gobernantes que los del resto de los países analizados,

²⁵⁰ <http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf>; www.countryeconomy.com

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

lo que favorece la gobernabilidad del país y su fortaleza institucional, a pesar de los grandes problemas institucionales que pueda tener.

En general, la falta de confianza de la sociedad en sus instituciones genera también una reducción del apoyo a la democracia, mostrándose parte de la población favorable a la existencia de un gobierno de corte militar y a aceptar la actuación del Estado al margen de la ley para afrontar la resolución de problemas de extrema gravedad como el de la violencia.

No hay que olvidar la recesión del apoyo social al régimen democrático existente en el periodo entre 1995 y 2013. Con todo, son Costa Rica, El Salvador y Nicaragua donde el Latinobarómetro refleja y apoyo social mayor al actual sistema democrático y sus instituciones.

Por ello, la política de seguridad debe ser integral, abarcando no solo el carácter represivo, que es necesario, sino también el preventivo. De este modo, se actúan en todos aquellos campos, sociales e institucionales, con la participación sinérgica de los actores sociales, estatales y políticos lo que redundará en un incremento de la fortaleza del Estado y la consolidación del sistema.

Políticas de seguridad pública

A lo largo de los años precedentes los países del Triángulo Norte han adoptado políticas denominadas de Mano Dura, apoyadas principalmente en el empleo de las FAS en tareas de seguridad pública, el endurecimiento de penas y operaciones enfocadas a grandes redadas que no hacen sino engrosar la población penitenciaria. Esta respuesta al fenómeno ha acarreado un aumento de la violencia en la región, casos de violación de derechos humanos por parte de miembros de las FAS, y el empeoramiento de la situación en los establecimientos penitenciarios, entre otras muchas consecuencias.

En los casos de Guatemala y Honduras, a pesar del escaso éxito en el empleo de las FAS los gobiernos han insistido en este tipo de políticas que han llevado a un incremento notable de la represión en las calles. Al mantener la confianza depositada en el ejército frente a los cuerpos policiales de estos países, tampoco se han emprendido reformas adecuadas de los mismos con objeto de que puedan asumir esta responsabilidad, colocándolos a la cola de eficacia entre los cuerpos policiales de la región y en el mundo.

En el ámbito policial, solo en El Salvador se intenta impulsar reformas que den más protagonismo a los cuerpos policiales de proximidad que ponen en marcha políticas preventivas que están dando un resultado efectivo. Quizá no sea en vano que la policía salvadoreña sea la que goza de más prestigio y apoyo social de los tres países. Además sus encuestas arrojan un mayor apoyo y reconocimiento por parte de su sociedad hacia el Estado, lo que le aporta un mayor índice de fortaleza institucional que Guatemala u Honduras.

Analizando estos resultados, se reafirma, una vez más la necesidad de poner en marcha políticas integrales de seguridad pública que contemplen la reestructuración de los

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

cuerpos policiales y los sistemas judiciales y penitenciarios, así como la lucha contra la corrupción y la reforma institucional del Estado que permita fortalecer la gobernanza. Tampoco se deben olvidar, en el desarrollo de estas estrategias, actuaciones sociales como la lucha contra la pobreza endémica, la violencia social que se produce en determinados estratos sociales y la educación.

Este tipo de estrategias son las que países como Costa Rica y Nicaragua vienen contemplando para tratar de corregir los repuntes de las tasas de criminalidad y violencia que vienen experimentando, sin haberse contemplado aspectos como reforzar sus FAS. En ambos casos, aunque con condicionantes muy diferentes en uno y otro, se contemplan planes dirigidos a los jóvenes, tratando de dificultar su captación por las Maras, pandillas y el crimen organizado. Al mismo tiempo, se contemplan medidas reformistas en el ámbito penitenciario y judicial, donde reside también gran parte del problema.

Tampoco debe olvidarse que los cuerpos policiales costarricense y nicaragüense son los que gozan de mayor confianza por parte de los ciudadanos. Disponer de un cuerpo policial fiable y efectivo se ha visto que es una garantía y la piedra angular sobre la que se asienta la tarea del resto de instituciones implicadas en la seguridad ciudadana, como la judicial, la penitenciaria y el resto de organismos y actores sociales implicados.

En Costa Rica, la crisis de seguridad pública que se ha venido viviendo en los últimos años ha conducido a tratar de impulsar la profesionalización de su Fuerza Pública de seguridad con la mejora de su capacitación, para lo que se planteó la creación de una Escuela Nacional de Policía. También se ha planteado la mejora del equipamiento policial. Este país, al no disponer de FAS no ha sentido el deber ni la necesidad de plantearse un apoyo militar a las misiones policiales. Aunque recientemente se ha producido un debate acerca de la necesidad de disponer de FAS, todo ha surgido como consecuencia de disputas territoriales con Nicaragua y no fruto de la necesidad de abordar el problema de la seguridad interna.

Por último, debe hacerse referencia a la importancia del factor económico, que en muchas ocasiones es tildado de determinante, dados los elevados costes que suponen en el tiempo el desarrollo de reformas estructurales y la puesta en marcha de los planes sociales y preventivos que abordan. Sin embargo, su importancia queda relativizada, una vez más, tras el análisis del caso Nicaragüense. Con él queda claro que es posible desarrollar este tipo de estrategias de seguridad pública en un país con fuertes carencias económicas, pero contando con un sistema sólido y socialmente respaldado.

En definitiva, dado que las estrategias de seguridad pública multisectoriales e integrales exigen el compromiso de la clase política y gobernante del país, sus actores sociales y sus instituciones, a medio y largo plazo, es la fortaleza institucional el factor clave que permite que un país consiga adoptarlas con eficacia y garantías de futuro. El resto de factores y causas que influyen en el problema pueden ser abordadas y manipuladas con éxito a partir del anterior.

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

BIBLIOGRAFÍA

Aguilar, J. C. (2006). Las políticas de seguridad pública en América latina: política, violencia y narcotráfico en México. *European Review of Latin America and Caribbean Studies*(81).

Aguilera Peralta, G. (2008). Enfrentar la violencia con "mano dura" políticas de contención en Centroamérica. *Pensamiento Iberoamericano*.

Alda Mejías, S. (octubre de 2009). Las actuales relaciones civiles-militares en Suramérica y los retos pendientes. (Flacso, Ed.) *Memorando de Políticas sobre Seguridad Regional. Gobernabilidad y Convivencia Democrática en América Latina*. .

Alda Mejías, S. (2011). *Las debilidades de las políticas de seguridad en América Latina en un contexto de fortaleza económica y política*. Instituto Español de Estudios Estratégicos.

Alda Mejias, S. (2014). Un campo abonado para el crimen organizado. *Foregin Affairs Latinoamérica*.

Amaya Cobar, E. A. (2011). Gestión de la seguridad en El Salvador: lecciones y desafíos. *Indice de Seguridad Pública y Ciudadana en América Latina. El Salvador, Guatemala y Honduras*. www.resdal.org.

Araya Amador, A., Loría Ramirez, M., & Vargas Pérez, M. (2013). Costa Rica: Medidas para mejorar la Seguridad ciudadana y obtener la paz social. En C. Niño Guarnizo, *Seguridad Regional en América Latina y el Caribe. Anuario 2013*. Friedrich Ebert Stiftung.

Argueta, O. (2010). *Private Security in Guatemala: The pathway to its proliferatiion*. German Institute of Global Affairs and Area Studies.

Argueta, O. (2010). *Private Security in Guatemala: The pathway to its proliferation*. German Institute of Global Affairs and Area Studies.

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

- Arias, P. (2009). *La seguridad privada en América Latina: el lucro y los dilemas de una regulación deficitaria*. Santiago de Chile: FLACSO.
- Arias, P., Rosada-Granados, H., & Fabián Saín, M. (2012). *Reformas policiales en América Latina. Principios y lineamientos progresistas*. Bogota: Friedrich Ebert Stiftung (FES). Programa de Cooperación en Seguridad Regional.
- Arteaga Botello, N. (2004). *En busca de la legitimidad. Violencia y populismo punitivo en México. 1990-2000*. Mexico DF: Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
- Bailey, J. (31 marzo 2011). The US Homeland Security Role in the Mexican War Against Drug Cartels. *Statement for the House Committee on Homeland Security; Subcommittee on Oversight, Investigations and Management*. Washington.
- Bakrania, S. (24 de abril de 2013). <http://www.gsdr.org>. Recuperado el 1 de febrero de 2014, de <http://www.gsdr.org/docs/open/HDQ934.pdf>
- Basombrio, C., & Dammert, L. (2013). *Changing the Approach to Crime and Violence in Latin America: Lessons Learned, New Observations, and Emerging Issues*. Washington D.C.: Woodrow Wilson Centre.
- Beittel, J. (2009). *Mexico's drug-related violence*. Congressional Research Service.
- Beittel, J. (2011). *Colombia: Issues for Congress*. Congressional Research Service.
- Beliz, G. (2007). ¿Hacia una nueva generación de reformas en seguridad ciudadana? En L. Dammert, & L. Zúñiga, *Seguridad Ciudadana: desafíos para la ciudadanía*. Santiago de Chile: FLACSO.
- Benitez Manaut, R. (2007). *La iniciativa Mérida: desafíos del combate al crimen y el narcotráfico en México*. Real Instituto Elcano.
- Benítez Manaut, R. (2007). *Las Fuerzas Armadas Mexicanas, desafíos y estructuras frente a la democracia*. RESDAL.
- Benítez Manaut, R. (marzo-abril 2009). La crisis de seguridad en México. *Nueva Sociedad*, 173-189.
- Benitez Manaut, R. (s.f.). México 2010, la seguridad en la encrucijada. En FLACSO, *Memorando de políticas sobre seguridad regional*.
- Bruneau, T., Dammert, L., & Skinner, E. (2011). *The Dilemma of Fighting Gangs in New Democracies*. University of Texas Press.
- Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs. (2011). *International Narcotics Control Strategy Report*. US Department of State.

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

- Cajina, R. (2012). *Centroamérica bajo asedio: Narcotráfico y debilidades institucionales*. Instituto Español de Estudios Estratégicos.
- Cajina, R. (2013). *Seguridad en Nicaragua: ¿La excepción en Centroamérica?* Washington: Interamerican Dialogue.
- Calderón, V. (22 de junio de 2013). *www.elpais.com*. Recuperado el 29 de junio de 2013, de http://internacional.elpais.com/internacional/2013/06/22/actualidad/1371858109_690495.html
- Calix, J. Á. (2012). *Seguridad Ciudadana en Honduras: Referencias a la Acción Regional y la Cooperación Internacional*. San José Costa Rica: Flacso.
- Cañas López, R. (29 de mayo de 2012). *Elmundo.com*. Recuperado el 2 de julio de 2013, de <http://elmundo.com.sv/la-seguridad-publica>
- Carrillo-Flórez, F. (30 de 01 de 2007). <http://www.pensamientoiberoamericano.org/articulos/>. Recuperado el 05 de 03 de 2012, de Seguridad ciudadana en América Latina: Un bien público cada vez más escaso.: <http://www.pensamientoiberoamericano.org/articulos/0/26/0/seguridad-ciudadana-en-am-rica-latina-un-bien-p-blico-cada-vez-m-s-escaso.html>
- Carrión, F. (s.f.). <http://www.flacso.org.ec>. Recuperado el 31 de enero de 2014, de http://www.flacso.org.ec/docs/fc_seguridad.pdf
- Castellanos, J. (2012). *Violencia y Reforma Policial en Honduras*. Tegucigalpa: Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
- Cawley, M. (4 de septiembre de 2013). <http://es.insightcrime.org>. Recuperado el 31 de enero de 2014, de <http://es.insightcrime.org/analisis/%C2%BFleyes-de-armas-mas-estrictas-reducen-la-violencia-en-latinoamerica>
- Central America Country Management Unit. (2012). *El Salvador: Estudio institucional y de gasto público en seguridad y justicia*. The World Bank.
- CERAC y Small Arms Survey. (2011). *Guatemala en la encrucijada*. Ginebra: Geneva Declaration.
- Ciurlizza, J. (21 de septiembre de 2011). El desborde de la violencia en Venezuela. *El Tiempo*.
- Contreras Pérez, R. (2008). Iniciativa Mérida: de la lucha contra el narcotráfico hacia la seguridad integral. En *La iniciativa Mérida como recurso integral que subsana deficiencias del Plan Colombia: la lucha por la seguridad nacional de los EEUU ante las amenazas provenientes de América Latina*. México: Universidad de las Américas Puebla.

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

- Corporación Latinobarómetro. (2011). *Informe 2011*. Santiago de Chile: Corporación Latinobarómetro.
- Corporación Latinobarómetro. (2011). *Informe latinobarómetro*.
- Corporación Latinobarómetro. (2013). *Informe 2013*. Santiago de Chile: Corporación Latinobarómetro.
- Costa, G. (2012). *La situación de la seguridad ciudadana en América Latina*. Lima: Diálogo Interamericano.
- Costa, G. (2012). *La situación de la seguridad ciudadana en América Latina*. Lima: Diálogo Interamericano.
- Cuadra, R. (noviembre de 2011). *www.politiquiando.com*. Recuperado el 1 de julio de 2013, de <http://www.politiquiando.com/2011/11/analisis-de-la-seguridad-publica-en-el-salvador/>
- Dammert, L. (noviembre-diciembre de 2007). Seguridad Pública en América Latina: ¿qué pueden hacer los gobiernos locales? *Nueva Sociedad*(212).
- Dammert, L. (2011). Reforma policial en América Latina: esfuerzos esporádicos y agenda pendiente. *Índice de Seguridad Pública y Ciudadana en América Latina. El Salvador, Guatemala y Honduras*. *www.resdal.org*.
- Dammert, L., & Alvarez Veloso, D. (nov/dic de 2008). Fuerzas Armadas en Seguridad Pública. ¿Solución o Problema? *Nueva Sociedad*.
- Dammert, L., & Bailey, J. (2005). Reforma Policial y participación militar en el combate de la delincuencia. Análisis y desafíos para América Latina. *Revista Fuerzas Armadas y Sociedad*(1), 133-152.
- De León Escribano, C. R. (2011). La Aspiración de la seguridad y la justicia en Guatemala. *Índice de Seguridad Pública y Ciudadana en América Latina. El Salvador, Guatemala y Honduras*.
- Felbab-Brown, V. (2013). Lecciones clave para los esfuerzos del Estado para afrontar la violencia urbana y el crimen organizado en América Latina. En C. Niño Guarnizo, *Anuario 2013 de la Seguridad Regional en América Latina y el Caribe*. Friedrich Ebert Stiftung.
- Fernández, Ó. (Anuario). La Seguridad Pública en El Salvador: Un fenómeno complejo que requiere respuestas integrales. En C. Niño Guarnizo, *Seguridad Regional en América Latina y el Caribe. Anuario 2013*. Friedrich Ebert Stiftung.

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

- FLACSO. (2008). *Crimen organizado en América Latina y Caribe*. (L. G. Solis, & F. Rojas Aravena, Edits.) Santiago de Chile 2008: FLACSO.
- Friedrich Ebert Stiftung. (2012). Foro Regional: América Central, balance y perspectivas de las políticas de seguridad en la región. *fesamericacentral.org*. Tegucigalpa, Honduras: Friedrich Ebert Stiftung.
- Fruhling, H. (2012). *La eficacia de las políticas de seguridad pública en América Latina y Caribe. Cómo medirla y cómo mejorarla*. Banco Iberoamericano de Desarrollo.
- Fuentes, C., Basombrío, C., Dellasoppa, E., & Fruhling, H. (2011). *Seguridad ciudadana en América Latina. Miradas críticas a procesos institucionales*. Santiago de Chile: Universidad de Chile.
- García Luna, G. (2006). *Contra el crimen. ¿Por qué 1,661 corporaciones de policía no bastan? Pasado, presente y futuro de la policía en México*. México: Edición del autor.
- García Ramírez, S. (2002). *Delincuencia organizada*. México: Porrúa / Instituto Nacional de Ciencias Penales.
- Garfias, L., Tirado, Erubiel, & Moloeznik, P. (2006). Militarización de la seguridad pública en México. *Serie de cuadernos de trabajo del Instituto para la Seguridad y la Democracia. N° 13*. Insyde Ideas.
- Global Commission on Drugs. (6 de marzo de 2013). *www.globalcommissiondrugs.org*. Recuperado el 30 de marzo de 2013, de <http://www.globalcommissiondrugs.org/america-latina-es-tiempo-de-una-agenda-efectiva-en-seguridad-ciudadana-politicas-sobre-drogas-y-control-de-armas/>
- Godnick, W., & Bustamante, J. (2013). El tráfico de armas de fuego en América Latina y Caribe: Mitos, realidades y vacíos en la agenda internacional de investigación. En C. Niño Guarnizo, *Anuario 2013 de la Seguridad Regional en América Latina y Caribe*. Bogotá: Friedrich Ebert Stiftung.
- Gonzalez Aguiar, J. C. (2006). Las políticas de seguridad pública en América Latina: policía, violencia y narcotráfico en México. *European Review of Latin American and Caribbean Studies.*, 115-121.
- Gonzalez Ruiz, S. (2010). Análisis del Sistema Nacional de Seguridad Pública en México. En E. Arellano, & A. Alvarado, *Políticas de Seguridad Pública*. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. Cámara de Diputados México.

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

- González Ruiz, S. (2010). La evaluación y transformación de la Seguridad Pública en México. En E. Arellano Trejo, & A. Alvarado, *Políticas de Seguridad Pública* (págs. 39-58). México: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública.
- Hernández Batres, I. (2013). Guatemala: Violencia y autoritarismo, una mezcla peligrosa. En C. Niño Guarnizo, *Seguridad Regional en América Latina y el Caribe. Anuario 2013*. Friedrich Ebert Stiftung.
- Hernández de Mora, J. I. (s.f.). México: seguridad en democracia. En FLACSO, *Memorando de políticas sobre seguridad regional*. San José de Costa Rica: FLACSO.
- informador.com. (14 de abril de 2013). www.informador.com.mx. Recuperado el 27 de junio de 2013, de <http://informador.com.mx/mexico/2013/451350/6/pena-nieto-preseenta-estrategia-de-seguridad.htm>
- International Crisis Group. (2011). *Romper los nexos entre el crimen y la política local: las elecciones de 2011 en Colombia*. Informe sobre América Latina nº 37.
- International Crisis Group. (2011). *Violencia y política en Venezuela*. Informe sobre América Latina nº 38.
- International Crisis Group. (2012). *Reforma policial en Guatemala: Obstáculos y oportunidades*. International Crisis Group.
- Jütersonke, O., Muggah, R., & Rodgers, D. (2009). Gangs and Violence Reduction in Central America Security Dialogue. *40*(4-5).
- Lagos, M., & Dammert, L. (2012). *La seguridad ciudadana. El problema principal de América Latina*. Lima: Latinobarómetro.
- León Escribano, C. R. (2011). La Aspiración de la Seguridad y la Justicia en Guatemala. *Indice de Seguridad Pública y Ciudadana en América Latina: El Salvador, Guatemala y Honduras*.
- Marquez Blas, R. (2010). Retos actuales del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En E. Arellano Trejo, & A. Alvarado, *Políticas de Seguridad Pública* (págs. 59-64). México: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública.
- Mathieu, H., & Niño Guarnizo, C. (2011). *Anuario 2011 de la seguridad regional en América Latina y el Caribe*. Bogotá: Friedrich Ebert Stiftung. Programa de Cooperación en Seguridad Regional.
- Mejía, C., & Mejía, C. (2009). *Buenas prácticas de prevención, rehabilitación e inserción de violencia juvenil en Centroamérica*. El Salvador: Coalición Centroamericana para la Prevención de la Violencia Juvenil.

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

- Meléndez, J. (2013). *Tres Propuestas para entender la Seguridad Ciudadana en Nicaragua*. Washington: Wilson Center.
- Mendez, W. (2013). *Análisis de la seguridad interna y externa en Honduras*. Friedrich Ebert Stiftung.
- Meyer, P., & Ribando Seelke, C. (2011). *Central America Regional Security Initiative: Background and Policy Issues for Congress*. Congressional Research Service.
- Meyer, P., & Ribando Seelke, C. (2013). *Central America Regional Security Initiative: Background and Policy Issues for Congress*. Congressional Research Service.
- Meyer, P., & Ribando Seelke, C. (2013). *Central America Regional Security Initiative: Background and Policy Issues for Congress*. Congressional Research Service.
- Meyer, P., & Sullivan, M. (2012). *US Foreign Assistance to Latin America and the Caribbean: Recent trends and FY2013 appropriations*. Congressional Research Service.
- Ministerio de Defensa Nacional de Colombia. (2011). *Gasto de Defensa y Seguridad 1998-2011*. Imprenta Nacional de Colombia.
- Moloeznik, M. P. (2005). Seguridad pública y reforma policial en México: ¿cambio o continuidad? En L. Dammert, & J. Bailey, *Seguridad y reforma policial en las Américas*. México: ILANUD/FLACSO/Siglo XXI.
- Murcia, W. (12 de abril de 2013). *hemisferiozero.com*. Recuperado el 5 de julio de 2013, de <http://hemisferiozero.com/2013/04/12/la-militarizacion-de-la-seguridad-publica-en-el-salvador-iii/>
- Murcia, W. (4 de abril de 2013). *hemisferiozero.com*. Recuperado el 4 de julio de 2013, de <http://hemisferiozero.com/2013/04/04/la-militarizacion-de-la-seguridad-publica-en-el-salvador-ii/>
- Murcia, W. (15 de marzo de 2013). *hemisferiozero.com*. Recuperado el 4 de julio de 2013, de <http://hemisferiozero.com/2013/03/15/la-militarizacion-de-la-seguridad-publica-en-el-salvador-i/>
- National Drug Intelligence Center. (2010). *National Drug Threat Assessment*. US Department of Justice.
- Observatorio Venezolano de la Violencia. (27 de diciembre de 2011). *www.observatorio de violencia.org.ve*. Recuperado el 31 de marzo de 2012, de <http://www.observatoriodeviolencia.org.ve/site/noticias/74-informe-homicidios-2011.html>

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

- Oficina de Evaluación y Supervisión. (2013). *Seguridad Ciudadana en América Latina y el Caribe: Ventaja Comparativa del BID*. Washington: Banco Interamericano de Desarrollo.
- Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito. (2012). *Armas de fuego en Centroamérica*.
- Oficina Evaluación y Supervisión . (2013). *Seguridad Ciudadana en América Latina y Caribe*. Washington DC: Banco Iberoamericano de Desarrollo .
- Pérez, R. (octubre de 2009). El caso Brasil - América Latina. (Flacso, Ed.) *Memorando de Políticas sobre Seguridad Regional. Gobernabilidad y Convivencia Democrática en América Latina*.
- PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo . (s.f.). www.pnud.or.cr. Recuperado el 22 de marzo de 2014, de http://www.pnud.or.cr/dmdocuments/one_page_POLSEPAZ.pdf
- Policía Nacional de Nicaragua. (junio de 2012). <http://csis.org/>. Recuperado el 11 de febrero de 2014, de http://csis.org/files/attachments/120618_Granera_Presentation_1.pdf
- Programa de Opinión Pública. (2013). *Informe del Primer Año de Gobierno de Otto Pérez Molina*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- Programa Naciones Unidas para el Desarrollo. (2013). *Informe sobre Desarrollo Humano 2013*. Nueva York: PNUD.
- Pública, D. d. (9/10/2006). todo en México es territorio narco. *Emequis*(36).
- Red de Seguridad y Defensa de América Latina. (2011). *Índice de Seguridad Pública y Ciudadana en América Latina. El Salvador, Guatemala y Honduras*. resdal.
- RESDAL. (2010). *Atlas Comparativo de la defensa en América Latina y Caribe*.
- RESDAL. (2013). *INDICE DE SEGURIDAD PUBLICA CENTROAMERICA*. Buenos Aires: RESDAL.
- Reyes Sandoval, V., & Rodríguez González, H. (2013). El modelo policial de Nicaragua: Éxitos en la seguridad ciudadana y efectos en la seguridad regional. En C. Niño Guarnizo, *Seguridad Regional en América Latina y el Caribe. Anuario 2013*. Friedrich Ebert Stiftung.
- Rial, J. (2011). Seguridad pública, seguridad ciudadana: Sobre información y lenguaje. *Índice de Seguridad Pública y Ciudadana en América Latina: El Salvador, Guatemala y Honduras*. www.resdal.org.

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

- Ribando Seelke, C. (2007). *Anti-gang efforts in Central America: Moving Beyond Mano Dura?* Miami: Center for Hemispheric Policy-University of Miami.
- Ribando Seelke, C. (2011). *Gangs in Central America*. Congressional Research Service.
- Ribando Seelke, C. (2011). *Mexico: Issues for congress*. Congressional Research Service.
- Ribando Seelke, C. (2013). *Gangs in Central America*. Congressional Research Service.
- Ribando Seelke, C., & Finklea, K. M. (2011). *The Mérida initiative and beyond*. Congressional Research Service.
- Ribando Seelke, C., Sun Wyler, L., Beittel, J., & Sullivan, M. (2011). *Latin America and the Caribbean: Illicit Drug Trafficking and US Counterdrug Programs*. Washington: Congressional Research Service.
- Ricardo Milano, C. (marzo de 2009). *www.aainteligencia.cl*. Recuperado el 23 de enero de 2012, de <http://www.aainteligencia.cl/?p=71>
- Ríos, V., & Shirk, D. (2011). *Drug Violence in México: Data and Analysis through 2010*. University of San Diego: Trans-Border Institute (TBI).
- Rodriguez Rojas, M. J. (2010). *La otra cara de la militarización en México (más allá de la lucha contra el narcotráfico)*. Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
- Rojas Aravena, F. (enero-febrero 2008). El riesgo de la superposición entre las políticas de defensa y seguridad. *Nueva Sociedad*(213).
- Roman, J. A., & Aranda, J. (18 de diciembre de 2012). *www.jornada.unam.mx*. Recuperado el 27 de junio de 2013, de <http://www.jornada.unam.mx/2012/12/18/politica/002n1pol>
- Salazar, C. (28 de junio de 2013). *OPEAL*. Recuperado el 8 de marzo de 2014, de http://www.opeal.net/index.php?option=com_content&view=article&id=517&catid=100&Itemid=139
- Salomón, L. (2011). Honduras: Inseguridad, Estado y Sociedad. *Indice de Seguridad Pública y Ciudadanía en América Latina. El Salvador, Guatemala y Honduras*. www.resdal.org.
- Santamaría, G. (2013). *La difusión y contención del crimen organizado en la subregión México-Centroamericana*. Wilson Center.
- Secretario General Naciones Unidas. (2013). *Armas Pequeñas S/2013/503*. Organización de Naciones Unidas.
- Seelke, C. R., Wyler, L., Beittel, J., & Sullivan, M. (2011). *Latin America and the Caribbean Illicit Drug Trafficking and US counterdrug programs*. Congressional Research Service.

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

- Sepúlveda, I., & Alda, S. (2008). *La administración de la defensa en América Latina* (Vol. 1). (I. U. UNED, Ed.) Madrid: UNED.
- Sérgio de Lima, R., & de Mattos Ricardo, C. (junio de 2011). Gobiernos locales, democracia y seguridad pública en Brasil. *Urvio. Revista Latinoamericana de seguridad ciudadana*.(9).
- Servitja Roca, X. (2012). *El crimen organizado en México y el "Triángulo Norte" durante el mandato de Felipe Calderón*. Instituto Español de Estudios Estratégicos.
- Smutt, M. (2013). *Una mirada a El Salvador*. Washington D.C.: Wilson Center.
- Strattfor Global Intelligence. (2010). *Special report: Venezuela's control of the armed forces*.
- Sullivan, M. (2011). *Venezuela: Issues for Congress*. Congressional Research Service.
- Szabó, I., Garzón, J. C., & Muggah, R. (2013). *Violencia, drogas y armas. ¿Otro futuro posible?*.
- Ten Velde, L. (2012). *The northern Triangle's drugs-violence nexus: The role of the drugs trade in criminal violence and policy responses in Guatemala, El Salvador and Honduras*. Amsterdam: Transnational Institute.
- terra.com. (s.f.). *noticias.terra.com.mx*. Recuperado el 27 de junio de 2013, de <http://noticias.terra.com.mx/mexico/pena-nieto-primeros-100-dias-de-gobierno/pena-nieto-presenta-politica-de-seguridad,7057822ab6aab310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html>
- Thale, G. (2006). *Las pandillas juveniles centroamericanas y las respuestas de Mano Dura*. Alcala de Henares: Revista de Pensamiento Iberoamericano.
- Torrijos, V. (2009). *El relevo ministerial en la política colombiana de seguridad y defensa: ¿nueva agenda?¿nuevas amenazas?*. ARI 123/2009.
- Transparency International. (2013). *Corruption Perceptions Index*.
- United Nations Office on Drug and Crime. (2011). *World Drug Report*. United Nations.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2007). *Crime and Development in Central America: Caught in the crossfire*.
- UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito). (2011). *Global Study on Homicide. Trends, Contexts, Data*. . Viena: UNODC.
- UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito). (2012). *Delincuencia organizada transnacional en Centroamérica y el Caribe*. Viena.

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

- UNODC (Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito). (2012). *Delincuencia Organizada Transnacional en Centroamérica y el Caribe: Una Evaluación de las Amenazas*. Viena: UNODC.
- US Department of State. (2010). *Countries on Terrorism Report*. Recuperado el 7 de abril de 2012, de <http://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2010/index.htm>.
- Vargas Velasquez, A. (1 de junio de 2011). Política de Seguridad de Santos. *El Colombiano*.
- Vargas Velásquez, A. (11 de febrero de 2012). *América Latina en movimiento*. Recuperado el 19 de marzo de 2012, de alainet.org: <http://alainet.org/active/52753&lang=es>
- World Bank. (2011). *Crime and Violence in Central America. A development challenge*. World Bank.
- Zavaleta Betancourt, J. A. (2012). *La inseguridad y la seguridad ciudadana en América Latina*. Buenos Aires: CLACSO.
- Zavaleta Betancourt, J. A. (2012). *La inseguridad y seguridad ciudadana en América Latina*. Buenos Aires: CLACSO.
- Zepeda Lecuona, G. (diciembre 2010). Manejo diferenciado de conflictos y nueva gestión de la seguridad pública. En E. Arellano Trejo, & A. Alvarado, *Políticas de Seguridad Pública* (págs. 141-161). Mexico: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública.

Violencia y criminalidad en Latinoamérica: Análisis comparativo del Triángulo Norte, Costa Rica y Nicaragua.

Trabajo de Fin de Máster

Jaime José Paterson Pardo

SIGLAS Y ACRÓNIMOS

ALBA	Alianza Bolivariana para América
BID	Banco Iberoamericano de Desarrollo
CIDIG	Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala
FAS	Fuerzas Armadas
IDH	Índice de Desarrollo Humano
M-18	Mara Salvatrucha
MS-13	Mara de la Calle 13
ONG	Organización No Gubernamental
PIB	Producto Interior Bruto
PNC	Policía Nacional Civil, en el Salvador y Guatemala
PNUD	Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
POLSEPAZ	Política de Estado en Materia de Seguridad Ciudadana y la Paz Social en Costa Rica
UNODC	Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito